

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

62ª REUNIÓN — 27ª SESIÓN ORDINARIA — 23 DE OCTUBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor CARLOS F. RUCKAUF

y del presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

### PRESENTES

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BAUM, Daniel  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto Ramón  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENECHINI, Javier R.  
MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.

UDÍN, Ernesto R.  
PARDO, Angel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José M.  
SALA, Osvaldo R.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio  
VERNA, Carlos A.  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVEJDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES. CON AVISO:

GALVÁN, Raúl A.  
MARANGUELLO, Pedro C.  
OYARZÚN, Juan C.  
SALUM, Humberto E.  
SOLANA, Jorge D.  
VACA, Eduardo P.  
VAQUIR, Omar M.

### EN COMISION:

LOSADA, Mario A.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

valores existentes en la Argentina que hayan pertenecido al Régimen Nacional Socialista Alemán. (S.-2.210/96). (Pág. 5972.)

LXXXVI. Proyecto de declaración del señor senador Menem por el que se repudian ataques contra el Cementerio Israelita de La Tablada, Buenos Aires. (S.-2.211/96). (Pág. 5974.)

LXXXVII. Proyecto de resolución del señor senador Maglietti por el que se repudia y condena el atentado contra el Cementerio Israelita de La Tablada, Buenos Aires. (S.-2.212/96). (Pág. 5974.)

LXXXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se establece la prohibición del consumo de tabaco en edificios de la administración pública nacional correspondiente a los tres poderes del Estado (S.-2.213/96). (Pág. 5975.)

LXXXIX. Proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que se dispone la realización de un acto en conmemoración del 25º aniversario de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (S.-2.214/96). (Pág. 5976.)

XC. Proyecto de comunicación del señor senador López por el que se solicita el giro a las provincias de los fondos adeudados en concepto de coparticipación federal (S.-2.215/96). (Pág. 5977.)

XCI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Sala y Mac Karthy por el que se solicita la adopción de medidas para la erradicación del flagelo denominado hantavirus en la región noroeste del Chubut y sudoeste de Río Negro (S.-2.216/96). (Pág. 5978.)

XCII. Proyecto de comunicación del señor senador López y otros señores senadores por el que se solicita se instruya a los representantes del Ministerio Público para promover acciones respecto de los imputados en las manifestaciones del ex ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos (S.-2.217/96). (Pág. 5979.)

XCIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la declaración de interés nacional del test de detección directa para toxoplasmosis (S.-2.218/96). (Pág. 5979.)

XCIV. Proyecto de resolución de los señores senadores Zalazar y Bittel por el que se repudia una actitud de funcionarios de la Empresa Provincial de Energía (Secheep) del Chaco (S.-2.219/96). (Pág. 5981.)

XCV. Proyecto de resolución del señor senador Zalazar por el que se repudia el atentado contra un cementerio judío de La Tablada, Buenos Aires (S.-2.220/96). (Pág. 5981.)

XCVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Fernández Meijide y Losada por el que se repudian las profanaciones de tumbas en el cementerio de La Tablada, Buenos Aires (S.-2.222/96). (Pág. 5982.)

XCVII. Proyecto de comunicación del señor senador Humada por el que se solicitan informes acerca de anomalías en establecimientos carcelarios por consumo de psicofármacos y alcohol (S.-2.223/96). (Pág. 5982.)

XCVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca de la venta en nuestro país de un somnífero prohibido en los Estados Unidos de América (S.-2.224/96). (Pág. 5983.)

XCIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de López y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre la gravedad del accidente ecológico producido en la cuenca hídrica del Potosí, Bolivia (S.-2.231/96). (Pág. 5983.)

3. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 5984.)

4. Consideración del dictamen de la comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como vicepresidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado Martín Lagos. Se aprueba. (Pág. 5986.)

5. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en tribunal de juicio político. (Pág. 5987.)

6. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Comunicaciones y de Defensa Nacional en dos proyectos: uno de resolución del señor senador León; y el otro de comunicación del señor senador Ulloa y otros señores senadores por los que se solicita se deje sin efecto el proceso de licitación del control del espectro electromagnético (S.-419 y 1.422/96). Se rechazan. (Pág. 5987.)

7. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías sobre hábeas data, en siete proyectos de ley: el primero, del señor senador Menem; el segundo, de la señora senadora Fernández Meijide; el tercero, del señor senador López; el cuarto, del señor senador Berhongaray; el quinto, del señor senador Romero Feris; el sexto, del señor senador Alasino; y el séptimo, del señor senador...

timo, venido en revisión de la **Cámara de Diputados** (S.-1.384 y 2.006/95; 111, 230, 563 y 773/96; y C.D.-30/96). Se aprueba otro proyecto de ley. (Pág. 5993.)

8. **Manifestaciones de varios señores senadores** acerca de un proyecto sobre el "hanta virus". Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 6086.)

9. **Apéndice:**

**Sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 6087.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 41 del miércoles 23 de octubre de 1996:

**Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.

# 1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por Santa Fe del Partido Justicialista don Jorge José Massat a izar la bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Massat procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

# 2

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se va a dar cuenta de la lista de asuntos entrados desde la última sesión. Corresponde que los señores senadores formulen las consideraciones que estimen pertinentes.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (*Lee*):

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

# I

## Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 26 de septiembre por el que se autoriza a los señores senadores Maya, Villaverde y Branda para viajar a Washington, Estados Unidos de América, del 26 de septiembre al 1º de octubre inclusive, para integrar la delegación oficial que participará de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional (D.P.-707/96). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 10 de octubre por el que se autoriza a los señores senadores Galván, de la Rosa y Solana para viajar a La Habana, Cuba, desde el 16 al 21 de octubre inclusive, para participar en diversas reuniones de comisiones del Parlamento Latinoamericano (D.P.-722, 723 y 724/96). (A sus antecedentes.)

# II

## Aprobación del Convenio y del Protocolo Adicional entre la Argentina y Paraguay en materia de Salud Fronteriza. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 16 de octubre de 1996.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Paraguay en Materia de Salud Fronteriza, suscrito en Asunción —República del Paraguay— el 30 de octubre de 1992 y el protocolo adicional al Convenio de Salud Fronteriza entre la República Argentina y la República del Paraguay, suscrito en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1995.

En virtud del Convenio citado, ambos gobiernos, conscientes de los problemas de salud, nutrición, educación alimentaria, sanidad ambiental, atención hospitalaria, que afectan las áreas de fronteras entre los dos países, acordaron establecer acciones conjuntas, estableciendo programas de vacunación preventiva, de control y vigilancia epidemiológica, para promover la cooperación técnica y coordinar acciones para el control de portadores de enfermedades transmisibles.

Con respecto a la nutrición y educación alimentaria, la realización de investigaciones epidemiológicas sobre aspectos nutricionales, el intercambio de información, la formación de profesionales y la promoción de planes conjuntos están contemplados como acciones conducentes a fin de aliviar la situación planteada en ese aspecto en las regiones fronterizas.

Considerando que el flujo migratorio entre ambos países es considerable, se prevé desarrollar sistemas de control sanitario de los inmigrantes, su núcleo familiar, animales domésticos y enseres con los que se desplazan. A tal efecto, se prevé la creación de un certificado sanitario expedido por las autoridades oficiales de cualquiera de los dos países.

Con respecto al medio ambiente; teniendo en cuenta específicamente la calidad de las aguas de los cursos fluviales fronterizos, se acuerda fomentar, mediante acciones políticas coordinadas, las normas que definan los niveles mínimos de calidad hídrica, sus parámetros físicos, químicos y biológicos; el contralor, a través de mecanismos legales, de la efectiva vigencia del control de afluentes y usos de los recursos hídricos.

La vigilancia epidemiológica estará a cargo de la Dirección Nacional de Promoción y Protección de la Salud o el organismo que lo reemplace en el futuro, por la República Argentina y de la División General de Epidemiología o el organismo que lo reemplace en el futuro, por la República del Paraguay, así como de los organismos pertinentes responsables de las cinco provincias argentinas y las siete regiones sanitarias paraguayas limítrofes.

Ambos países acordaron la creación, a efectos de coordinar las acciones y hacer efectivo lo dispuesto por el presente Convenio, de un Comité Conjunto de Coordi-

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general

— La votación resulta negativa.

**Sr. Presidente.** — Queda rechazado el proyecto de comunicación.

7

## HABEAS DATA

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías en siete proyectos de ley sobre hábeas data: el primero, del señor senador Menem; el segundo, de la señora senadora Fernández Meijide; el tercero, del señor senador López; el cuarto, del señor senador Berhongaray; el quinto, del señor senador Romero Feris; el sexto, del señor senador Alasino; y el séptimo, venido en revisión de la Cámara de Diputados. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.208 y Complemento.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuzei).** — (Lee)

Dictamen de comisiones

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías han considerado los expedientes: S.-111/96, "Menem: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-230/96, "Fernández Meijide: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-563/96, "López: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-773/96, "Berhongaray: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-1.384/95, "Romero Feris: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-2.006/95, "Alasino: proyecto de ley sobre hábeas data"; C.D.-30/96: "Proyecto de ley en revisión sobre hábeas data" y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones generales

**Artículo 1º — Objeto.** La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos de carácter personal asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, electrónicos o manuales, para garantizar el honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a

la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

**Art. 2º — Definiciones.** A los fines de la presente ley se entiende por:

- **Datos de carácter personal:** información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- **Datos sensibles:** son los que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- **Archivo, registro, base o banco de datos:** indistintamente, designan al conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- **Tratamiento de datos:** operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos de carácter personal, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- **Responsable de archivo, registro, base o banco de datos:** persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.
- **Datos informatizados:** los datos de carácter personal sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- **Titular de los datos:** toda persona física, ciudadano argentino o extranjero, o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento de que trata la presente ley.
- **Ficha personal:** contenido de la información de una persona, que permite su identificación y definir sus antecedentes y actividades de cualquier tipo.
- **Usuarios de datos:** toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

#### CAPÍTULO II

##### Principios generales relativos a la protección de datos

**Art. 3º — Archivos de datos — Licitud.** La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren



debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establecen la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

#### Art. 4º — Calidad de los datos:

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para las que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos serán exactos y deben actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser cancelados y sustituidos, o en su caso completados, de oficio cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recabados.

#### Art. 5º — Consentimiento:

1. El tratamiento de datos de carácter personal es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, juntamente con las advertencias previstas en el artículo 6º de la presente.

2. No será necesario el consentimiento cuando:

- a) Los datos se obtengan de fuentes accesibles al público;
- b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado;
- c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono;
- d) Deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento;
- e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39, de la ley 21.523.

Art. 6º — Información. Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

- a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios;
- b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;
- c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
- d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;
- e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos.

#### Art. 7º — Categoría de datos:

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.
2. Los datos indicados en el apartado anterior sólo pueden ser recabados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros.
4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Art. 8º — Datos relativos a la salud. Los hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas y los profesionales vinculados a la ciencia médica pueden recabar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos.

#### Art. 9º — Seguridad de los datos:

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

2. No se deben registrar datos de carácter personal en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

#### Art. 10. — *Deber de confidencialidad:*

1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

#### Art. 11. — *Cesión:*

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
2. La cesión de datos a terceros debe ser comunicada a los titulares en la primera oportunidad en que ello ocurra. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
  - a) Así lo disponga una ley;
  - b) En los supuestos previstos en el artículo 5º inciso 2°;
  - c) El establecimiento del archivo responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho fichero con el de terceros. En tal caso la cesión será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justificó;
  - d) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
  - e) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos; en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
  - f) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean indistinguibles.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

#### Art. 12. — *Transferencia internacional:*

1. Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la República Argentina.
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
  - a) Colaboración judicial internacional;
  - b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica;
  - c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;
  - d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;
  - e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

### CAPÍTULO III

#### *Derechos de los titulares de datos*

Art. 13. — *Derecho de información.* Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros bases o bancos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

#### Art. 14. — *Derecho de acceso:*

1. El titular tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes.
2. El requerido deberá asegurarse de la identidad del peticionante y cumplir con dicha obligación dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimará insuficiente, quedará expedita la acción especial de amparo prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

#### Art. 15. — *Contenido de la información:*

1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.

2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
3. El acceso, a opción del titular, podrá instrumentarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin.

**Art. 16. — Derecho de rectificación, actualización o cancelación:**

1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.
2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, cancelación o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de verificado el error o falsedad.
3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de amparo prevista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
5. La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.
7. Los datos de carácter personal deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.

**Art. 17. — Excepciones:**

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos, pueden denegar el acceso, rectificación o la cancelación en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
2. La información sobre datos de carácter personal también puede ser denegada, cuando de tal

modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.

**Art. 18. — Comisiones legislativas.** Las comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso de la Nación, o las que las sustituyan, tendrán acceso a los archivos o bancos de datos referidos en el artículo 23 inciso 2 por razones fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales comisiones.

**Art. 19. — Gratuidad.** La rectificación, actualización o cancelación de datos de carácter personal inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

**Art. 20. — Impugnación de valoraciones personales:**

1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración sobre conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos de carácter personal que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.
2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos.

## CAPÍTULO IV

### *Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos*

**Art. 21. — Registro de archivos de datos. Inscripción.**

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
  - a) Nombre y dirección del responsable;
  - b) Características y finalidad del archivo;
  - c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
  - d) Forma de recolección y actualización de datos;
  - e) Destino de los datos y entidades a los que pueden ser transmitidos;
  - f) Modo de interrelacionar la información registrada;

- g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
  - h) Tiempo de conservación de los datos;
  - i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos de carácter personal de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

**Art. 22. — Archivos, registros o bancos de datos públicos:**

- 1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, y anotado en el correspondiente registro que a tal fin habilite el organismo de control.
- 2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:
  - a) Características y finalidad del archivo;
  - b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
  - c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
  - d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos de carácter personal que contendrán;
  - e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
  - f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
  - g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación.
- 3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.
- 4. La cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público, no podrá efectuarse a archivos, registros o bancos de datos privados sin el consentimiento del titular de los datos o en virtud de una ley que lo autorice.

**Art. 23. — Supuestos especiales:**

- 1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos de carácter personal que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los ban-

cos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquéllos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.

- 2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
- 3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

**Art. 24. — Archivos, registros o bancos de datos privados.** Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21.

**Art. 25. — Prestación de servicios informatizados de datos de carácter personal:**

- 1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aún para su conservación.
- 2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

**Art. 26. — Prestación de servicios de información crediticia:**

- 1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
- 2. Pueden tratarse igualmente datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento

miento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos de carácter personal que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos diez años.

Art. 27. — *Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad:*

1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso, que comprenderá también los datos que hubieren sido dados de baja y la fuente de donde han sido obtenidos, sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.

Art. 28. — *Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas:*

1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos, no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna en particular.

## CAPÍTULO V

### Control

Art. 29. — *Órgano de control.* El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el

cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
- b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
- c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
- d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registro o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
- e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que se le requieran;
- f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
- g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley.

Art. 30. — *Códigos de conducta:*

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos de carácter personal que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.
2. Dichos códigos deberán ser inscritos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

## CAPÍTULO VI

### Sanciones

Art. 31. — *Sanciones administrativas:*

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de usuarios públicos; en cualquier caso, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el orga-

nismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación de la autorización del archivo, registro o banco de datos.

2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción.

#### Art. 32. — *Sanciones penales:*

1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:

1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar maliciosamente datos falsos en un archivo de datos de carácter personal.
2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero maliciosamente información falsa contenida en un archivo de datos de carácter personal.
3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación penal para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

2. Incorpórase como artículo 157 bis del Código Penal, el siguiente:

1. Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años el que maliciosamente e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos de carácter personal.

## CAPÍTULO VII

### *Acción especial de amparo*

#### Art. 33. — *Legitimación activa:*

1. La acción de amparo especial de protección de los datos personales (o de hábeas data) procederá para tomar conocimiento de los datos de carácter personal almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, así como también su finalidad y los casos en que se presume la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata y de la inclusión de aquellos que tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
2. Podrá ser ejercida por el afectado y sus sucesores, por sí o por intermedio de apoderado.

3. Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.

4. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante del Defensor del Pueblo.

Art. 34. — *Legitimación pasiva.* La acción procederá respecto de los usuarios de datos públicos o privados. En este último supuesto procederá si tuviera la posibilidad de generar y proveer informes.

Art. 35. — *Competencia.* Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Procederá la competencia federal:

- a) Cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y
- b) Cuando los archivos de datos se encuentren interconectados, en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

Art. 36. — *Procedimiento aplicable.* La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarisimo.

#### Art. 37. — *Requisitos de la demanda:*

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos, así como el nombre del responsable del mismo.

En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.

2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta, de qué modo afecta sus derechos, y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.
3. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
4. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Art. 38. — *Trámite:*

1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Art. 39. — *Confidencialidad de la información:*

1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el supuesto en que se afecte el secreto de las fuentes de información periodística.
2. Los archivos, registros o bancos de datos públicos sólo podrán invocar las excepciones autorizadas por la presente ley, o los establecidos en una ley específica. En tales casos deben acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal.

El juez apreciará con criterio restrictivo toda oposición al envío de informes sustentado en tales causas, debiendo expedirse dentro del segundo día de planteada la excepción.

La resolución judicial que insista con la remisión de los datos será apelable dentro del segundo día de notificada. El escrito de apelación será fundado.

3. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En el último caso, será elevado el expediente al tribunal de alzada dentro del día de ser concedido.

Art. 40. — *Contestación del informe.* Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

Art. 41. — *Sentencia:*

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida —en su caso— la prueba, el juez dictará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, cancelada, actualizada o declararla confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.
4. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, que deberá llevar un registro al efecto.

Art. 42. — *Ambito de aplicación.* Las normas de la presente ley contenidas en los capítulos I, II, III y IV, y artículo 32 son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional.

Se invita a las provincias a adherir a las normas de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.

La jurisdicción federal registrará respecto de los registros, archivos, bases o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, nacional o internacional.

Art. 43. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

Art. 44. — *Disposición transitoria.* Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme con lo dispuesto en el artículo 21 dentro del plazo que a tal efecto establezca la reglamentación.

Art. 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de septiembre de 1996.

Jorge R. Yoma. — Eduardo Menem. —  
Augusto Alasino. — Angel F. Pardo. —  
Julio C. Humada. — Deolindo F. Bittel.  
— Julio A. San Millán. — Ernesto R.  
Oudín. — José O. Figueroa. — Héctor  
M. Maya. — Alberto M. Tell. — Juan  
R. Aguirre Lanari.

En disidencia parcial:

José Genoud. — Raúl A. Galván. — Alcides  
H. López. — Antonio T. Berhongaray. —  
Conrado H. Storani. — Graciela Fernández  
Meijide.

En disidencia:

Pedro G. Villarroel.

Disidencia parcial de la senadora  
Graciela Fernández Meijide

Señor presidente:

Ante todo deseo destacar mi entera satisfacción por la existencia de una voluntad contemporizadora en la comisión, ligada al tratamiento del instituto en cuestión. No sólo la apreciación de las diversas propuestas legislativas de diputados y senadores, sino la permeabilidad manifestada en esta comisión para la elaboración de los sucesivos predictámenes, me sugieren alentar el presente estilo de trabajo, que en definitiva, fortalecerá un republicano criterio interpretativo de la reforma constitucional realizada en 1994.

No obstante ello, me permito disentir con algunos aspectos puntuales del presente dictamen de comisión sugiriéndose a la vez, ciertos cambios de redacción, como ser:

Sobre el artículo 2: (datos sensibles).

En cuanto a la definición de datos sensibles sería conveniente agregar al final de su enumeración la expresión

"y similares", pues si bien la enumeración de lo que es dato sensible es amplia en este dictamen, sigue resultando taxativa. Esto mismo cabe para la enunciación existente en el artículo 33.

En el artículo 10 inciso 2º (relevamiento del deber, de confidencialidad).

Creemos necesario agregar un párrafo que expresamente establezca que el relevamiento del secreto profesional sólo podrá efectuarse por resolución judicial. Tengamos presente que las expresiones utilizadas en este artículo para fijar las causales del relevamiento del secreto profesional como ser "seguridad pública", "defensa nacional" y "salud pública" son per se vagas, imprecisas.

Artículo 11 punto 3 punto b).

No se debe poder transferir datos a terceros sin consentimiento del titular con la misma amplitud del artículo 5º punto 2. Esto permitiría por ejemplo, que los datos recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, sean transferidos a particulares (v. gr. información de la DGI) o datos que importen ser mantenidos en reserva como la dirección o el teléfono de una persona, en el caso del teléfono especialmente de los de tipo celular, pues en este supuesto importaría una verdadera disposición sobre los bienes del titular de los datos.

Artículo 12 inciso b) (transferencia internacional de datos por investigación epidemiológica).

Sería necesario agregar un párrafo que también condicione la transferencia internacional de datos mediante un mecanismo de disociación adecuada y que torne indistinguible al titular del dato. Este agregado de texto posibilitará mantener una congruencia en todo el articulado de la ley, es decir, entre la causal descripta en el reciente artículo e inciso en correlación, supuesto que se contempla en el punto e) inciso 3 del artículo 11 (cesión) incorporado al presente dictamen.

Artículo 14 (derecho de acceso).

En su inciso 2 habría que mejorar la redacción, contemplándose también la denegatoria de acceso por invocación de las causales de excepción establecidas en el artículo 17. De lo contrario se podría facilitar una interpretación restrictiva en sede judicial sobre el alcance del derecho de acceso y los motivos de fundamentación del recurso de amparo. De introducirse esta modificación podríamos armonizar la nueva redacción, con el sentido establecido en el supuesto contemplado en el artículo 39 inciso 2 del dictamen (confidencialidad de la información).

La modificación que sugerimos es la siguiente: artículo 14 inciso 2 ... vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido alegándose o no las causales de excepción establecidas en el artículo 17, o si evacuado el informe éste se estimara insuficiente, quedará expedida la acción especial de amparo prevista en esta ley.

Finalmente cabe acordar sobre este artículo que la redacción del presente dictamen, no especifica si los sucesores —y hasta qué grado— pueden hacer uso del derecho que asiste en este artículo, lo mismo sobre la presentación por medio de representantes legales (tutores, curadores y apoderados). Además está previsto en el artículo 33 inciso 2 para la acción de amparo cual sería absurdo, que no pueda pedir el dato quien puede

ejercer la acción de amparo. Por otra parte aún en este último supuesto no se encuentra prevista la posibilidad de presentación por medio de representantes legales de los incapaces, por lo cual éstos quedarían afuera de las regulaciones de la ley (menores, insanos, etcétera).

Artículo 17.

Si bien la legislación comparada los recepta, nuestra Constitución Nacional reformada no incluye datos ligados a la "seguridad nacional", por lo que incluirlos en la ley constituye una violación del derecho a la intimidad. Además, no debemos dejar de tener presente el problema de la vaguedad conceptual propia de este tipo de expresiones.

La problemática de la vaguedad conceptual de los términos podría posibilitar una arbitraria restricción del ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.

Artículo 23 (*supuestos especiales*).

Creemos que las modificaciones introducidas al dictamen en lo que se refiere a este artículo, y a partir de las observaciones formuladas por los representantes de la SIDE acerca de facilitar al referido organismo, la colección de datos de personas que, eventualmente, puedan integrar marcos referenciales afectantes de la seguridad y defensa de la Nación (ejemplo: terrorismo, narcotráfico, etcétera) no son incompatibles con el sentido que tuvo la redacción original del dictamen de comisión. Sería conveniente preservar la redacción mantenida en la media sanción de la Cámara de Diputados que condiciona el tratamiento de datos en estos supuestos especiales, a la prevención dado un peligro real y cierto. No es exacto que estas expresiones generen controversias impredecibles respecto a cómo se encuadra la existencia o no de ese peligro, que debe ser real y cierto. La alusión al peligro real y cierto tiene que ver con situaciones fácticas que efectivamente evidencian una posible afectación de bienes jurídicos tutelados penalmente a partir del principio de la tipicidad.

Si la regulación legislativa sobre tratamiento de datos, posibilita la manipulación de información ante eventuales marcos referenciales de organizaciones delictivas por parte de los servicios de inteligencia del Estado, se terminaría legitimando la ruptura de una tradición argentina de derecho penal liberal de garantía, basado en la acción concreta (artículo 19 de la Constitución Nacional) para pasarse a un derecho penal de autor, propio de los estados totalitarios.

Por todo lo expuesto, es que insistimos con la redacción —en este punto— del artículo 26 del proyecto venido de la Cámara de Diputados.

*Graciela Fernández Meijide.*

**Disidencia total del senador Pedro Guillermo Villarroel**

Señor presidente:

El presente dictamen tiene por objeto fundar mi disidencia con el proyecto de ley reglamentario de la acción de hábeas data (artículo 43 último párrafo de la Cons-



titución Nacional). Brevemente, y más allá de los argumentos que se expondrán en el debate, las objeciones generales sobre el proyecto propuesto son las siguientes:

—Técnicamente, no se propone un proyecto de ley sobre hábeas data, sino la regulación del régimen legal de los bancos de datos, marco dentro del cual se incorpora el hábeas data. Dicha técnica legislativa configura una norma innecesariamente extensa y farragosa, que atenta contra las exigencias de claridad y sencillez que hubiera requerido la reglamentación de la garantía constitucional. Lo mismo debe decirse del lenguaje empleado en la redacción del proyecto.

—Las excepciones previstas en materia de exigencia del consentimiento para el tratamiento de datos personales son demasiado amplias, desvirtuándose así el principio.

—No se establecen sanciones ante la falta de información a los titulares de los requisitos exigidos por la ley.

—Se autoriza el recabamiento de datos sensibles cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley, hecho que permite al legislador vaciar de contenido el principio.

—También en materia de consentimiento para la cesión de datos personales, las excepciones establecidas son tan amplias que desvirtúan el principio, que es el de su exigencia.

—Se establecen requisitos irrazonables para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización y cancelación de los datos personales. Particularmente graves son las excepciones para el ejercicio de esos derechos, que incluyen la posibilidad de denegación en supuestos tan laxos como la protección de la defensa de la Nación, el orden y la seguridad pública, o la protección de derechos e intereses de terceros. La amplitud de tales criterios significa prácticamente la denegación del ejercicio de los derechos examinados. En el mismo sentido, los requisitos a los que se somete el tratamiento y cancelación de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública son de imposible control, ya que precisamente en estos supuestos se deniega el derecho al acceso.

—La ley establece una serie de requisitos de inscripción de bancos de datos. Sin embargo, no dispone expresamente que los bancos de datos existentes quedan también sujetos a los requisitos y obligaciones de inscripción, hecho que convalidaría la existencia de todo banco de datos anterior a la sanción de la ley, aunque no haya cumplido con los parámetros fijados por ella.

—Una grave falencia del proyecto de ley es la de no definir correctamente el órgano de control que ella misma crea, difiriendo aspectos fundamentales de su regulación a la reglamentación. La ley no define aspectos tan relevantes como su ubicación institucional, su conformación, su estructura jerárquica, la independencia de sus miembros, sus atribuciones para requerir información de otros órganos, etcétera. Esta deficiente regulación abre una gran incertidumbre respecto a las posibilidades reales de ejercicio del derecho de acceso y rectificación de la información, en especial cuando se trata de bancos de datos públicos.

—Por último, se establecen requisitos procedimentales injustificados para la presentación de la acción de hábeas data (llamada acción especial de amparo). Entre ellos, la carga de demostrar que la información es discriminatoria, y de qué forma afecta los derechos del actor, exigencias a todas luces innecesarias ya que para el tratamiento de información prohibida o errónea constituye de por sí una violación del derecho establecido por el artículo 43 último párrafo de la Constitución Nacional.

En particular, las objeciones al proyecto son las siguientes:

Artículo 1º: es innecesaria la disyunción “electrónicos o manuales”.

Artículo 2º:

—En la definición de “datos de carácter personal”, es innecesaria la disyunción “determinadas o determinables”.

—En las definiciones de “archivo” y “tratamiento de datos”, es innecesaria la disyunción “electrónicos o no”. En la última, debe cambiarse el término “relacionamiento” por “relación”.

—Es inconveniente el empleo del mismo término para designar al “titular” de un banco de datos y al “titular” de un archivo, uso que se presta a confusión.

—En la definición del titular de los datos, se habla de “ciudadano argentino o extranjero”, cuando correspondería hablar de “habitante”. La norma constitucional habla de “toda persona”.

—En la definición de usuario de datos, es innecesaria e impropia la expresión “a su arbitrio”.

Artículo 3º: la redacción del artículo es defectuosa. Si se refiere a la formación de archivos, es evidente que será lícita cuando se inscriba debidamente. Si se refiere a la operación del archivo, también es obvio que será lícita si se ajusta a la ley. En ambos casos, una norma semejante es innecesaria.

Artículo 4º: “adecuado” y “pertinente” son sinónimos, y por lo tanto la mención de ambos requisitos es redundante. La norma parece prohibir además la recolección de datos descalificada como “desleal y fraudulenta”, sin definir estos términos. Evidentemente, tal descalificación será adecuada cuando la recolección se realice en forma contraria a los requisitos de la ley, lo que hace innecesarias las menciones anteriores.

Artículo 5º:

—Inciso 1: debe reemplazarse la expresión “otro medio que permita se le equipare”, por “otro medio fehaciente”.

—Inciso 2: las excepciones frente a las cuales el consentimiento es innecesario son demasiado amplias:

a) En lugar de “fuentes accesibles al público”, debería decirse “fuentes de acceso público irrestricto”;

b) la excepción es insostenible, ya que su amplitud (“cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado”) brinda al Estado en forma casi irrestricta la posibilidad de no recabar el consentimiento del titular de los datos.

Artículo 6º: subrepticamente, se introduce la noción de respuestas de carácter "obligatorio", y de consecuencias de la negativa a responder. La noción es confusa. Si se la vincula con el artículo 6º, parece referirse más bien a datos que pueden ser objeto de tratamiento, y datos que no pueden ser objeto de tratamiento, más que a respuestas "obligatorias" o "facultativas". Sin embargo, mal pueden preguntarse respecto a datos cuyo tratamiento es prohibido por la ley. La norma no establece consecuencias ni sanciones por el incumplimiento de los requisitos establecidos en ella.

#### Artículo 7º:

—Inciso 2: amén de prohibir que se obligue a alguien a proporcionar datos sensibles, debe prohibirse también el tratamiento de dichos datos, aunque no se obtengan del titular. La excepción que se establece ("cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley") es injustificada y peligrosa: la prohibición debe ser absoluta. Si se suma a esta excepción la amplia posibilidad de obtener datos sin el consentimiento del titular, las posibilidades de vulneración del derecho a la intimidad son enormes, y poco habría modificado al respecto la reforma constitucional de 1994.

—Inciso 3: en lugar de "revelen", debe decirse "revele", ya que la proposición subordinada califica a "información". El agregado referido a la Iglesia Católica, asociaciones religiosas y organizaciones políticas y sindicales resulta irrelevante, ya que sin registrar la voluntad de pertenencia de una persona a estas organizaciones, su participación en ellas es imposible. Es evidente que los registros de estas organizaciones no constituyen bancos de datos destinados a proporcionar informes, y, por ende, quedan fuera de las obligaciones impuestas por la ley.

Artículo 9º: no se define el término "desviaciones", cuyo significado merece ser determinado en el artículo 2º. Son innecesarias además las expresiones "intencionales o no", y "ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado". En el inciso 2, en lugar de "No se deben registrar", debe decirse "no deben registrarse".

Artículo 10: no se establece quién autorizaría a revelar al obligado del deber de confidencialidad. ¿Se trata de la autoridad administrativa o judicial?

Artículo 11: la regulación de la cesión de datos es defectuosa, y desvirtúa los principios que parece establecer en el primer inciso.

—Inciso 1: poco dice la expresión "los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario", la cual, además de disponer algo obvio, no establece ninguna limitación, ya que la medida del interés legítimo del cedente y del cesionario será determinada por ellos mismos.

—Inciso 2: donde dice "la cesión de datos a terceros" debe decir "la intención de ceder datos a terceros", ya que, de lo contrario, el consentimiento requerido llega tarde, es decir, después de producida la cesión.

—Inciso 3: las excepciones a la exigencia del consentimiento del titular de los datos en caso de cesión son amplísimas, y ello desvirtúa absolutamente la importancia del consentimiento. Además, la norma incurre en redundancias. El inciso a) autoriza como excepción los casos en que una ley lo exija, con lo que se da pie al legislador a derogar el requisito cuantas veces quiera. El inciso b) remite al artículo 5º, inciso 2, hecho que, además de ampliar de modo exagerado los supuestos en los que no se exige el consentimiento, supone defectos de técnica legislativa. Como hemos visto, uno de los supuestos del artículo 5º inciso 2) (el b), se refiere a los casos en los que se recaben datos para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, lo que autoriza prácticamente al Estado a no requerir nunca el consentimiento del titular de los datos. Por otro lado, el supuesto d) del artículo 5º inciso 2 (excepción fundada en una relación contractual), repite el contenido del inciso c) de este artículo 6º inciso 3. Del mismo modo, los incisos d) y e) del artículo 6º inciso 3 quedan comprendidos en el ya referido supuesto del artículo 5º inciso 2 b). Por último, los incisos e) y f) del artículo 6º inciso 3 hablan de un proceso de "disociación" de la información, término que debería ser definido en el artículo 2. En resumen, el establecimiento de excepciones de tal amplitud implica desvirtuar el principio de exigencia del consentimiento de tal modo que prácticamente deja de ser la regla.

#### Artículo 12:

—Inciso 2 d): parece autorizarse al Estado a adoptar tratados internacionales que permitan la transferencia de datos de carácter internacional hacia países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la Argentina. Lo que debe hacer la norma justamente es vedar esa posibilidad, y no establecer que la firma de tratados contrarios a la protección establecida por la ley prevalecen por sobre ésta.

—Inciso 2 e): este inciso fue agregado a instancias de los representantes de los organismos de inteligencia. La solución es innecesaria y desacerada: la posibilidad de cooperación internacional ya estaba prevista en los incisos a) (colaboración judicial internacional) y d) (transferencia de datos prevista en tratados internacionales). Esta nueva variante permite la realización de acuerdos internacionales a los propios organismos de inteligencia, sin las garantías formales que supone la existencia de un tratado internacional o la concreta investigación realizada a partir de una causa judicial.

#### Artículo 14:

—Inciso 1: la norma habla de los "bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes". La redacción se presta a confusión: debería hablarse de los "bancos de datos públicos y de los privados destinados a proporcionar informes", ya que, de acuerdo a la norma constitucional, el derecho de acceso se refiere a todo banco de dato público.

—Inciso 2: en lugar de establecerse que "(e) 1 requerido deberá asegurarse de la identidad del peticio-

nante", debe decirse que "(e) el peticionante deberá acreditar su identidad". Además de ello, si bien en el caso de bancos de datos privados es pertinente la "intimación fehaciente" de la que habla el artículo en el supuesto de bancos de datos públicos dicha exigencia es totalmente innecesaria, ya que basta con la iniciación de la respectiva petición administrativa.

— Inciso 3: es absolutamente injustificado el sujetar el ejercicio del derecho de acceso a condiciones temporales, asignando la carga de demostrar un interés legítimo al peticionante en caso de pretender ejercerlo antes del plazo establecido. El costo o la molestia de repetir el mismo informe es mínimo, y el acceso constante significa una medida de contralor disuasora contra la posibilidad de tratamiento de datos prohibidos u otras irregularidades. Por otro lado, será la propia administración o banco de datos privado el que califique *a priori* la existencia de un interés legítimo suficiente, hecho que generará controversias judiciales innecesarias.

#### Artículo 15:

— Inciso 3: la expresión "medios de imagen" es poco ortodoxa, siendo innecesaria su mención dado el carácter genérico de la expresión "u otro idónea a tal fin".

Artículo 16: la regulación de este artículo es deficiente, sin entenderse claramente cuál es el régimen que establece. No se emplea en el artículo la categoría de datos sensibles (cfr. artículos 2º y 7º), con lo que no queda claro qué datos son susceptibles de supresión (¿todos?). Parece absurdo, por ejemplo, conceder al interesado la posibilidad de suprimir su fecha o lugar de nacimiento.

También se utilizan indistinta y sobreabundantemente los términos "supresión" y "cancelación", sin aclararse si se usan como sinónimos o si se trata de conceptos distintos. Recordemos que el término que emplea la constitución es el de "supresión".

Dada la falta de empleo de la categoría de datos sensibles, se somete a rectificación, actualización o supresión sólo a los datos "erróneos o falsos". Debe agregarse también la posibilidad de supresión de los datos sensibles, que están sujetos a una prohibición de registro (cfr. artículo 7º inciso 2), independientemente de su corrección o verdad.

Con respecto al plazo para el cumplimiento de la obligación, el dictamen final de la Comisión introdujo una modificación que empeora la situación del peticionante. De acuerdo al dictamen anterior, se habilitaba al afectado a entablar la acción de hábeas data ante el incumplimiento de la obligación por parte del responsable del banco de datos en un plazo de quince días desde la intimación fehaciente —solución que criticáramos por innecesaria— en caso de reclamo ante un banco de datos público. La modificación dispone que el afectado puede deducir la acción de hábeas data ante el incumplimiento de la obligación del responsable del banco de datos dentro de los cinco días hábiles de verificado el error o falsedad. Sin embargo, la verificación del error o falsedad queda a cargo del responsable del banco de datos —ya que a él se dirige la inti-

mación—, de modo que el incumplimiento de la verificación por parte del responsable del banco de datos, además de depender de su discrecionalidad, hace que el plazo no comience a correr jamás. Debe preferirse la situación anterior, en la que, al menos, la fecha de intimación fehaciente —o el inicio del reclamo administrativo, de acuerdo a la solución que propugnáramos para el caso de banco de datos públicos— establecía un dato cierto a partir del cual computar el plazo. La verificación del error o falsedad depende del responsable del banco de datos, y no reviste certeza alguna para el peticionante, ya que para ello depende de la comunicación que efectúe el responsable del banco de datos.

El inciso 5 agrava la confusión, ya que se establece que la supresión no procede cuando "pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos". Dicha norma se presta a múltiples críticas. En principio, la supresión de datos sensibles debe proceder en todo caso, independientemente de la consideración de ulteriores razones por el responsable del banco de datos. En segundo término, la fórmula de la excepción es sumamente ambigua, y da lugar a interpretaciones caprichosas. No se entiende cómo puede la supresión afectar los intereses legítimos del afectado, si quien pide la cancelación es el propio afectado, quien está en mejor posición para decidir cuáles son sus propios intereses que el responsable del banco de datos o un juez. Tampoco parece acertado autorizar al responsable del banco de datos a juzgar sobre la posibilidad de que la supresión cause perjuicios a terceros, como criterio para negarse a la cancelación de datos. Debería exigirse al menos la citación del o de los presuntos terceros afectados. Por último, parece inconcebible la existencia de una obligación de conservar datos prohibidos, erróneos o falsos. En suma, una deficiente técnica legislativa —falta de definición clara de qué datos pueden suprimirse— hace que se establezcan excepciones que parecen alcanzar a todo dato personal, incluso los sensibles, falsos o consignados erróneamente.

En el inciso 6, es inconveniente permitir al responsable del banco de datos proveer información sujeta a un procedimiento de supresión o rectificación. ¿Cuál puede ser la finalidad de entregar información que se sabe puede ser rectificada o suprimida?

Finalmente, en el inciso 7, donde dice "relaciones contractuales" debe decir "cláusulas" o "disposiciones" contractuales.

Artículo 17: se trata de uno de los artículos más graves de la ley, ya que establece excepciones tan amplias a los derechos de acceso, rectificación o supresión que los desvirtúan totalmente, tornándolos prácticamente inocuos. En principio, cabe destacar que se trata de los casos en los que el ejercicio de los derechos mencionados resulta más importante, es decir, de los casos que dan sentido al ejercicio del derecho: cuestiones vinculadas a la defensa nacional, orden y seguridad públicos, a los que se agregan además la protección de derechos o intereses de terceros. El artículo 43 de la Constitución Nacional no establece distinciones al res-

pecto del tipo de bancos de datos a los que se puede acceder, de modo que la restricción es palmariamente inconstitucional, por constituir una reglamentación irrazonable que altera el ejercicio del derecho, vulnerando el artículo 28 de la norma fundamental. La pretensión de mantener ocultos ciertos datos es propia de los Estados policiales y contrarían el principio de publicidad de los actos gubernamentales característico del estado de derecho, amén de constituir un resabio de la cultura inquisitiva. En todo caso, el sentido de la norma constitucional es clara al respecto: el derecho de acceso a los bancos de datos es amplísimo y la posibilidad de supresión se refiere a los casos de falsedad y discriminación. Mal puede un estado de derecho asumir la pretensión de conservar datos falsos o discriminatorios; por el contrario, de garantizarse el acceso, por más que el interesado logre conocer los datos que se consignan sobre él, no podrá exigir su supresión o rectificación si los mismos son verdaderos y su tratamiento no está prohibido por tratarse de datos sensibles. Además de ello, quien decide que el pedido del interesado debe ser rechazado es el propio responsable del banco de datos: siendo excesivamente laxa la definición del criterio de la excepción, no cabe más que esperar un uso constante de esta facultad, traducida en la desvirtuación absoluta del derecho. Ello implicará nuevamente una inflación de acciones judiciales innecesarias; con el agravante de que el régimen de la acción de hábeas data establecido por el artículo 39 otorga al responsable del banco de datos la posibilidad de oponerse al envío de la información requerida por el juez, bajo la sola cita de los extremos que hacen aplicable la excepción legal. Como hemos dicho, los "extremos que hacen aplicable la excepción legal" consisten en el sólo encuadramiento del caso por parte del responsable del banco de datos en un supuesto de tal laxitud como la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos o intereses de terceros. Ante este régimen, difícilmente pueda accederse a la información que, paradójicamente, puede ser errónea, falsa o de registro prohibido por tratarse de datos sensibles.

Lo mismo cabe decir sobre la excepción del inciso 2 del artículo, que autoriza la denegación cuando "se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas". Tal excepción es injustificada, no sólo por su amplitud, sino por la falta de vinculación directa del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, que se dirigen a información ya registrada en bancos de datos, es decir, producto de algún tipo de investigación o procedimiento de obtención anterior a la investigación en curso de acuerdo al inciso.

En síntesis, el artículo establece excepciones de tal amplitud, que difícilmente haya casos en los que la autoridad pública no pueda aducirlas para denegar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos.

Artículo 20: amén de los defectos de redacción, la solución que da el artículo es inconveniente, dado que para eludir la disposición legal basta con no mencionar en la motivación de una decisión judicial o acto administrativo el hecho de que está fundada únicamente en el "perfil" del interesado. Por el contrario, la norma debe disponer la prohibición de realización de definiciones de "perfil" o "personalidad" del interesado a través del tratamiento informatizado de datos. Tampoco queda claro qué significa que las decisiones judiciales o actos administrativos "impliquen apreciación o valoración de conductas humanas", expresión de tal latitud que por ejemplo, parece aplicarse a toda decisión judicial. Por último, la norma parece incorporar un nuevo supuesto de nulidad de las sentencias judiciales (cfr. inciso 2), supuesto que merecería un tratamiento legislativo más riguroso.

Artículo 21: se repite la ambigüedad señalada en ocasión de comentar el artículo 14.1. No queda claro si se trata sólo de los bancos de datos privados destinados a proporcionar datos, o si la obligación de registro se impone también sobre los bancos de datos públicos, caso en el cual debe aclararse que no les es aplicable el calificativo "destinados a proporcionar informes" que, de acuerdo a la norma constitucional sólo se refiere a los bancos de datos privados. La norma tampoco aclara qué sucede con los bancos de datos ya existentes, y sobre la necesidad de cumplir con los requisitos del artículo 22 para continuar en funcionamiento.

El inciso 2 f), que establece que el registro de archivos de datos debe comprender, entre la información requerida, la forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de datos, es sobreabundante e inconveniente. Sobreabundante, ya que dichas formas, condiciones y procedimientos surgen de la propia ley; inconveniente, ya que la norma parece autorizar a cada banco de datos a reglamentar por sí el ejercicio de los derechos comentados. A lo sumo, la norma puede exigir que el banco de datos identifique a quién deben dirigirse las peticiones de acceso, rectificación, actualización o supresión.

#### Artículo 22:

— Inciso 2 d) es innecesaria la disyunción "informatizado o no".

— Inciso 2 g) en lugar de "reclamaciones", debe decirse "reclamos".

#### Artículo 23:

— Inciso 2: se trata de otra norma que presenta serias falencias. En principio, parece tener como fin fijar límites para el tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales y de inteligencia, estableciendo como requisito la necesidad de la información para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas. Como se ve, los supuestos límites son absolutamente imprecisos: basta con que los organismos citados actúen dentro de sus facultades para que puedan tratar datos personales sin consentimiento.

to de los afectados. La redacción anterior del inciso, aunque pasible de las críticas que efectuamos más abajo, fijaba un criterio más preciso: la prevención "de un peligro real y cierto para la defensa nacional, seguridad pública o para la represión de delitos". La norma dispone además una serie de condiciones que el organismo debe cumplir en tales casos.

A pesar de la intención limitadora del artículo, la norma está destinada a ser poco efectiva. A la laxitud del criterio elegido, se suma el hecho de que será el propio organismo responsable del banco de datos el que decida en el caso concreto cuando se da el supuesto de hecho que lo autoriza a tratar datos personales sin consentimiento del afectado, es decir, que "resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas". A esto se agrega que se trata justamente de aquellos casos en los que, de acuerdo al artículo 17 inciso 1, el responsable del banco de datos puede denegar el acceso al afectado, con lo que mal puede el interesado controlar el cumplimiento de los requisitos por parte del organismo de marras. Más aún, ejercida la acción de hábeas data (amparo especial, según la llama la ley), el responsable del banco de datos puede oponerse al envío de informes al juez (cfr. artículo 39 inciso 2), bajo el alegato de existir una excepción legal, provista justamente por los artículos 17 incisos 1 y 2, y 23 inciso 2. Nótese que el responsable del banco de datos puede oponerse a enviar los informes requeridos al juez, con los que mal puede el juez controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 23 inciso 2, sin siquiera tener en vista los informes correspondientes. De modo que los requisitos establecidos por el artículo 23 inciso 2 parecen más bien un ilusorio llamado a la autodisciplina por parte de los responsables de bancos de datos, sin mayor control externo. Lo mismo puede decirse de la cancelación ordenada por el artículo 23, inciso 3, que quedará sujeta a la discrecionalidad del propio responsable del banco de datos. En síntesis, la interpretación sistemática de esta norma con los artículos 17 inciso 1 y 39 inciso 2 trae como resultado la facultad incontrolada de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales y de inteligencia de actuar en secreto y decidir por sí qué registros se llevan, sin posibilidad de acceso o rectificación por parte de las personas afectadas. Esta reglamentación es, por ende, inconstitucional, ya que establece excepciones reglamentarias donde la norma constitucional no distingue entre tipos diversos de banco de datos. Como ya hemos dicho, es justamente en estos casos cuando más se justifica el ejercicio de los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización. El presente proyecto frustra completamente el mandato del constituyente.

#### Artículo 28:

—Inciso 2: donde dice "identificar a persona alguna en particular", debe decirse "identificar a persona alguna", o "identificar a ninguna persona en particular".

Artículos 29 y 30: como dijimos en el comentario general del proyecto de ley, el defecto principal de estos artículos, que regulan el funcionamiento del organismo

de control, es el de ser absolutamente insuficientes. La creación de un órgano legal al que se asigna una importante parte del contralor de la actividad de los bancos de datos y en consecuencia un rol fundamental en la defensa de los derechos de los afectados, carece de datos mínimos como ser a qué repartición estatal pertenecerá, quién designa a sus miembros, qué garantías de independencia tendrá, con qué facultades contará para imponer sus decisiones sobre bancos de datos públicos y privados infractores, etcétera. Diferir semejante definición a la reglamentación implica un serio defecto de técnica legislativa y una renuncia por parte del organismo de contralor dependen en última instancia

Nótese además que de una estricta reglamentación del organismo de contralor dependen en última instancia las posibilidades de vigencia de un derecho individual. Esta reglamentación debería entonces realizarla el Congreso, y no delegarla graciosamente.

En particular, tampoco se explica el inciso g), en el que se autoriza al organismo a constituirse en querrelante en sede penal ante la violación de la ley. Esto importa una duplicación innecesaria de funciones estatales, ya que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de las acciones públicas previstas por la ley. La figura del querrelante tiene sentido cuando, además del interés público representado por el Ministerio Público, existe un interés privado en la aplicación de la ley penal por parte de un particular damnificado, pero no en casos como éste, en el que el organismo de control también persigue un interés público.

#### Artículo 31:

—Inciso 1: más allá de la intención del legislador, no queda claro cómo hará el organismo de control para imponer multas, clausurar o cancelar la autorización de bancos de datos públicos.

Artículo 32: debe eliminarse de los incisos 1 y 2 del artículo 117 bis proyectado del Código Penal la expresión "maliciosamente", innecesaria por tratarse de delitos dolosos. Como se sabe, la prueba de la malicia, un elemento de ánimo, dificulta de modo ostensible la aplicación de la ley penal en estos casos. En el inciso 4 proyectado, es innecesario agregar que se trata de un funcionario público "en el ejercicio de sus funciones".

Por último, también debe eliminarse del proyectado artículo 157 bis del Código Penal la expresión "maliciosa e ilegítimamente", por las razones ya dadas en el caso del término "maliciosamente", y por ser "ilegítimamente" sobreabundante; ya que de ser legítima la actuación, evidentemente la conducta no será punible por estar justificada.

Artículo 33: en lugar de denominarse la acción regulada "hábeas data" —aunque paradójicamente es el título de la ley y de los diversos antecedentes parlamentarios— se la designa como acción especial de amparo, elección inconveniente por prestarse innecesariamente a confusiones.

—Inciso 1: nuevamente se induce a confusión hablandose de "bancos de datos públicos o privados des-

tinados a proporcionar informes", mientras la norma constitucional se refiere a todos los bancos de datos públicos, y, en el caso de ser privados, a los destinados a proporcionar informes. Más grave aún es modificar injustificadamente la economía legislativa del proyecto, refiriéndose a los ya definidos datos sensibles como datos que "tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología". De acuerdo al artículo 7º, el solo registro de datos sensibles está prohibido, más allá de la intención discriminatoria o no que se le asigne. En esta norma, se endilga al peticionante la carga de probar que la inclusión de dichos datos es discriminatoria, cuando en rigor de verdad es suficiente —y mucho más sencillo— demostrar en forma objetiva la inclusión de datos sensibles —y por ende, de registro prohibido—, frente a las dificultades de probar las intenciones discriminatorias del responsable del archivo.

Artículo 35: la redacción correcta del primer párrafo sería la siguiente: "será competente para entender en esta acción, a elección del actor, el juez de su domicilio, el del domicilio del demandado, o el del lugar en el que el hecho se exteriorice o pudiera tener efecto".

#### Artículo 37:

—Inciso 1: es innecesario que el peticionante identifique el nombre del responsable del archivo, bastando con la identificación del archivo.

—Inciso 2: se trata de un requisito particularmente grave, ya que se establece sobre el peticionante la carga de probar extremos innecesarios y peligrosamente indeterminados. El inciso parte de la confusión de dos hipótesis distintas, que son la de ejercicio del derecho de acceso —para el que es suficiente señalar las razones por las cuales el peticionante presume que en un banco de datos obra información referida a su persona—, y los de supresión, actualización o rectificación —casos en los que, obviamente, el peticionante ya conoce el contenido de la información que obra en el archivo, y pretende la modificación de su tratamiento—. De modo que la norma debe establecer una disyunción entre las dos hipótesis: para la primera, basta con alegar fundamentos acerca de la posibilidad de que en un banco de datos obra información personal del peticionante. Para la segunda, en cambio, es necesario demostrar: a) que la información es falsa, b) que la información es inexacta, o c) que se trata de datos sensibles, es decir, de datos de registro prohibido de acuerdo al artículo 7º inciso 1. Para este último caso, constituye una carga excesiva y frustrante el requisito de probar por qué resulta discriminatoria la información, de acuerdo al comentario ya realizado al artículo 33 inciso 1. Mucho peor aún es exigible al peticionante que pruebe "de qué modo se afectan sus derechos", cuando la propia norma constitucional establece el derecho de acceso, rectificación, supresión, actualización o confidencialidad de los datos personales que obren en bancos de datos. Basta entonces con demostrar, en caso de acceso, la posibilidad de existencia de datos personales en un banco de datos, y, en caso de supresión, rectificación, actuali-

zación o confidencialidad, con señalar la existencia de información sensible, falsa o inexacta, que de por sí resulta violatoria del derecho a la intimidad, privacidad, honor y dignidad personal, razón por la cual el constituyente incluyó esta garantía en la Constitución. El propio registro de información sensible, falsa o errónea resulta violatorio de los derechos del afectado. Con respecto al último agregado, que requiere al peticionante "justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley", además de ser redundante, está redactado de modo confuso e impropio. El artículo 16 inciso 3 ya establece que el incumplimiento por parte del responsable del banco de datos de las obligaciones de facilitar el acceso, suprimir, rectificar, actualizar o someter a confidencialidad la información respectiva, da lugar a la acción de hábeas data, de modo que lo que correspondería establecer simplemente es que el peticionante acredite la presentación del reclamo administrativo o bien la intimación correspondiente, si el banco de datos fuera privado, manifestando la falta de cumplimiento de la obligación por parte del responsable del banco de datos.

Inc. 3: en línea con lo dicho anteriormente, debe hablarse del carácter "sensible" —o bien "prohibido" o "ilícito"— de los datos registrados, y no de su carácter "discriminatorio", calificación de difícil demostración.

En resumen, la regulación de este artículo establece una carga innecesariamente gravosa sobre la persona del peticionante, que al señalamiento concreto de existencia de datos personales en un banco de datos, o bien de registro de datos sensibles, inexactos o falsos, debe agregar la producción de prueba innecesaria y compleja. Sería recomendable una modificación profunda de la norma.

Art. 39. — Como ya hemos adelantado, el inciso 2 de este artículo cierra el círculo de indemnidad de los organismos de seguridad, inteligencia y defensa, ya que les permite como defensa oponerse al mero pedido de informes por parte del juez mediante la invocación de excepciones autorizadas en la propia ley o en otra ley específica. De este modo, el juez puede no enterarse jamás de la existencia o del contenido de la información solicitada, aunque éste sea prohibido, falso o erróneo. Lo que corresponde en este caso es la remisión de los informes al juez, para que éste los examine con carácter reservado y sin dar traslado al peticionante. De este modo, el juez puede juzgar convenientemente sobre la corrección de la subsumición del caso particular en la excepción legal por parte del responsable del banco de datos. Huelga reiterar que, a mi criterio, las excepciones legales son demasiado laxas, con lo que, pese a la posibilidad de control judicial más amplio que propugno, el derecho sigue sujeto a disposición discrecional por parte de los organismos mencionados, en contraposición con la norma constitucional. Comentario aparte merece la posibilidad abierta de que cualquier ley establezca excepciones a la posibilidad de acceso y corrección de los datos, hecho que vacía de contenido al precepto constitucional.

Por último, tampoco es justificado conceder la apelación de la resolución judicial que insista en el envío de los datos en ambos efectos, ya que la remisión de

la información al juez no implica de por sí el acceso, supresión o modificación de los datos a favor del interesado, sino simplemente la posibilidad de que el juez tome conocimiento de ellos. La apelación debería concederse al solo efecto devolutivo.

#### Artículo 41.

—Inc. 2: se usan simultáneamente “suprimida” y “cancelada”, cuando se trata de sinónimos, debiendo preferirse el término “suprimida”. Falta mencionar la posibilidad de otorgar a la información carácter confidencial. Donde dice “declararla”, debe decir “declarada”.

Por dichas razones, señor presidente, es que disiento con el presente proyecto de ley.

Pedro G. Villarroel.

### ANTECEDENTES

Texto del proyecto presentado por el senador Menem  
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones generales

Artículo 1º — *Objeto*. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos de carácter personal asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, electrónicos o manuales, para garantizar el honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

Art. 2º — *Definiciones*. A los fines de la presente ley se entiende por:

- *Datos de carácter personal*: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- *Archivo, registro, base o banco de datos*: indistintamente, designa al conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- *Tratamiento de datos*: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos de carácter personal, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- *Responsable de archivo, registro, base o banco de datos*: persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

- *Datos informatizados*: los datos de carácter personal sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- *Titular de los datos*: toda persona física, ciudadano argentino o extranjero con residencia legal en el país, o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el mismo, cuyos datos sean objeto del tratamiento de que trata la presente ley.
- *Ficha personal*: contenido de la información de una persona, que permite su identificación y definir sus antecedentes y actividades de cualquier tipo.
- *Usuario de datos*: toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

#### CAPÍTULO II

##### Principios relativos a la protección de datos

Art. 3º — *Archivos de datos - Licitud*. La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren legalmente autorizados, observando en su operación los principios que ésta establece y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

##### Art. 4º — *Calidad de los datos*:

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser lícitos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para las que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos serán exactos y deben actualizarse en el caso que ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser cancelados y sustituidos, o en su caso completados, de oficio cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios y pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recabados.

Art. 5º — *Consentimiento*:

1. El tratamiento de datos de carácter personal es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado en forma conjunta con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, juntamente con las advertencias previstas en el artículo 6º de la presente.

2. No será necesario el consentimiento cuando:
  - a) Los datos se obtengan de fuentes accesibles al público;
  - b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado;
  - c) Deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento.

Art. 6º — *Información*. Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

- a) La finalidad para la que serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios;
- b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;
- c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
- d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;
- e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos.

Art. 7º — *Categoría de datos*:

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos relativos a sus convicciones religiosas, opiniones políticas, origen racial o comportamiento sexual.
2. Los datos indicados en el apartado anterior sólo pueden ser recabados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. No pueden formarse archivos, bancos o registros de datos que tengan por finalidad exclusiva el almacenamiento de datos de carácter personal relativos a los aspectos señalados en el punto 1 de este artículo, salvo que hubieren sido suministrados voluntariamente por sus titulares, con pleno conocimiento de su destino y utilización.

4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Art. 8º — *Datos relativos a la salud*. Los hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas y los profesionales vinculados a la ciencia médica pueden recabar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos.

Art. 9º — *Seguridad de los datos*:

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. No se deben registrar datos de carácter personal en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

Art. 10. — *Deber de sigilo*:

1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Art. 11. — *Cesión*:

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
2. La cesión de datos a terceros debe ser comunicada a los titulares en la primera oportunidad en que ello ocurra. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
  - a) Así lo disponga una ley;
  - b) Se trate de datos recogidos de fuentes de acceso público;



- c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono;
  - d) El establecimiento del archivo responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho fichero con el de terceros. En tal caso la cesión será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justificó;
  - e) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
  - f) Tratándose de datos personales relativos a la salud, cuando sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos;
  - g) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información de modo que los datos sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

#### Art. 12. — *Transferencia internacional:*

- 1. Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de ningún tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la República Argentina.
- 2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
  - a) Colaboración judicial internacional;
  - b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica;
  - c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable.

### CAPÍTULO III

#### *Derechos de las titulares de datos*

Art. 13. — *Derecho de información:* Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

#### Art. 14. — *Derecho de acceso:*

- 1. El titular tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes.

- 2. El requerido deberá asegurarse de la identidad del peticionante y cumplir con dicha obligación dentro de los quince días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción especial de amparo prevista en esta ley.
- 3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

#### Art. 15. — *Contenido de la información:*

- 1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.
- 2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
- 3. La información debe suministrarse por escrito.

#### Art. 16. — *Derecho de rectificación, actualización o cancelación:*

- 1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizados, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.
- 2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, cancelación o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de diez días hábiles de verificado el error o falsedad.
- 3. El incumplimiento de esta obligación dentro de los quince días corridos de la intimación fehaciente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de amparo prevista en la presente ley.
- 4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro del tercer día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
- 5. La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos.
- 6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información de que

se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.

7. Los datos de carácter personal deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o; en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable o usuarios del banco de datos y el titular de los datos.

#### Art. 17. — *Excepciones:*

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos, pueden denegar el acceso, rectificación o la cancelación en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
2. La información sobre datos de carácter personal también puede ser denegada, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser motivada.

Art. 18. — *Gratuidad.* La rectificación, actualización o cancelación de datos de carácter personal inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

#### Art. 19. — *Impugnación de valoraciones personales:*

1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración sobre conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos de carácter personal que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.
2. Los actos que resulten contrarios a la directiva precedente serán insanablemente nulos.

### CAPÍTULO IV

#### *Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos*

#### Art. 20. — *Registro de archivos de datos. Inscripción:*

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
  - a) Nombre y dirección del responsable;
  - b) Características y finalidad del archivo;

- c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
  - d) Forma de recolección y actualización de datos;
  - e) Destino de los datos y entidades a los que pueden ser transmitidos;
  - f) Modo de interrelacionar la información registrada;
  - g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
  - h) Tiempo de conservación de los datos;
  - i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos de carácter personal de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

#### Art. 21. — *Archivos, registros o bancos de datos públicos:*

1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, y anotado en el correspondiente registro que a tal fin habilite el organismo de control.
2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:
  - a) Características y finalidad del archivo;
  - b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
  - c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
  - d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos de carácter personal que contendrán;
  - e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
  - f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
  - g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.
4. La cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público, no podrá efectuarse a ar-

chivos, registros o bancos de datos privados sin el consentimiento del afectado o en virtud de una ley que lo autorice.

**Art. 22. — Supuestos especiales:**

1. Lo dispuesto en el artículo 20 y en los puntos 1 y 2 del artículo anterior no es aplicable cuando se trate de archivos pertenecientes a la Secretaría de Informaciones del Estado, Policía Federal, Dirección General Impositiva, u otros organismos de seguridad, en la medida necesaria para el cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas, o cuando la ley establezca el secreto de los datos y de su mismo almacenamiento.
2. La obtención y almacenamiento de datos personales para fines policiales y de defensa se limitarán a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para la prevención de la seguridad pública, la defensa nacional o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos deberán ser específicos.
3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

**Art. 23. — Archivos, registros o bancos de datos privados.** Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 20.

**Art. 24. — Prestación de servicios informatizados de datos de carácter personal:**

1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su conservación.
2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien prestan tales servicios, cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

**Art. 25. — Prestación de servicios de información crediticia:**

1. En la prestación de servicios de información crediticia, sólo pueden tratarse datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente, datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial,

facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos, se notificará al afectado, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los datos que hubiesen sido incluidos, y se le informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en la presente ley.

3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos de carácter personal que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos diez años.

**Art. 26. — Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad:**

1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar información relativa a nombres, ocupación, domicilio y teléfonos, cuando los mismos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso, que comprenderá también los datos que hubieren sido dados de baja y la fuente de donde han sido obtenidos, sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos de que se trata en el presente artículo.

**Art. 27. — Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas:**

1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos, no resulta posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna en particular.

## CAPÍTULO V

### Control

**Art. 28. — Órgano de control.** El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el

cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Asistir y asesorar a personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
- b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
- c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
- d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registro o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
- e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que se le requieran;
- f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
- g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley.

#### Art. 29. — Códigos de conducta:

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional que establezcan normas para el tratamiento de datos de carácter personal que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.
2. Dichos códigos deberán ser inscritos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

### CAPÍTULO VI

#### Sanciones

#### Art. 30. — Sanciones administrativas:

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de usuarios públicos; en cualquier caso, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la

inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación de autorización del archivo, registro o banco de datos.

2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción.

#### Art. 31. — Sanciones penales:

1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar maliciosamente datos falsos en un archivo de datos de carácter personal.
2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero maliciosamente información falsa contenida en un archivo de datos de carácter personal.
3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

### CAPÍTULO VII

#### Acción especial de amparo

#### Art. 32. — Legitimación activa:

1. La acción de amparo especial de protección de los datos personales (o de hábeas data) procederá para tomar conocimiento de los datos de carácter personal almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, así como también su finalidad y los casos en que se presume la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata y de la inclusión de aquellos que tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
2. Podrá ser ejercida por el afectado y sus sucesores por sí o por intermedio de apoderado.
3. Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que designe al efecto.
4. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante del Defensor del Pueblo.

Art. 33. — *Legitimación pasiva.* La acción procederá respecto de los usuarios de datos públicos o privados. En este último supuesto procederá si tuviera la posibilidad de generar y proveer informes.

Art. 34. — *Procedimiento aplicable.* La acción de *habeas data* tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.

Art. 35. — *Requisitos de la demanda:*

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos, así como el nombre del responsable del mismo. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y de qué modo afecta sus derechos.
3. Al solo efecto de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Art. 36. — *Trámite:*

1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o bancos de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Art. 37. — *Confidencialidad de la información:*

1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el supuesto en que se afecte el secreto de las fuentes de información periodística.
2. Los archivos, registros o bancos de datos públicos sólo podrán invocar las excepciones autorizadas por la presente ley, o los establecidos en una ley específica. En tales casos deben acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal.

El juez apreciará con criterio restrictivo toda oposición al envío de informes sustentado en tales causales, debiendo expedirse dentro del segundo día de planteada la excepción.

La resolución judicial que insista con la remisión de los datos será apelable dentro del segundo día de notificada. El escrito de apelación será fundado.

3. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En el último caso, será elevado el expediente al tribunal de alzada dentro del día de ser concedido.

Art. 38. — *Contestación del informe.* Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 12 a 14 de la ley.

Art. 39. — *Sentencia.*

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, cancelada, actualizada o declararla confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.

Art. 40. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo Menem.

Texto del proyecto presentado por la senadora  
Fernández Meijide

# PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

## TITULO I

### Legitimación

Artículo 1º — *Sujetos de legitimación activa.* Están legitimados para iniciar acción de amparo bajo la modalidad del *habeas data* todas las personas físicas o jurídicas incluyéndose las previstas en el artículo 33 *in fine* del Código Civil residentes en la República Argentina y los sucesores de las personas físicas sean en línea directa o colaterales hasta el segundo grado por un período de 5 años posteriores a su deceso. Podrán efectuar la presente acción en nombre de sus representados los apoderados con poder general de administración y disposición respecto de sus poderdantes, representantes legales de menores, tutores, curadores o al-

haceas, afectados por datos referidos a ellos o a sus representantes que consten en registros o bancos de datos públicos o privados.

Art. 2º — *Sujetos de legitimación pasiva pública.* Toda dependencia o ente autárquico del Estado nacional, de los estados provinciales o municipales u organismos vecinales respecto de quienes podrá interponerse la presente acción.

Art. 3º — *Sujetos de legitimación pasiva privada.* Igualmente podrá interponerse esta acción con relación a todo particular, ya sea persona física o jurídica incluyéndose las previstas en el artículo 33 *in fine* del Código Civil, o los sucesores de las personas físicas hasta el segundo grado en línea directa colaterales que man'engan registros o bancos de datos que hubiesen poseído sus causantes, incluyendo los registros o bancos de datos que posean los medios de comunicación periodísticos en cualquiera de sus archivos, respetándose las garantías de reserva del secreto de la fuente informativa y de libertad de prensa.

## TITULO II

### Definiciones

Art. 4º — A los fines de la presente ley los términos empleados en ella serán entendidos con el siguiente contenido:

- a) *Datos.* Se entenderá por "datos" la información referente a las personas descriptas por el artículo 1º que sea recopilada de forma manual, mecánica, magnética o por cualquier otro medio creado o a crearse que cumpla los mismos fines, en archivos o bancos de datos;
- b) *Datos personales.* Son aquellos datos individuales sobre circunstancias personales u objetivas de una persona física o jurídica, determinada o determinable, incluyéndose los relativos a domicilios, números telefónicos, casillas de correo o similares. Cualquier información referente a una persona identificada o identificable. Asimismo la información sobre las condenas firmes en causas criminales, dentro del período de resguardo legal y archivada por la autoridad competente;
- c) *Datos sensibles.* Se considerarán datos sensibles aquellos datos que, siendo de índole personal, consistan en información referente a:
  1. El origen racial o étnico del titular de los datos.
  2. Sus opiniones políticas, gremiales o creencias religiosas o de otra clase.
  3. Su salud física o mental.
  4. Su vida sexual.
  5. Sus asuntos familiares que no sean relativos a relaciones de parentesco o estado civil, régimen económico y condición de sostén de la familia.

6. Sus condenas efectivamente cumplidas en causas criminales después de vencido el plazo legal de guarda por la autoridad competente.
  7. Si ha sido objeto de sospecha con relación a un delito o acusada por razón de ese delito no habiendo sido condenada; y
  8. Otros datos que pudieran posibilitar cualquier tipo de discriminación o impedir el libre ejercicio de sus derechos.
- d) *Datos equívocos o de dudosa exactitud.* Son aquellos datos personales cuya exactitud es discutida por el interesado, no pudiéndose demostrar por parte de los legitimarios activos o pasivos la exactitud o inexactitud de dichos datos;
  - e) *Datos falsos.* Son aquellos datos personales de los que puede demostrarse su falsedad;
  - f) *Archivos.* Son conformados por la acumulación de datos, artículos y todo tipo de documentación, incluyendo los microfilmados, generalmente en originales o copias autenticadas referentes a determinada persona, así como también testimonios filmicos, sonoros, fotográficos o similares;
  - g) *Registros.* Son confeccionados en planillas o fichas, figurando testimoniados los datos correspondientes a uno o varios individuos sin poseer en su respaldo documentación integrada al registro. Los registros, así como también los bancos de datos pueden servir de referencia a un archivo;
  - h) *Bancos de datos.* Similares a los registros se caracterizan por un grado de sistematización mayor, teniendo varios accesos de búsqueda. Pueden ser manuales o computarizados;
  - i) *Modificar.* Todo cambio en el contenido de datos almacenados;
  - j) *Suprimir.* Eliminar, destruir, hacer irreconocibles datos almacenados, sea cual fuere el procedimiento idóneo para ello;
  - k) *Rectificar.* Reemplazar datos erróneos o de dudosa exactitud o falsos por datos verdaderos;
  - l) *Actualizar.* Modificar en los registros o bancos los datos que con el transcurso del tiempo, o por un cambio en las circunstancias, se han convertido en erróneos o falsos;
  - m) *Confidencialidad.* Mantener reserva de datos personales *erga omnes*, salvo autorización expresa de las personas con legitimación activa.

Las definiciones contenidas en el presente no deberán entenderse como una enunciación taxativa y en caso de duda respecto de los límites de su contenido deben entenderse en sentido amplio en favor de los derechos tutelados por esta ley, con la única limitación de los derechos y garantías de terceros amparados por la Constitución Nacional.

## TITULO III

## Derechos tutelados

Art. 5º — A las personas descritas en el artículo 1º de la presente ley se les garantiza el goce de los siguientes derechos:

- a) A ser informado por todo titular o responsable de archivos, registros o banco de datos, si éstos tienen en su poder información de los que aquéllos sean titulares;
- b) A la información y conocimiento de la finalidad principal del uso de los datos;
- c) A la intimidad en materia de datos personales, respecto de la recolección, tratamiento, conservación, utilización y revelación de los mismos;
- d) A la privacidad, honor u otros derechos constitucionales, explícitos o implícitos para la suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos;
- e) A exigir la confidencialidad de sus datos personales, su modificación, rectificación o supresión;
- f) A la eliminación de datos sensibles que permitan cualquier tipo de discriminación,
- g) A que se destruyan los datos personales almacenados cuando el almacenamiento fuere ilícito o cuando desaparecieran los supuestos de hecho originariamente existentes para el almacenamiento.

## TITULO IV

## Disposiciones generales

## CAPÍTULO I

## Datos personales

Art. 6º — Los datos personales podrán ser suprimidos cuando la finalidad por la que se almacenan sea dudosa, falsa o extemporánea. Las personas incluidas en el artículo 1º podrán también solicitar al vez, en su caso, la suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de estos datos.

Art. 7º — Los datos personales deberán ser exactos y cuando sean inexactos o erróneos deberán ser rectificados o suprimidos. Los datos personales serán eliminados cuando su conocimiento ya no fuere necesario para el cumplimiento de los fines del almacenamiento destruyéndose los mismos a pedido de las personas sujetas de legitimación activa, no existiendo razón para presumir que con la destrucción se perjudique otros intereses dignos de protección.

Art. 8º — No se considerará que datos de índole personal se estén guardando para una o más finalidades específicas y lícitas.

Art. 9º — Los datos personales, sea cual fuere su finalidad o finalidades, no se guardarán por más tiempo que el necesario para el cumplimiento de esas finalidades.

Art. 10. — Los poseedores de archivos, registros y bancos de datos públicos o privados deberán informar

de forma fehaciente al titular de los datos personales, y a su pedido, sobre el almacenamiento de los mismos.

Art. 11. — Podrá interponerse la presente acción contra las dependencias, entes o personas referidas en los artículos 2º y 3º para obtener informes respecto del contenido y finalidad de los datos, suprimir, rectificar, exigir su confidencialidad o actualizar los datos que éstos posean para fines de utilización propia o destinada a la transmisión a terceros, a título oneroso o gratuito.

## CAPÍTULO II

## Datos sensibles. Disposiciones generales

Art. 12. — Los datos sensibles deberán ser eliminados de los registros o bancos de datos sean estos públicos o privados por el mero pedido de la parte interesada cuando no sea esencial a la finalidad por la que se almacenan o cuando sea prohibida su guarda por ley.

## TITULO V

## Responsabilidad

Art. 13. — Serán pasibles de la pena prevista en el artículo 249 del Código Penal aquellos funcionarios que estando bajo su cargo los registros o bancos de datos públicos obstruyan, denieguen, retarden, o incumplan las órdenes judiciales que requieran la información de los datos, su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos o impidan su posterior verificación.

Art. 14. — Serán pasibles de la pena prevista en el artículo 239 o en su caso 275 del Código Penal las personas contenidas en el artículo 3º (*Legitimación pasiva privada*) que estando bajo su cargo los registros o bancos de datos privados utilizados para fines propios o ajenos, obstruyan, denieguen, retarden, o incumplan las órdenes judiciales que requieran la información de los datos, su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos o impida su posterior verificación.

## TITULO VI

## Requisitos previos al inicio de la presente acción

Art. 15. — Las personas sujetas de legitimación activa deberán requerir los informes de forma fehaciente a los legitimarios pasivos sobre la información respecto de su persona o de sus representados contenida en los registros o bancos de datos.

Art. 16. — Los sujetos de legitimación pasiva están obligados a contestar los requerimientos de las personas que solicitan información dentro del plazo de los treinta días dentro de los cuales deberán notificar de forma fehaciente el lugar, día y hora en que se suministrará la información. En caso de no responder al requerimiento dentro del plazo establecido por el presente artículo, se considerará por denegada la información solicitada.

Art. 17. — Las personas que sean legitimarias activas podrán exigir del mismo modo en que se les suministre la información, la exhibición de la documentación original, podrán retirar copias que le serán provistas y certificadas por las personas de legitimación pasiva respecto de la información suministrada y de la documentación original.

Las copias deberán ser selladas en cada una de sus hojas con un sello que identifique la dependencia, ente o personas que sean sujetos de legitimación pasiva privada.

Art. 18. — Si los sujetos legitimados pasivamente no contestaren al requerimiento en el plazo de los treinta días, se negasen al cumplimiento de los requisitos del artículo anterior o resultase verosímil la inexactitud, falsedad u ocultamiento de datos, las personas referidas en el artículo 1º de la presente ley podrán solicitar la acción de amparo con la modalidad del hábeas data una vez vencido dicho plazo.

Art. 19. — Cuando prima facie los datos fueran erróneos, inexactos o falsos, el juez deberá ordenar la suspensión de los mismos a pedido de parte, bajo el procedimiento de medida cautelar.

Art. 20. — En los casos que revista urgencia la tramitación de la presente acción como consecuencia del daño inminente o efectivo que pudiera provocarse al accionante, el juez deberá evaluar la situación invocada, concediendo el recurso sin la existencia del trámite previo.

Art. 21. — *Requisitos de la demanda.* La acción debe ser interpuesta por escrito, procurando individualizarse con la mayor precisión los datos que refieran al registro o banco de datos, específicamente en lo que refieran a su domicilio, nombre o nombres de los encargados del mismo. De solicitar informes a registros o bancos públicos, deberá tratar de individualizarse la dependencia, organismo o ente a que se refiera, o de la que dependan individualizando en lo posible a su titular o algún superior jerárquico de quien dependa.

Art. 22. — *Razonabilidad de la petición.* Bastará que el accionante alegue razones por las cuales entiende que en el registro o banco de datos obre información referente a su persona, para que el juez evalúe la razonabilidad con criterio amplio y en consecuencia otorgue la admisibilidad de la acción al solo efecto de poder requerir la información.

Art. 23. — El contenido de la información exigida a las personas de legitimación pasiva será puesta en conocimiento del juez interviniente, en forma escrita entregada en sobre cerrado, quien lo revelará al accionante.

Art. 24. — El procedimiento para activar la garantía asegurada por la presente ley, contra el accionar de un sujeto de legitimación pasiva pública se regirá por la ley 16.986, en todo lo no previsto en la presente ley.

Art. 25. — El procedimiento para activar la garantía asegurada por la presente ley, contra el accionar de un sujeto de legitimación pasiva privada se regirá por el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Metjide.

## Texto del proyecto presentado por el senador López

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

#### TÍTULO I

#### Disposiciones generales

#### CAPÍTULO I

##### Objeto

Artículo 1º — La presente ley rige el funcionamiento de todos aquellos registros y/o centros y/o bancos de datos públicos o privados destinados a suministrar informes a terceros, sea que cuenten con ficheros, catálogos, archivos en general, automatizados o no, en los cuales se almacenen datos personales que puedan recuperarse, excepto cuando se llevaran exclusivamente con fines de uso individual.

Art. 2º — A los fines de la presente ley se entenderá por dato toda aquella información, acerca de las personas, que sea susceptible de ser registrada y puesta en relación directa o indirecta con individuos determinados.

#### CAPÍTULO II

##### De la recolección y elaboración de datos

Art. 3º — La recolección, elaboración y registro de datos personales debe sujetarse a los siguientes requisitos:

- Los datos no deberán recolectarse por medios ilícitos;
- Sólo podrán registrarse datos personales para fines determinados y legítimos, y su uso quedar limitado a esos fines;
- Los datos deberán ser exactos, actuales y adecuados al fin para el que fueron registrados y no podrán conservarse por un plazo superior al necesario para cumplir con dicho fin;
- Que la expresamente prohibido recolectar y conservar datos personales que directa o indirectamente revelen el origen racial, las convicciones, en especial las políticas y religiosas, el comportamiento sexual o el uso de estupefacientes, y los que se refieran a la comisión de delitos y a procesos o condenas criminales. En este último caso queda expresamente exceptuado el Registro Nacional de Reincidencias.

#### TÍTULO II

#### De los registros de datos

#### CAPÍTULO I

##### De la responsabilidad

Art. 4º — Quienes recolecten, elaboren o almacenen datos personales, son directamente responsables de los



daños ocasionados, cuando la recolección y elaboración de datos no se ajuste a los términos prescritos en la presente ley.

Quedan por ese solo hecho obligados, para con las personas afectadas a adoptar las medidas adecuadas para evitar su destrucción o pérdida accidental y la difusión no autorizada de los mismos.

## CAPÍTULO II

### *De las condiciones*

Art. 5º — Los registros y/o bancos de datos privados destinados a proveer informes, deberán estar inscriptos en el registro especial que al efecto levantara la Comisión Nacional de Datos, como asimismo otorgar las garantías patrimoniales que la misma determine.

Art. 6º — Los registros y/o bancos de datos públicos sólo podrán llevar registro de aquellos datos personales que guarden estrecha relación con la consecución de los fines para los que han sido creados.

## CAPÍTULO III

### *De las obligaciones*

Art. 7º — Los registros y/o bancos de datos públicos y los privados destinados a proveer informes, deben notificar de modo fehaciente a las personas cuyos datos fueron recolectados por primera vez, salvo que se tratara de datos básicos o que estuviesen publicados en un registro público.

Art. 8º — La información contenida en los registros de datos personales deberá ser completada y corregida aun sin petición del particular interesado, cuando el responsable de los mismos tuviere conocimiento de que algún dato registrado no fuese exacto o estuviese incompleto.

Art. 9º — En toda recolección de datos personales deberá informarse a las personas que sean requeridas si la información es solicitada con carácter obligatorio o voluntario, las consecuencias de la falta de respuesta, el destino de los datos y la existencia del derecho de acceso, rectificación y/o ampliación de los mismos, la norma no se aplicara para el caso de infracciones, o delitos de cualquier índole, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

## TÍTULO III

### *De la Comisión Nacional de Datos*

## CAPÍTULO I

### *Integración*

Art. 10. — Créase la Comisión Nacional de Datos Personales, como organismo autónomo, integrada de la siguiente forma:

- a) Un miembro elegido por la Cámara de Diputados de la Nación;

- b) Un miembro elegido por el Senado de la Nación;
- c) Un miembro elegido por el Poder Ejecutivo nacional;
- d) Un miembro elegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación con rango no inferior a juez de cámara;
- e) Un miembro de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas elegido por su titular.

La comisión funcionará con fondos asignados en la Ley de Presupuesto de la Nación, con cargo al Ministerio de Justicia.

## CAPÍTULO II

### *Funciones*

Art. 11. — Son funciones de la comisión:

- a) Dictar su propio reglamento;
- b) Llevar el registro de todos los bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes existentes en el país;
- c) Determinar los requisitos y garantías que deberán reunir los registros y/o centros y/o bancos de datos privados destinados a suministrar informes para obtener la correspondiente inscripción;
- d) Observar la aplicación de la presente ley, para lo cual ante la petición de cualquier interesado, un miembro de la comisión verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º.

En su caso la comisión dispondrá que el banco de datos correspondiente efectúe las rectificaciones que fueren necesarias informando al interesado si se ha procedido o no a la rectificación dentro de los plazos que determine la reglamentación.

## CAPÍTULO III

### *Sanciones y recursos*

Art. 12. — En caso de incumplimiento por parte de los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes de las medidas dispuestas en el artículo anterior, la comisión estará facultada a aplicar sanciones las que podrán consistir en:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa;
- c) Revocación de la autorización para funcionar.

Art. 13. — Las resoluciones de la comisión podrán ser apeladas dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de que han sido notificadas por ante la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda.

En la Capital Federal, será competente la justicia nacional en lo Contencioso Administrativo.

## TITULO IV

## Derechos de los particulares

Art. 14. — Toda persona que acreditare su identidad, tiene derecho frente al titular de un registro de datos personales a:

- a) Conocer los fines del registro;
- b) Ser informado en un plazo de 48 horas y de manera inteligible acerca de cualquier dato que le concierna;
- c) Oponerse al registro de cualquier dato relativo a su persona;
- d) Obtener respuesta escrita a las peticiones relativas a los incisos precedentes.

Art. 15. — Cuando la información contenga datos falsos y/o discriminatorios, el solicitante podrá requerir al registro su supresión, rectificación, ampliación, o bien la confidencialidad de los mismos, en el plazo perentorio de 48 horas.

Vencido éste sin haber obtenido respuesta deberá efectuar la pertinente denuncia por ante la Comisión Nacional de Datos a efectos que ésta tome intervención en los términos previstos en los artículos 11, inciso d) y 12.

## TITULO V

## Acción de hábeas data

Art. 16. — *Procedencia.* La acción de *habeas data* es una garantía constitucional que se ejerce a través de un procedimiento de excepción. Procederá siempre que se probara haber cumplido con lo prescrito en el artículo anterior.

Art. 17. — *Órgano judicial competente.* Será competente el juez del lugar en el que el acto u omisión se exteriorizase o pudiese tener efecto.

Deberán entender los jueces federales cuando la acción de *habeas data* procediese contra un registro y/o centro y/o banco de datos públicos, en la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Art. 18. — *Legitimación activa.* Estarán legitimados para interponer la acción de *habeas data* a que se refiere el apartado 3º del artículo 43 de la Constitución Nacional; toda persona física o jurídica, que haya sido afectada de manera personal y directa.

Art. 19. — *Trámite.* La acción de *habeas data* tramitará por las disposiciones del juicio sumarísimo contempladas en el artículo 498 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación.

Art. 20. — *Sentencia. Alcances.* Contestada la demanda y producida en su caso la prueba, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro del tercer día. En la misma, de admitirse la demanda, el juez especificará concretamente, si correspondieren, la conducta a seguir por el accionado, fijando para ello un plazo de cumplimiento, como requisito de validez de pronunciamiento.

## TITULO VI

## Disposiciones generales

Art. 21. — Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los datos personales con fines estadísticos o de investigación científica, siempre que no haya riesgo de perjuicio a la vida privada de las personas interesadas y los resultados sean presentados sin identificación de personas determinadas.

Art. 22. — Tampoco serán aplicables cuando se afectare el secreto de las fuentes de información periodística.

Art. 23. — Los bancos de datos públicos se podrán negar a revelar información existentes en sus archivos en los siguientes casos:

- a) Cuando haya sido suministrada en forma confidencial por el gobierno de otro país o por una organización internacional de derecho público legalmente reconocida. Sólo podrá revelarse la información si tales entes dieran su consentimiento;
- b) Cuando la información pudiera ser lesiva para la conducción de las negociaciones diplomáticas de la Nación Argentina, la defensa nacional o la investigación y prevención de actividades criminales o favoreciere la realización de actos hostiles contra los intereses argentinos en el exterior;
- c) Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio para el que recibe la información.

Art. 24. — Sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de esta ley, la Comisión Nacional de Datos deberá autorizar en cada caso en particular, la transferencia de determinada categoría de datos personales al exterior, siempre que el país de destino de los mismos conceda una protección equivalente a la prevista en esta ley.

Art. 25. — Invítase a las provincias a adherir a lo dispuesto en esta ley en relación con los archivos dependientes de las entidades públicas de su jurisdicción.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alcides H. López.

Texto del proyecto presentado  
por el senador Berhongaray

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

## TITULO I

## Principios fundamentales y definiciones básicas

Artículo 1º — La presente ley tiene por finalidad la preservación de los derechos de los particulares en re-

lación al almacenamiento, transmisión, modificación y destrucción de datos.

Tendrá carácter de convenio, en todo cuanto concierne al establecimiento de procedimientos y órganos fuera de la jurisdicción nacional, con la finalidad de asegurar el modo eficaz goce de los derechos y garantías reconocidos en la presente a los particulares, en todo el territorio nacional.

Art. 2º — Establécese que ninguna decisión judicial que implique apreciación sobre una conducta humana podrá estar fundada exclusivamente en un tratamiento computarizado de informaciones que suministren una definición del perfil o de la personalidad del afectado.

Asimismo, ninguna resolución administrativa o privada que implique valoración sobre conductas humanas podrá tener por fundamento único un tratamiento computarizado de informaciones que suministren una definición del perfil o de la personalidad del interesado.

Art. 3º — A los fines de la presente ley, se asigna a los términos más abajo mencionados, el significado que a continuación se expresa:

1. *Datos de índole personal.* Cualquier información concerniente a personas físicas determinadas determinables.
2. *Almacenamiento.* La obtención, toma o custodia en su soporte, de datos, con miras a su posterior utilización.
3. *Transmisión.* Dar a conocer datos almacenados u obtenidos de modo directo, ya sea que los datos sean suministrados por la entidad almacenadora o bien puestos a disposición de otros.
4. *Disociación.* Procedimiento consistente en tornar datos no vinculables a persona o entidad alguna.
5. *Entidad almacenadora.* Toda persona física o jurídica que almacene datos por sí, o los haga almacenar por terceros;
6. *Fichero de datos.* Conjunto organizado de datos de carácter personal.
7. *Tratamiento de datos.* Operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la obtención, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo o cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
8. *Registro de datos.* Inclusión de datos en un fichero de datos de carácter personal.
9. *Cesión de datos.* Transferencia a terceros de un fichero de datos de carácter personal, o de un conjunto de datos de esa índole.
10. *Comunicación de datos.* Puesta en conocimiento de una persona o personas determinadas, de uno o más datos de carácter personal.
11. *Difusión de datos.* Posibilitar del acceso o puesta en conocimiento de un número no determinado de personas, de datos de carácter personal.
12. *Responsable del fichero.* Persona física, técnicamente idónea, que asuma la responsabilidad de

asegurar, respecto de determinados ficheros de datos, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y sus normas complementarias, en las operaciones de obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión de datos, que sean efectuadas por la persona o entidad a quien pertenezca el fichero de datos, o por encargo de la misma.

13. *Titular del fichero de datos.* Persona física o representante legal de la entidad a quien pertenezca un fichero de datos de carácter personal.
14. *Afectado.* Persona física titular de los datos que sean objeto de obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión.

Art. 4º — Integran el ámbito de aplicación de la presente ley, todos los datos de carácter personal que fueren almacenados en ficheros de datos, o de cualquier otra forma, modificados, transmitidos o destruidos por cualquier medio, automatizado o no, poseídos o utilizados por sujetos públicos o privados, para cualquier finalidad propia o ajena, excepción hecha de los referidos en el artículo siguiente.

Art. 5º — No se encuentran comprendidos en la presente ley, los siguientes ficheros de datos:

1. Los ficheros de datos mantenidos por personas físicas con fines de exclusivo uso personal, en tanto continúen en tal situación y sus datos no sean comunicados, cedidos, transmitidos ni difundidos en forma alguna, ni se realicen aprestos o tentativas para hacerlo.
2. Los ficheros de datos que exclusivamente reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales.
3. Los ficheros de informática jurídica accesibles al público, en la medida en que se limiten a reproducir disposiciones o resoluciones judiciales publicadas en periódicos o repertorios oficiales.
4. Los ficheros mantenidos por los partidos políticos y entidades sindicales y religiosas, en cuanto los datos se refieran a sus asociados y miembros actuales o anteriores, y no sean cedidos, transmitidos, comunicados ni difundidos a terceros.
5. Los ficheros mantenidos por periodistas u órganos periodísticos y dedicados a la función periodística, en tanto no sean empleados para otra función, y sus datos no sean cedidos, transmitidos, comunicados ni difundidos a terceros distintos de los titulares y personal a su cargo, o del público a través del medio periodístico titular o de otros pertenecientes a la misma persona o entidad.

Art. 6º — Se regirán por sus disposiciones específicas y, supletoriamente, por lo establecido en la presente ley, los siguientes ficheros de datos:

1. Los regulados por la legislación electoral.

2. Los correspondientes al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y al Registro de Reincidencia y Estadística Criminal y Carce'aria.
3. Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos.
4. Los ficheros elaborados por las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y organismos de inteligencia, relativos a sus miembros.

## TITULO II

### De la protección de los datos

Art. 79 — La obtención de datos de carácter personal para su inclusión en ficheros de datos, así como su posterior tratamiento, sólo podrá tener lugar para el exclusivo cumplimiento de finalidades legítimas, y siempre que los mismos y su tratamiento sean adecuados, pertinentes y necesarios para el cumplimiento de tales finalidades, cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en la presente ley.

Deberán ser exactos y estar permanentemente actualizados, de suerte de responder con veracidad a la situación actual del afectado.

Serán almacenados de forma de permitir el ejercicio del derecho de acceso por parte de los interesados.

Art. 80 — Deberán ser cancelados los datos de carácter personal contenidos en ficheros de datos:

1. Cuando hayan dejado de ser adecuados, pertinentes y necesarios para la finalidad que determinó su obtención. En este supuesto sólo podrán ser conservados, en caso que adopten una forma que impida la identificación de los afectados; o bien si poseyeran valor histórico conforme lo disponga la legislación específica, y no se lesionaren derechos de aquéllos.
2. Cuando se demostrara su carácter inexacto en todo o en parte o incompleto, salvo que fueran actualizados o completados, según el caso.
3. Se declararán no accesibles los datos de carácter personal cuando el interesado impugne su exactitud y no fuere posible determinarla, en tanto tal imposibilidad subsista.

Art. 90 — Queda prohibida la obtención de datos por medios fraudulentos, subrepticios o contrarios a las normas en vigencia al momento de la obtención.

Art. 10. — Quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, no podrán aplicar o utilizar los datos obtenidos a un fin distinto del que figure en el respectivo contrato de servicios, ni cederlos a otras personas.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que permanecieran en poder de quien suministrara datos deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios, por presumirse razonablemente la posibilidad de continuación posterior

de la prestación. En tal supuesto, podrán almacenarse los datos con las debidas condiciones de seguridad por un período de tres años.

## TITULO III

### De los derechos de los afectados

Art. 11. — Constituirán derechos de los afectados:

1. Recibir información, de un modo expreso, preciso e inequívoco, sobre la existencia de un fichero de datos conteniendo datos de carácter personal relativos a ellos, así como sobre la finalidad de la obtención de los datos, y sobre los destinatarios de la información.

2. Acceder a sus datos personales que se encuentren en ficheros de datos, siendo informado sobre la finalidad del registro de tales datos.

El acceso podrá consistir en la consulta visual de los datos, o bien en su reproducción escrita, copia magnética o fotocopia, a elección del afectado.

El mismo, y la información referida, deberá otorgarse por el titular o responsable del fichero de datos, dentro de los diez días de ser requerido fehacientemente a hacerlo.

3. Recibir información, del modo indicado en el inciso 10.1, en oportunidad de serles solicitados datos de carácter personal, acerca de:

- a) La existencia, en su caso, de un fichero de datos de carácter personal al que los datos que se les requieren están destinados, de la finalidad de la obtención de datos y de los destinatarios de la información;
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta, y, en el primer supuesto, de las normas jurídicas en que se funda la obligatoriedad, en su caso, o de tratarse de solicitud formulada en el marco de una relación contractual o laboral, de las consecuencias de su negativa a suministrarlos;
- c) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación; y de la identidad y domicilio del responsable del fichero;
- d) También deberán ser informados los afectados la primera vez que se almacenen datos personales referentes a sus personas, a menos que ya hubieren tenido conocimiento de ello por otro conducto.

Podrán los afectados en tal caso pedir información sobre los datos almacenados acerca de ellos.

Si los datos fueren objeto de transmisión regular a terceros, podrá el afectado requerir nombre y domicilio de las personas y las entidades que fueran destinatarios de la misma.

Se exceptuarán de la aplicación del presente inciso, aquellos supuestos en los cuales los datos personales en cuestión hubiesen sido obtenidos directamente de fuentes de acceso general.

4. A la corrección o actualización de los datos almacenados sobre ellos mismos, cuando fueren inexactos o desactualizados.

Dentro de los treinta días de formulada una solicitud fehacientemente en tal sentido por el afectado, el titular o responsable del fichero de datos deberá proceder a corregir o actualizar según los casos los datos personales del solicitante.

En el supuesto de no poder determinarse la inexactitud o desactualización de los datos personales de que se tratare, el titular o responsable del fichero de datos deberá tornar inaccesibles los mismos, con comunicación al afectado, por el término de noventa días, en que deberá aquél promover la correspondiente acción judicial.

5. A la destrucción de los datos almacenados acerca de ellos mismos, de oficio o dentro de los diez días de la solicitud fehaciente en tal sentido formulada por el afectado, cuando hubieran desaparecido los supuestos de hecho originariamente existentes para el almacenamiento, cuando el almacenamiento fuere ilícito o, en los restantes supuestos contemplados en el artículo 8º, salvo que fueran sometidos a un tratamiento de disociación.

La cancelación no procederá cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiere una obligación de conservar los datos.

En el supuesto en que los datos que deban rectificarse o cancelarse hayan sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario.

Ante el incumplimiento, por negativa o silencio, de las obligaciones que impone el presente artículo a los titulares y responsables de ficheros de datos, los afectados podrán ocurrir ante el defensor del pueblo de la Nación, o ante el órgano que designe o cree cada provincia, pudiendo además ejercitar las vías recursivas previstas en el artículo 26, o bien deducir acción de amparo, conforme prevé en este último caso el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, invocando las circunstancias a que se alude en los casos previstos en el artículo 52 de la presente.

Art. 12. — La obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento del afectado, salvo disposición legal en contrario.

Dicho consentimiento deberá otorgarse por escrito, pudiendo comprender todas las etapas antes citadas.

No será necesario el consentimiento del afectado:

- a) Cuando los datos de carácter personal fueran obtenidos de fuentes accesibles al público;
- b) Cuando fueran obtenidos por órganos estatales en ejercicio de sus competencias, y se cumpliera lo establecido en la presente ley, y en las normas modificatorias y complementarias de la misma, respecto de tales órganos;
- c) Cuando se refirieran a personas vinculadas al titular del fichero de datos al que están destinados, por una relación contractual o laboral, y fueren necesarios para el adecuado cumplimiento de la aludida relación; siempre que en ello fueran respetados los límites y modalidades establecidos en la presente.

Art. 13. — No podrá exigirse al afectado el suministro de datos de carácter personal sobre sus ideas en materia política o social, sobre su afiliación o ideas en materia sindical, así como sobre sus creencias religiosas.

El tratamiento de datos de la índole referida sólo podrá tener lugar previo consentimiento expreso y por escrito del afectado, que deberá ser advertido de su derecho a negarse.

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser requeridos, tratados, registrados, comunicados, y difundidos, transmitidos o cedidos, cuando por razones de interés general así lo dispusiera una ley, o bien cuando el afectado lo consintiera expresamente.

Queda prohibida la formación y existencia de ficheros de datos creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen ideas y legítima participación en materia política y sindical, creencias religiosas, origen racial o vida sexual.

Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, así como los relativos a la salud, sólo podrán ser incluidos en los ficheros de datos de los organismos públicos competentes para ello, en los casos en los que así lo autorizan las normas que reglan el accionar de los mismos, y sujetos a los límites y modalidades establecidos en la presente ley.

Art. 14. — Queda prohibida a los titulares o a los responsables de ficheros de datos, o a quienes intervengan en cualquier etapa del tratamiento de datos, toda revelación, autorización de acceso a terceras personas o utilización alguna de datos de índole personal, para finalidad diversa a aquella que determinó la creación del fichero, y que fuera denunciada oportunamente.

Dichas personas deberán guardar secreto respecto de los datos, así como proteger dicho secreto. Tales obligaciones subsistirán incluso después de finalizada su actividad.

Art. 15. — Los titulares o responsables de ficheros de datos, o bien quienes por encargo o bajo dependencia de los mismos realizaren tratamiento de datos de índole personal, deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas indispensables para asegurar la observancia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá tales medidas en la reglamentación de la misma, debiendo actualizarlas conforme a la evolución que experimente la técnica.

Sin perjuicio de lo normado precedentemente, establece que tales medidas deberán incluir:

1. Impedir a personas extrañas el acceso a las instalaciones en las que se encuentren ficheros de datos, o en las cuales se esté efectuando tratamiento de datos (control de acceso).
2. Impedir a toda persona ocupada en el tratamiento de datos personales que se lleve consigo los soportes de esos datos (control de salida).
3. Impedir el acceso no autorizado al dispositivo almacenador, así como el conocimiento, modificación o destrucción no autorizados de datos personales almacenados (control de almacenador).
4. Impedir la utilización, por personas no autorizadas, de sistemas de tratamiento de datos desde los cuales o a los cuales se transmitan datos de índole personal (control de utilización).
5. Garantizar que las personas habilitadas para la utilización de un sistema determinado de tratamiento de datos por conducto de establecimientos independientes, sólo puedan tener acceso a los datos personales comprendidos en su ámbito de habilitación (control de acceso a datos).
6. Asegurar que se pueda comprobar y determinar a qué entidades se pueden transmitir datos de índole personal, directamente o por conducto de institutos independientes (control de transmisión).
7. Asegurar que se pueda comprobar y determinar con posterioridad qué datos de índole personal y en qué momento y por quién han sido introducidos en los sistemas de tratamiento de datos (control de introducción).
8. Asegurar que determinados datos de índole personal que se están tratando por encargo, sólo pueden tratarse informáticamente conforme a las instrucciones del mandante (control de encargos).
9. Asegurar que en la transmisión de datos de índole personal, así como en el transporte de los soportes correspondientes de datos, éstos no pueden ser leídos, modificados ni destruidos por persona no autorizada (control de transporte).
10. Conformar la organización interna jerárquica y funcional de las empresas o entidades que sean titulares de ficheros de datos, de tal modo que responda a las exigencias especiales de la protección de datos (control de organización).

Art. 16. — Los datos de carácter personal que sean o que vayan a ser objeto de tratamiento, sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas del

cedente y del cesionario, con el previo consentimiento expreso y por escrito del afectado, quien deberá tener conocimiento concreto de la identidad del cesionario.

El cesionario quedará por el hecho de la cesión, plenamente obligado al cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

No será necesario el consentimiento precedentemente aludido:

- a) Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes accesibles al público;
- b) Cuando el establecimiento del fichero de datos responda a la existencia de una relación jurídica libremente aceptada que implique necesariamente la conexión de dicho fichero con ficheros de terceros, siempre que la cesión se limite a la finalidad que la justifique, y el afectado haya sido oportunamente advertido de la existencia de la mentada relación jurídica;
- c) Cuando la cesión sea efectuada a un órgano judicial, o al ministerio público, para el cumplimiento de las funciones atribuidas a los mismos;
- d) Cuando se trate de datos de carácter personal relativos a salud y su cesión sea efectuada para enfrentar una grave urgencia sanitaria determinada por la autoridad competente;
- e) Cuando exista disposición legal que autorice la cesión.

El consentimiento en cuestión será revocable.

Art. 17. — Los datos de índole personal que estén sujetos a secretos o reserva establecidos por ley o reglamento, y que hayan sido transmitidos por la persona obligada al secreto o reserva, en el desempeño de su deber profesional u oficial, no podrán ser retransmitidos por el receptor.

Art. 18. — No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal, con destino a países que no proporcionan un nivel de protección de datos comparable al otorgado por esta ley.

Exceptuáanse aquellos supuestos en los cuales el defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que designe o cree cada provincia autorice la transferencia, lo que sólo podrá efectuarse en el supuesto en que los destinatarios brinden adecuadas garantías.

También serán exceptuados de la aplicación de esta disposición, quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

- a) En aquellos supuestos en los cuales la transferencia haya sido dispuesta en el marco de tratados internacionales en los cuales la Argentina sea parte;
- b) Cuando la transferencia se efectúe con la exclusiva finalidad de prestar cooperación judicial internacional;
- c) Cuando tenga por objeto el intercambio de datos de carácter médico entre facultativos o instituciones sanitarias, cuando lo requiriera el tratamiento del afectado, o la prevención o lucha contra epidemias;

- d) Cuando se tratara de transferencias financieras, siempre que se diera cumplimiento a la legislación vigente a este respecto.

Art. 19. — Las personas o entidades públicas o privadas que posean y administren ficheros de datos de carácter personal o que efectúen para terceros obtención o tratamiento de datos de ese carácter, deberán, dentro de los diez días del comienzo de su actividad, designar por escrito un responsable de la protección de datos.

Podrá ser designado en tal carácter exclusivamente quien posea para el desempeño de su misión, adecuados conocimientos, y que no posea antecedentes penales.

La designación deberá ser efectuada dentro de los diez días de establecido un fichero de datos de carácter personal.

Deberá ser notificada fehacientemente al defensor del pueblo de la Nación, o, en jurisdicción provincial, al órgano que designe o cree cada provincia.

El responsable de la protección de datos poseerá en relación a la persona física o a los directores y administradores de la entidad privada propietaria del fichero de datos que se trate, plena autonomía técnica, no pudiendo ser objeto de instrucciones en la materia.

Art. 20. — El responsable de la protección de datos tendrá por misión asegurar respecto del o los ficheros de carácter personal en que ostente tal carácter, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, así como en otras disposiciones sobre protección de datos.

Mantendrá comunicación con el defensor del pueblo de la Nación, o bien con el órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, con quien deberá evacuar todas las dudas que se le presentaren y de quien recibirá instrucciones en todos los aspectos relativos a la protección de datos.

Además, deberá:

1. Llevar un libro especial del que surjan la clase de los datos personales almacenados, el objeto del fichero de datos de que se trata, el objeto de las actividades de la persona física o bien el objeto de la entidad que lo posee, así como sus receptores habituales y sobre la clase de las instalaciones automatizadas de tratamiento de datos, en su caso.
2. Supervisar la aplicación correcta de los programas de tratamiento de datos con cuya ayuda se hayan de tratar informáticamente los datos personales, en su caso.
3. Intervenir con su asesoramiento en la selección de las personas que hayan de ocuparse de tratar informáticamente datos de índole personal.
4. Instruir a las personas aludidas precedentemente sobre los preceptos de la presente ley, así como sobre otras disposiciones en materia de protección de datos.

#### TITULO IV

##### De los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública

Art. 21. — La creación, modificación o supresión de ficheros de datos propiedad total o mayoritariamente

del Estado nacional, de las provincias, municipios, y sus entes descentralizados, deberá efectuarse a través de ley, reglamento o acto administrativo publicado en el Boletín Oficial, o en el órgano de publicaciones oficiales de las provincias respectivas.

Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros de datos deberán contener:

- a) Finalidad del fichero de datos, y usos previstos para el mismo;
- b) Personas o categorías de personas sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal;
- c) Procedimiento de obtención de los datos de índole personal y obligación, en su caso, de las personas a suministrarlos.
- d) Estructura básica del fichero de datos, y descripción de los datos a ser incluidos en el mismo;
- e) Responsable del fichero de datos;
- f) Organos y sede de los mismos, ante los cuales podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación;
- g) Las cesiones o transmisiones de datos de carácter personal que se prevea realizar, en sus casos: así como nombre y domicilio de los entes a los cuales los entes almacenadores envíen regularmente datos de índole personal, y categoría de los datos que se han de transmitir.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de ficheros de datos se establecerá el destino de los mismos, o, en su caso, los procedimientos que se adopten para su destrucción.

Sólo podrán crearse o modificarse ficheros de datos de carácter personal por parte de los entes previstos en este título, cuando ello fuere necesario para el regular cumplimiento de las funciones que integran la competencia de la entidad almacenadora.

La disposición deberá asimismo notificarse al defensor del pueblo de la Nación, o al órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, con miras a la inclusión del fichero en el Registro de Ficheros de Datos de Carácter Personal, conteniendo las indicaciones cuya publicación es requerida.

Art. 22. — Serán exceptuados de la publicación prevista en el artículo anterior:

1. El Ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas, en el supuesto en que dicha publicación pueda afectar gravemente a la defensa nacional.
2. Los organismos de inteligencia, en el caso en que tal publicación pudiese afectar gravemente a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado.
3. Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, si la publicación pudiese afectar gravemente la defensa nacional o la seguridad interior, así como la seguridad interior en las provincias.

4. Los ficheros de datos correspondientes a registros establecidos por ley, u otros que deban llevarse en virtud de disposiciones legales o de normas administrativas publicadas.

La decisión relativa al otorgamiento de la excepción prevista en los puntos 1, 2 y 3 precedentes, será adoptada en forma fundada por el presidente de la Nación o gobernador según el caso.

Deberán, no obstante, en tales casos, realizar la notificación prevista en el último párrafo del artículo precedente.

Art. 23. — La creación de los ficheros a que se alude en el presente título requerirá dictamen previo del defensor del pueblo de la Nación, o del órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial.

El mismo será requerido con carácter previo al envío por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso, de todo proyecto de ley que prevea la creación de un fichero de datos, o del dictado de un reglamento o acto administrativo relativo a dicha creación.

El aludido funcionario verificará la presentación de proyectos de ley en ambas Cámaras con dichas previsiones; haciendo conocer sus observaciones a los legisladores firmantes y a las comisiones a las que se les hubiera conferido intervención.

Las provincias, dentro de sus respectivas jurisdicciones, adoptarán las medidas que aseguren la intervención previa de sus órganos de protección de datos, con anterioridad a la sanción de una ley o emisión de reglamento o acto administrativo, que establezca un fichero de datos en una entidad oficial.

Art. 24. — Los datos de carácter personal obtenidos o tratados por los entes a que se refiere el presente título no podrán ser cedidos o transmitidos, excepción hecha de que la cesión o transmisión fuera efectuada para otro ente del mismo carácter para el ejercicio de idénticas competencias, o de competencias que versen sobre las mismas materias, o cuando la cesión o transmisión hubiera sido prevista en las normas sobre creación del fichero y que la cesión fuera necesaria para el legal cumplimiento de las funciones incluidas en la competencia del ente transmisor o de quien reciba esos datos.

Fuera de los casos previstos precedentemente, podrán cederse o transmitirse datos de carácter personal entre entidades de las contempladas en este título, cuando los datos hubieran sido obtenidos por cuenta o encargo del ente cesionario, y la transmisión se efectúe a éste.

Si los datos de carácter personal en cuestión tuvieran carácter secreto en virtud de disposición legal o reglamentaria vigente, y hubieren sido transmitidos al ente cedente o transmisor por la persona sometida a deber de secreto en el ejercicio de sus deberes profesionales u oficiales, será indispensable, además, que el receptor necesite los datos para el cumplimiento de la misma finalidad para la cual los hubiere obtenido el ente transmisor.

Art. 25. — Los ficheros de datos creados por las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, estarán comprendidos en el régimen del presente título.

Establécese por otra parte para la obtención y almacenamiento de datos por parte de los aludidos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con fines policiales, que las mismas estarán limitadas a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad interior o para la represión de infracciones penales concretas, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto.

Queda prohibida la formación de ficheros policiales o de inteligencia, de datos relativos a los habitantes del país, sobre su raza, fe religiosa u opinión política, o su adhesión a principios de movimientos sindicales, cooperativos, asistenciales y culturales, así como a la legítima actividad que desarrollen como integrantes de organizaciones que actúen legalmente en los sectores antes indicados.

Art. 26. — En lo relativo a los derechos de acceso, rectificación y cancelación, regirán para las entidades públicas con los alcances previstos en el título precedente, con las modalidades siguientes:

1. Los titulares de los ficheros de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y organismos de inteligencia, podrán denegar el acceso, la rectificación y la cancelación de los datos de carácter personal obrantes en los mismos, en el supuesto en que tales acciones puedan ocasionar un daño significativo a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado.
  - a) Al particular que estuviera sujeto a experimentar restricciones actuales en sus derechos, como consecuencia de los datos obrantes en los ficheros en cuestión; con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso, supuesto éste en que deberá brindarse tal acceso en oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa;
  - b) A cualquiera de los miembros de las comisiones de Defensa Nacional del Congreso de la Nación, Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia, o comisión o comisiones que la sucedieran con facultades de fiscalización de los expresados órganos y actividades, en aquellos aspectos que constituyan materia de la competencia de tal comisión o comisiones.

2. También los responsables de ficheros de datos de la Dirección General Impositiva u órgano que la sucediera podrán denegar el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo anterior, en el supuesto en que dicho ejercicio sea susceptible de causar un daño cierto e inminente al legítimo ejercicio de sus funciones por parte de dicho órgano; y, con carácter general, toda vez que el afectado esté siendo objeto de ins-



pección, verificación o investigación de carácter impositiva.

Deberá, no obstante, brindarse pleno acceso a los registros en cuestión, en la oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.

Todos los supuestos de denegatoria del ejercicio de los derechos aludidos precedentemente por parte del titular de un fichero de datos aludidos en el presente título, deberán ser notificados al afectado.

Este podrá interponer dentro del décimo día, para ante el defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que se designe o cree en las provincias, en el supuesto de tratarse de ficheros dependientes de aquéllas o de los municipios, recurso administrativo, que deberá ser fundado en el mismo término.

La aludida Dirección requerirá las actuaciones al órgano que hubiera formulado la denegatoria, debiendo emitir resolución fundada en el término de treinta días de interpuesto el recurso.

Dicha decisión podrá ser impugnada por el afectado por medio de recurso judicial directo para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante el órgano judicial referido, en el término de quince días.

Regirán supletoriamente las normas establecidas para el procedimiento en segunda instancia en el recurso de apelación concedido libremente, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

3. El organismo requerido podrá fijar una tasa para el ejercicio de los derechos aludidos precedentemente, que no podrá ser superior al costo que le represente la respectiva tramitación.
4. En cualquier supuesto, se procederá a la cancelación de los datos cuando su conocimiento ya no resulte indispensable para el ejercicio de las funciones del ente almacenador.

Exceptúase el supuesto en que los datos en cuestión sean indispensables para fines científicos, o por cualquiera otra razón de interés preponderante del propio ente almacenante o del propio afectado.

Art. 27. — Los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo nacional, los titulares de entes descentralizados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los gobernadores y ministros provinciales, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los titulares de los municipios —los cuatro últimos, en la medida en que las respectivas provincias y ciudad adhieran a la presente ley— serán personal y directamente responsables, política, administrativa y patrimonialmente, por el cumplimiento de la presente ley y por la efectiva vigencia para los afectados de los derechos que ésta les reconoce, en el ámbito de sus respectivas competencias.

## TITULO V

### Ficheros de titularidad privada

Art. 28. — Las personas físicas y jurídicas privadas, podrán ser titulares de ficheros de datos que contengan datos de carácter personal, cuando ello resulte necesario para el desarrollo de las actividades legítimas de las mismas, no se perjudiquen derechos de los afectados, y se dé cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley.

Serán asimismo aplicables los preceptos de esta sección a la actividad de las personas o entidades que traten datos de índole personal por encargo de personas o entidades comprendidas en el presente título.

Art. 29. — Toda persona o entidad privada que cree un fichero de datos que en todo o en parte tengan carácter personal, deberá notificarlo previamente al defensor del pueblo de la Nación, u órgano que designe o cree cada provincia, en jurisdicción provincial.

Art. 30. — La notificación deberá contener:

1. Nombre, domicilio o razón social de la persona o entidad propietaria del fichero, y nombre y domicilio de los integrantes de los órganos de dirección y administración de la entidad, en su caso.
2. Actividad a que se dedican las personas físicas, u objeto social del ente, y finalidades para las que establecen el fichero de datos.
3. Características de las instalaciones y tipo de máquinas que habrán de emplearse para el funcionamiento del fichero y tratamiento de los datos, en el supuesto de tratarse de un fichero de datos automatizado.
4. Nombre del responsable de la protección de los datos, y medidas de seguridad a aplicarse a los fines de tal protección.
5. Tipo de datos personales almacenados por la persona o entidad, o por encargo de ella; el ente o por encargo de él.
6. En el supuesto en que el fichero de datos habrá de transmitir regularmente datos de índole personal, el receptor y el tipo de datos objeto de transmisión.
7. Si se prevén realizar cesiones de datos de carácter personal, se informará nombre y domicilio del cesionario, así como datos que habrán de constituir objeto de la cesión.
8. Las personas, o categorías de personas, sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal.
9. Las oficinas a las cuales podrán dirigirse los afectados a los fines del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Art. 31. — Regirán para los ficheros de datos pertenecientes a entidades privadas, los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación.

En caso de denegatoria u omisión de tales entidades en hacer efectivo el ejercicio de tales derechos, dentro de los términos establecidos en el artículo 11, el afectado podrá ejercer las vías recursivas contempladas en el artículo 26.

Art. 32. — Los números de los teléfonos y demás servicios de telecomunicación, junto con datos complementarios, podrán figurar en los repertorios de abonados de acceso al público, pero el afectado podrá exigir su exclusión de los mismos.

Art. 33. — Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial, antecedentes comerciales e industriales, y crédito, sólo podrán poseer ficheros de datos obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el afectado personalmente o con su consentimiento.

Podrán incluirse, igualmente, datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

En el caso referido precedentemente, se notificará a los afectados respecto de quienes se hayan registrado tales datos, para que realicen las verificaciones que crean oportunas respecto de la exactitud de los mismos, haciendo conocer los resultados a la entidad almacenadora; así como de su derecho a tomar conocimiento de la totalidad de los datos de índole personal existentes en los respectivos ficheros, y a formular respecto de la exactitud de los mismos las observaciones y a acompañar las probanzas y elementos de juicio que consideren necesarias.

La entidad almacenadora deberá tomar en cuenta las observaciones formuladas por los afectados que resultaren exactas; debiendo, en caso de duda, tornar indisponibles los datos respectivos.

Art. 34. — Las personas o entidades que se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad y venta directa y otras actividades similares, sólo podrán confeccionar ficheros de datos de carácter personal utilizando datos que figuren en documentos accesibles al público, o cuando tales datos hayan sido facilitados por los propios afectados u obtenidos con su consentimiento.

Al dirigir la correspondencia o realizar el reparto, la entidad almacenadora o la cesionaria de la misma o quien realice el envío de correspondencia o reparto en base a los datos aludidos, deberá poner en conocimiento de los afectados el origen de los datos de carácter personal utilizados; pudiendo éstos requerir ser dados de baja del fichero, y la destrucción de sus datos.

Art. 35. — Sólo podrán ser utilizados datos de carácter personal en la realización de encuestas de opinión, trabajos de estudio de mercado, investigación científica y técnica y actividades similares, cuando los datos hubieran sido obtenidos con el consentimiento de los afectados.

Tales datos no podrán ser utilizados con finalidades distintas a aquéllas para las que fueron solicitados, ni cedidos sin ser previamente disociados.

## TITULO VI

### Del órgano de aplicación de la presente ley

Art. 36. — Asígnase al defensor del pueblo de la Nación, la función de constituir órgano de aplicación de la presente ley.

Sin perjuicio de la misión y funciones que le son asignadas por las leyes 24.284 y 24.379, constituirá misión del defensor del pueblo de la Nación, en tanto órgano de aplicación de la presente ley, la de asegurar dentro de la jurisdicción nacional la estricta observancia de la presente ley, de la que constituirá órgano de aplicación; y particularmente de los derechos y garantías que la misma confiere a los particulares.

Serán sus funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las restantes normas legales y reglamentarias que existan en materia de protección de datos, y controlar su aplicación;
- b) Asegurar la vigencia de los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de datos, así como de los restantes previstos en la presente ley y en las restantes normas que rijan en la materia;
- c) Dictar las instrucciones y reglamentos que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de su misión y vigencia de las garantías reconocidas a los administrados, conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes en la materia y a los reglamentos que en sus consecuencias dicte el Poder Ejecutivo nacional;
- d) Atender las peticiones y reclamaciones que formulen los afectados, así como los titulares y responsables de ficheros de datos, debiendo resolver los mismos a través de la emisión del pertinente acto administrativo;
- e) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de ficheros de datos de índole personal, ya sea a solicitud o por propia iniciativa, a través de la pertinente publicidad;
- f) Ordenar la cancelación y destrucción de datos de índole personal y/o de los respectivos ficheros, ante incumplimientos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos;
- g) Ejercer las potestades sancionatorias previstas en el título VII de la presente;
- h) Dictaminar con carácter necesario, en forma previa a la remisión por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación, de todo proyecto de ley relativo a protección de datos de carácter nacional, así como al dictado por parte del órgano referido en primer término de todo decreto vinculado con la materia que nos ocupa;
- i) Requerir de los responsables de ficheros de datos de índole personal, todos los datos que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido;

- j) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad de la existencia de ficheros de índole personal, a cuyo fin y sin perjuicio de las inspecciones y verificaciones que estime pertinentes, procederá a dar a publicidad en forma periódica una relación con los nombres de tales ficheros, incluyendo los de sus titulares y responsables.

Llevará, asimismo, el Registro de Ficheros de Datos de Carácter Personal, en el que constará la nómina de los ficheros de dicha naturaleza correspondientes a su jurisdicción, ya sea de titularidad pública o privada, con las excepciones establecidas en la presente ley; sus sedes, nombre y domicilio de los titulares y responsables de los mismos, naturaleza de los datos personales que contienen, y el horario y formalidades establecidas para su consulta.

Como consecuencia de la adhesión de las provincias a la presente ley, o a través de otros convenios con esas provincias, procurará incorporar la nómina de los ficheros de datos de carácter personal existentes en aquéllas, facilitando asimismo a las mismas la nómina de los existentes en su jurisdicción, con las excepciones que la reglamentación determine.

Dichos registros estarán a disposición de los interesados para su consulta;

- k) Emitir sendos informes anuales que remitirá al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo nacional, describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos, y proponiendo los cambios legislativos y reglamentarios que requiera el mejor desempeño de su cometido; así como todos los informes que les requieran los órganos Ejecutivo y Legislativo nacional, y los gobiernos provinciales, sobre las materias de su competencia;
- l) Controlar y otorgar las autorizaciones necesarias, en caso de que ello resulte procedente, con relación a las transferencias internacionales de datos de carácter personal;
- m) Vincularse con los organismos de protección de datos de carácter personal inexistentes en otros países, a fin del intercambio de experiencias y la implementación de la cooperación internacional en materia de protección de datos de carácter personal;
- n) Velar juntamente con los órganos que tengan a su cargo la aplicación de las leyes respectivas, por el cumplimiento de las leyes que contengan normas especiales en materia de protección de datos de carácter internacional;
- o) Impartir recomendaciones a los organismos públicos y a personas y entidades privadas, tendientes a la mejora de la protección de datos;
- p) Asesorar al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo nacional y a los ministros individualmente, así como, a su requerimiento, al Poder Judicial de la Nación y a las autoridades pro-

vinciales o municipales, con relación a la protección de datos de carácter personal;

- q) Requerir informes a todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, así como a entidades privadas, los que deberán suministrarlos;
- r) Promover investigaciones; realizar pericias; y citar y hacer comparecer testigos, con intervención del Poder Judicial;
- s) Las restantes funciones que se le confieren en la presente ley, o que le otorguen las normas legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro en materia de protección de datos de carácter personal.

Art. 37. — Integrarán la jurisdicción del defensor del pueblo de la Nación, a los fines de la aplicación de la presente ley:

1. Los ficheros de datos pertenecientes a entes estatales nacionales.
2. Los ficheros de datos destinados a contener datos de carácter personal de habitantes de más de una jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires o de otros países, o que sean llevados en más de una jurisdicción, o que estén destinados a transmitir o que transmitan, cedan comuniquen o difundan datos de una jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires, a otra jurisdicción, o fuera del país.
3. Los ficheros de datos correspondientes a las personas físicas o entidades privadas dedicadas al comercio interjurisdiccional en cualquiera de sus formas (transporte, comunicaciones, servicios públicos, etcétera).
4. Las cesiones o transferencias de datos interjurisdiccionales.

Los restantes ficheros de datos serán de jurisdicción provincial.

Art. 38. — El defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, y los funcionarios de la Defensoría y de los restantes órganos aludidos que cuenten con mandato escrito de los mismos al efecto estarán facultados, cuando fuere necesario para el cumplimiento de su misión, a entrar con autorización judicial en lugares pertenecientes u ocupados por la entidad almacenadora, sea ésta pública o privada; a realizar en ellos comprobaciones e inspecciones y a examinar los documentos comerciales.

Especialmente controlarán el libro especial que llevará el responsable de la protección de datos conforme dispone el artículo 19 del presente, así como los datos almacenados de índole personal; los programas de tratamiento de datos, y los equipos utilizados para el almacenamiento y tratamiento de los mismos.

Los órganos de aplicación aludidos podrán también requerir la exhibición o envío de documentos y datos, si no optare por examinarlos en el lugar en que se encuentran.

La exhibición de datos y documentos o los registros en las sedes de las entidades públicas almacenadoras de datos no tendrán lugar, cuando el presidente de la Nación o el ministro del Poder Ejecutivo nacional competente se opusieran fundadamente a ellas, por entender que su realización es susceptible de poner en peligro la defensa nacional o la seguridad interior de la República Argentina.

En ta es supuestos, deberá informar los motivos a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Estas podrán disponer por resolución conjunta que la diligencia se realice, pudiendo encomendarla según los casos a las comisiones de Defensa de ambas Cámaras, o bien a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia u órgano que las reemplace.

Art. 39. — En jurisdicción provincial, el cumplimiento de las funciones encomendadas en la presente ley al defensor del pueblo de la Nación, será encomendado al órgano administrativo que disponga cada provincia, por decisión de la autoridad que resulte al efecto competente en ella.

Art. 40. — En lo relativo al ejercicio de las competencias que la presente ley le reconoce, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, no dependerá de ninguna autoridad.

Art. 41. — Cualquier persona podrá dirigirse al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, cuando estime que se han lesionado sus derechos, con ocasión de la obtención, tratamiento o registro de datos suyos de índole personal o por encargo de los titulares de ficheros de datos de índole personal públicos o privados.

El referido funcionario deberá proceder a efectuar las pertinentes investigaciones, tendientes a establecer la veracidad de los extremos denunciados.

También promoverá la investigación de aquellas irregularidades que advirtiera *prima facie* como consecuencia de las inspecciones y determinaciones que practicara.

Se aplicará en todo lo no previsto en la presente ley el Reglamento de Investigaciones vigente para la administración pública nacional.

## TITULO VII

### Régimen sancionatorio

Art. 42. — Los titulares y responsables de ficheros privados de datos de índole personal estarán sujetos al régimen sancionatorio previsto en el presente título.

Constituirán infracciones al presente régimen de protección de datos de índole persona:

- a) No efectuar los registros en la forma prescrita, o no realizar las comunicaciones establecidas, o no realizar la gestión del fichero de datos de índole personal de que se trate en el modo determinado, en los procedimientos y normas dictados por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que se designe o cree en

jurisdicción provincial, si se tratare de faltas exclusivamente formales, y no constituyeran otra infracción prevista en el presente título;

- b) No cumplir las instrucciones impartidas por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, o de funcionarios dependientes de los mismos facultados para ello, si el hecho no constituyera otra infracción o delito;
- c) Mantener ficheros de datos de índole personal u obtener, tratar, difundir o ceder datos de esa índole, sin las condiciones y medidas de seguridad establecidas en la presente ley, su reglamentación y en las instrucciones y reglamentos emitidos por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que cada provincia designe o cree, en jurisdicción provincial;
- d) No proporcionar al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, o a funcionario competente dependiente de los mismos, la información que éstos solicitaran, al momento o, de no ser posible por causas justificadas, dentro de los quince días de serle requerida;
- e) No proceder, de oficio o a solicitud de los afectados o de las personas o entidades facultadas para ello, a la cancelación de datos de índole personal, cuando hubieren desaparecido los motivos que determinaron su obtención, tratamiento o registro;
- f) No proceder a la rectificación, actualización o cancelación de datos erróneos, desactualizados o incompletos;
- g) No proceder a tornar indisponibles datos de índole personal cuya exactitud hubiera sido cuestionada por el afectado o por persona o entidad facultada para hacerlo;
- h) Proceder a la creación de ficheros de datos de índole personal sin recabar las autorizaciones establecidas para ello, o sin efectuar las publicaciones prescritas, o sin designar responsable de la protección de datos;
- i) Proceder a la obtención de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de los afectados, en los casos en que éste sea exigible, o sin proporcionarles la información prevista en la presente ley;
- j) Proceder a la creación de ficheros de datos de carácter personal o a la obtención de datos de dicha índole, con finalidades diversas a las denunciadas a la autoridad competente, o las manifestadas a los afectados;
- k) Efectuar el tratamiento de datos de índole personal, o utilizarlos, difundirlos o cederlos, conculcando los derechos y garantías establecidos en favor de los afectados en la presente ley;
- l) Impedir o dificultar el ejercicio del derecho de acceso, y no proporcionar la información a los afectados prevista en la presente ley, en su

reglamentación, o en los reglamentos establecidos por el defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, en la forma y en el término allí dispuestos, que no podrá exceder de treinta (30) días posteriores al requerimiento efectuado por medio fehaciente;

- m) Mantener datos de carácter personal inexactos o desactualizados o con posterioridad a la cesación del motivo que determinó su obtención, cuando con ello resultaren conculcados los derechos de los afectados amparados por la presente ley;
- n) No guardar el secreto, cuando el mismo es exigible por disposiciones de la presente ley, o de otras normas jurídicas vigentes;
- o) No remitir al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, las notificaciones requeridas por la presente ley, su reglamentación, o las instrucciones y reglamentos expedidos por el funcionario arriba referido, cuando ello dificultare o impidiera al mismo el cumplimiento de sus atribuciones; así como los documentos e informaciones que el mismo requiriere;
- p) Obstruir, dificultar o impedir las inspecciones que dispusiere el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial;
- q) Obtener datos de índole personal con fraude o engaño, o en forma contraria a lo establecido en las normas vigentes al momento de hacerlo, si el hecho no constituyera delito o infracción más severamente penada;
- r) Difundir, comunicar o ceder datos de índole personal, fuera de los supuestos en que ello es permitido por la presente ley;
- s) Incumplir las prohibiciones sobre la obtención, tratamiento, registro, comunicación o difusión de datos de determinado carácter, establecidas en la presente ley, o en otras normas legales en vigencia;
- t) No cesar en el uso ilegítimo de datos de carácter personal, cuando ello le fuere requerido por el defensor del pueblo de la Nación u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, o por funcionarios competentes dependientes de los mismos;
- u) Ceder, comunicar o difundir datos de índole personal con destino a países que no proporcionen garantías equivalentes a los afectados, sin autorización del defensor del pueblo de la Nación, u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial;
- v) Obtener o tratar datos de carácter personal en forma ilegítima o con propósitos ilegítimos, o violando los derechos y garantías establecidas en la presente ley o en otras normas aplicables, cuando ello se traduzca en menoscabo o desco-

nocimiento de los derechos y garantías reconocidos a los habitantes por la Constitución Nacional.

Art. 43. — Determinada la comisión de cualquiera de las infracciones referidas en los puntos precedentes, y sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de la Auditoría General de la Nación, y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, según correspondiere, así como de formular las denuncias penales pertinentes en el supuesto de entender que los mismos podrán constituir un ilícito penal, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, aplicará a los responsables y titulares de ficheros de datos de índole personal, las sanciones siguientes:

1. Apercibimiento;
2. Suspensión de un mes a dos años, del funcionamiento del fichero de datos de que se trata, con la correlativa inhabilitación para su titular, de poseer otro.
3. Suspensión de un mes a dos años en el carácter de responsable del fichero de datos de que se trate y de todo otro, así como en el ejercicio de toda profesión vinculada con la informática, el registro o tratamiento de datos.
4. Clausura definitiva del fichero de datos de que se trata, con inhabilitación perpetua para ser titular de ficheros de datos de índole personal.
5. Cesación definitiva en el carácter de responsable del fichero de datos de que se trate y de todo otro, con inhabilitación perpetua para ser titular o responsable de ficheros de datos de índole personal, así como de toda profesión vinculada a la informática, a la obtención o al tratamiento de datos.
6. Multa de pesos cincuenta mil (50.000) a un millón (1.000.000), que podrá imponerse como pena principal o accesoria a las previstas en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del presente.

Las sanciones establecidas en los puntos 1, 2 y 3 precedentes, serán aplicables a las infracciones contempladas en los apartados a), b), c), d), e), f) y g).

En el supuesto de reiterarse en dos oportunidades la comisión de la infracción, serán aplicables cualesquiera de las restantes sanciones previstas en el presente artículo.

Serán aplicables las sanciones establecidas en los puntos 2 y 3 del presente artículo, a las infracciones contempladas en los apartados h), i), j), k), l), m) y n) del artículo precedente.

En caso de reiterarse en una o más oportunidades la comisión de la infracción, podrá aplicarse cualesquiera de las restantes sanciones previstas en este artículo.

Con relación a las infracciones previstas en los apartados o), p), q), r), s), t), u), y v) del artículo precedente, serán aplicables las sanciones establecidas en los puntos 4, 5 y 6 del presente artículo.

No serán aplicables las sanciones previstas en este artículo, a los responsables que con anterioridad a la intervención del defensor del pueblo de la Nación u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, hubieran puesto en conocimiento del funcionario aludido o de los funcionarios competentes dependientes de él los hechos constitutivos de infracción, y hubieran brindado su colaboración tendiente a disminuir o a suprimir los efectos de éstos.

Las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables en caso de tratarse de ficheros de datos de carácter personal pertenecientes a entidades estatales, excepción hecha de las previstas en los puntos 2 y 4 del presente artículo.

En cuanto a las multas previstas en el mismo, las mismas serán aplicadas a los funcionarios que se desempeñen como titular de la dirección nacional o general o ente descentralizado a que pertenece el fichero, y a quien actúe como responsable del mismo.

Corresponderá asimismo a los funcionarios previstos en el apartado precedente, la aplicación de la sanción de exoneración, siendo además responsables patrimonialmente por los daños que su conducta cause a los afectados y a la administración.

Art. 44. — Prescribirán a los tres años, las infracciones contempladas en el artículo precedente.

Art. 45. — Las decisiones que en materia de investigación y determinación de infracciones adopte el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, podrán ser impugnadas a través de recurso judicial directo, que tramitará para ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso deberá interponerse y fundarse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la decisión respectiva, en la referida Cámara Nacional.

Esta procederá a requerir las actuaciones del defensor del pueblo de la Nación, y a dictar sentencia dentro de los cuarenta y cinco días de concluida la sustanciación del recurso con el pertinente traslado a conferirse del mismo al funcionario precedentemente referido, o bien de concluirse la producción de prueba, en el caso de disponer el tribunal la producción de la misma.

Se aplicarán supletoriamente las normas relativas al recurso de apelación concedido libremente, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el supuesto de impugnarse en jurisdicción provincial la decisión de un órgano provincial que constituya órgano de aplicación de la presente ley, intervendrá el tribunal competente conforme a las normas procesales vigentes en dicha jurisdicción, aplicándose el procedimiento que se disponga en la ley de adhesión provincial.

### TITULO VIII

#### Normas penales

Art. 46. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el titular o responsable de un fichero de datos, de carácter personal, o quien interviniera en cualquier etapa del tratamiento de datos, que ilegalmente revelare a terceros tales datos, facultara o posibilitara a terceras personas el acceso o utilización de los mismos, o que

no guardan secreto con relación a ellos; aun luego de concluida la relación que lo ligara a dicho fichero.

Art. 47. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente penado, quien habiendo sido objeto de inhabilitación por decisión firme del defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, para desempeñarse como titular o responsable de ficheros de datos de carácter personal, o en el desempeño de profesiones vinculadas con la informática, la obtención o el tratamiento de datos, quebrantara por sí o por interpósita persona tal inhabilitación.

Art. 48. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, el titular y el responsable de un fichero de datos de carácter personal clausurado por decisión firme del defensor del pueblo de la Nación, u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, que pese a lo dispuesto por dicha decisión continuaran gestionando el fichero, o la obtención, tratamiento, y registro de datos para el mismo, por sí o por medio de terceros; o que cedieran, comunicaran o difundieran los datos contenidos en el mismo.

Art. 49. — En aquellos casos en los cuales con motivo de la investigación de las infracciones previstas precedentemente, se advirtieran serios y graves indicios de utilización o cesión ilícita de datos de carácter personal, con lesión de derechos y garantías constitucionales, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, podrá disponer con carácter cautelar y por resolución fundada la suspensión del funcionamiento e inmovilización de los datos de uno o más ficheros de datos de carácter personal.

### TITULO IX

**Del ejercicio de la acción de amparo para obtener el acceso, modificación, supresión, rectificación y confidencialidad de los datos referidos a las personas**

Art. 50. — Toda persona podrá interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos referidos a ella y de su finalidad, que consten en registros o ficheros de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.

En los casos a que alude el presente artículo, la expresada acción podrá ser deducida en lugar de los procedimientos administrativos y acciones judiciales previstos en la presente.

La sustitución de las vías judiciales previstas por el ejercicio de la acción de amparo, requerirá exclusivamente que el particular invoque fundadamente circunstancias conforme a las cuales tales acciones judiciales no constituyen un remedio idóneo para dar satisfacción a su pretensión.

## TITULO X

## Disposiciones transitorias y complementarias.

Art. 51. — La presente ley entrará en vigencia en el orden nacional, al día siguiente de su publicación.

Sin perjuicio de hacerlo en forma inmediata respecto de los ficheros de datos a que se alude en el artículo 37, respecto de los restantes entrará en vigencia para cada una de las provincias que adhieran a la misma, en el momento que disponga la respectiva ley provincial de adhesión.

Art. 52. — Dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser efectuadas las notificaciones y publicaciones previstas en la misma, con relación a los ficheros de datos de carácter personal preexistentes a su entrada en vigencia, y realizarse las adaptaciones y modificaciones técnicas tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la misma.

Art. 53. — El Poder Ejecutivo nacional procederá dentro de los ciento ochenta días de sancionada la presente a reglamentarla.

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán tomados de los ingresos producidos por la tasa que se crea en el artículo 40; y, en cuanto la misma no los cubriera, de "Rentas generales" con imputación a la misma, hasta la inclusión de las partidas respectivas en la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional correspondiente al próximo ejercicio.

Art. 54. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray.

Texto del proyecto presentado por  
el senador Romero Feris

## PROYECTO DE LEY

## El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Toda persona física o jurídica podrá requerir de los registros y/o centros y/o bancos de datos públicos o privados destinados a suministrar información una constancia de la que surjan los datos sobre dicha persona allí registrados, cualquiera fuere la índole de los mismos.

Art. 2º — El registro deberá proporcionar la información requerida en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas. Vencido el mismo, el requirente podrá recurrir a la vía judicial para que se le entregue dicha información.

Art. 3º — Cuando la información contenga datos falsos y/o discriminatorios, el solicitante podrá requerir al registro que los mismos sean rectificadas en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas. Vencido el mismo podrá exigir judicialmente la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos.

Art. 4º — La acción judicial tramitará por las normas del proceso sumarísimo establecidas en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 5º — Quedan exceptuados de las disposiciones de la presente ley aquellos registros que no provean infor-

mación a terceros, así como también cuando se afectare el secreto de las fuentes de información periodística.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José A. Romero Feris.

Texto del proyecto presentado por  
el senador Alasino

## PROYECTO DE LEY

## El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Cualquier persona estará habilitada para iniciar la acción de amparo especial de *habeas data* cuando los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer información se nieguen a:

- a) Mostrar los datos que consten sobre el interesado;
- b) Informar sobre la finalidad de los datos recabados;
- c) Suprimir, rectificar, dar confidencialidad o actualizar los datos en caso de que éstos sean falsos, inexactos, discriminatorios o hayan sido obtenidos ilícitamente.

Art. 2º — El interesado tendrá un plazo de 30 días para iniciar la acción el que se contará desde la negativa del registro o banco de datos a hacer lugar a los requerimientos indicados en los incisos a), b) y c) del artículo anterior.

Art. 3º — Serán competentes los jueces federales cuando la acción de amparo especial de *habeas data* se interponga contra un registro o banco de datos público.

Art. 4º — Será competente para entender en la acción de amparo especial de *habeas data*, el juez del domicilio del actor o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

Art. 5º — Se aplicará a esta acción el procedimiento previsto para la acción de amparo de todo lo que no esté modificado por la presente ley.

Art. 6º — El trámite de la acción de amparo especial de *habeas data* será el correspondiente al proceso sumarísimo.

Art. 7º — En los casos en que el actor solicite la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos, deberá adecuarse el procedimiento con la finalidad de facilitar la prueba.

Art. 8º — La acción de amparo especial de *habeas data* se interpondrá por escrito y la presentación deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Individualizar el nombre y domicilio del registro o banco de datos demandado;
- b) Alegar las razones por las cuales el interesado entiende que en el registro o banco de datos individualizado existe información referida a su persona y el perjuicio actual o inminente que tal situación le acarree;
- c) En su caso, alegar las razones por las que el interesado considera que la información que le

atañe ha sido ilícitamente recabada o resulta falsa, inexacta o discriminatoria;

- d) Ofrecer la prueba, acompañando la documental que se encuentre en poder del interesado. El número de testigos no podrá exceder de dos (2).

Art. 9º — El juez previo a toda actuación deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción.

Art. 10. — Admitida la acción, el juez requerirá al registro o banco de datos demandado, la remisión de la información concerniente al actor, y en su caso el soporte de tales datos, la documentación que sirvió de sostén para su inclusión en el banco o registro de datos o cualquier otro aspecto que resulte conducente, acompañando copia del escrito de inicio.

Art. 11. — El registro o banco de datos demandado no podrá alegar la confidencialidad de la información solicitada para negarse a cumplir el pedido del juez.

Art. 12. — Los registros o bancos de datos públicos y privados sólo podrán excusarse de informar en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se afecte el secreto de las fuentes de información periodística. En este caso, el registro o banco de datos podrá negarse a revelar la identidad del autor de la información;
- b) Cuando se aleguen razones que afecten a la defensa nacional o alto interés del Estado. En este caso se deberá fundar y probar debidamente la afectación alegada.

Art. 13. — El registro o banco de datos requerido deberá contestar el pedido del juez en el plazo establecido, acompañando toda la información que tuviera sobre el requerido y en su caso, la documentación que sirva de sostén a la información incluida en el registro o banco de datos y alegar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada.

Al contestar el informe, el registro o banco de datos podrá ofrecer prueba en los términos establecidos en el artículo 8º.

Art. 14. — Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida, en su caso, la prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día.

Si se declarara procedente la acción, y en caso de que corresponda, la sentencia ordenará al registro o banco de datos demandado la supresión, rectificación, actualización o declaración de confidencialidad de la información, estableciendo un plazo para su cumplimiento.

Art. 15. — Si el registro o banco de datos no cumpliera con la sentencia, el juez a pedido de parte, podrá:

- a) Aplicar astringentes, si el condenado fuera un registro o banco de datos privado;
- b) Aplicar multas, si el condenado fuera un registro o banco de datos público.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Alasino.

Texto corregido de la sanción de la  
Honorable Cámara de Diputados de la Nación  
(5 de junio de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto la salvaguarda de los datos personales tanto de las personas físicas como jurídicas tratados en registros o bancos de datos, automatizados o no, de los sectores públicos o privados, o registrados en soporte físico susceptible de tratamiento automatizado o no, o mediante otras técnicas, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Art. 2º —

1. El régimen de la presente ley no será de aplicación:

- a) A los registros o bancos de datos de titularidad pública cuyo objeto, legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su publicidad con carácter general;
- b) A los registros o bancos de datos mantenidos por personas físicas con fines exclusivamente personales;
- c) A los registros o bancos de datos de información judicial, científica, tecnológica o comercial, que reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales;
- d) A los registros o bancos de datos mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas reconocidos, en relación a sus afiliados, asociados, miembros y ex miembros, y sólo en cuanto estén referidas a una finalidad específica, sin perjuicio de la cesión de datos que queda sometida a lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley, salvo que resultare de aplicación el artículo 11 por tratarse de datos de índole personalísimo;
- e) Los registros o bancos de datos de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística por cualquier medio de comunicación social. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes ni pretender que las mismas sean reveladas.

2. Se regirán por sus disposiciones específicas:

- a) Los registros o bancos de datos pertenecientes al Registro Nacional de Reiniciencia y Estadística Criminal y al Registro Nacional de las Personas;
- b) Los registros o bancos de datos regulados por la legislación sobre régimen electoral.



Art. 3º — A los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) *Datos de carácter personal.* Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables sobre características propias o informaciones objetivas;
- b) *Registro o banco de datos.* Todo conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado o no, cualquiera fuera la forma o modalidad de su creación y organización, y que estuviere debidamente registrado;
- c) *Tratamiento de datos.* Operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan almacenar, grabar, elaborar, modificar, resguardar, disociar y eliminar datos de carácter personal, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias;
- d) *Responsable del registro o banco de datos.* Persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, titular del registro o banco de datos;
- e) *Titular de los datos.* Persona física o jurídica, interesada o afectada, a la que se refieren los datos que fueran objeto de tratamiento conforme la definición contenida en el apartado c) del presente artículo;
- f) *Procedimiento de disociación de datos.* Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable;
- g) *Almacenamiento de datos.* La obtención, toma o custodia de datos, en registros o bancos de datos para su utilización posterior.
- h) *Cesión de datos.* Dar a conocer los datos tratados a terceros, en forma tal que los mismos sean suministrados por el responsable del registro o banco de datos;
- i) *Modificación de datos.* Todo cambio en el contenido de datos almacenados en registros o bancos de datos;
- j) *Eliminación de datos.* Destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, automatizados o no, sea cual fuere el procedimiento empleado para ello.

## TÍTULO II

### Principios generales para la protección de datos

Art. 4º — *Calidad de datos.*

1. Sólo podrán recogerse datos de carácter personal para su tratamiento, cuando tales datos fueran adecuados, pertinentes y no excesivos en

relación al ámbito y finalidad legítimas para las que se hubieran obtenido.

2. No podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieren sido recogidos los datos de carácter personal objeto de tratamiento.
3. Dichos datos serán exactos y actualizados de forma tal que respondan con veracidad a la situación real del interesado.
4. Si los datos de carácter personal, sometidos a tratamiento, resultaren ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, el responsable del registro o banco de datos procederá a eliminarlos o sustituirlos por la información rectificada o completada, sin perjuicio de las facultades que a los efectos reconoce el artículo 15 de la presente ley.
5. Los datos de carácter personal deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios a los fines para los cuales hubieran sido recabados.

Los datos no serán conservados de forma que permitan la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido tratados.

El procedimiento por el cual se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos será regulado por vía reglamentaria. El régimen será de excepción e interpretación restrictiva.

6. Los datos serán almacenados de forma que permitan el ejercicio de su acceso por parte del interesado.

Art. 5º — *Comisión Bicameral de Seguimiento de Protección de Datos.* Créase en el ámbito del Congreso Nacional, la Comisión Bicameral de Protección Legislativa de Datos a los fines de posibilitar, en general, la salvaguarda y protección de los derechos tutelados por la presente ley, sin perjuicio de las facultades propias del Poder Judicial.

La misma será integrada por cinco diputados y cinco senadores pertenecientes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General cuyo reglamento será dictado por sus propios miembros y con representación de las minorías.

Art. 6º — *Consentimiento del interesado.* El tratamiento de datos de carácter personal, requerirá el consentimiento expreso por escrito del titular, salvo que una ley disponga lo contrario.

Art. 7º — No será preciso el consentimiento cuando:

- a) Los datos de carácter personal se obtengan de fuentes accesibles al público;
- b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia;
- c) Se refieren a personas vinculadas por un negocio jurídico, una relación laboral, una rela-

ción administrativa y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.

Art. 8º — El consentimiento podrá ser revocado, sin poder atribuirle efectos retroactivos.

Art. 9º — *De la ilicitud del tratamiento de datos.* El tratamiento de datos de índole personal, protegido por la presente ley, será ilícito, cuando el interesado no hubiere prestado su consentimiento por escrito.

Si el consentimiento se otorgara juntamente con otras declaraciones se deberá informar de ello expresamente, por escrito al interesado y en instrumento separado.

Art. 10. — *Derecho de información en la recolección de datos.*

1. Los interesados a los que se solicitaran datos de carácter personal deberán ser previamente informados de manera expresa, precisa e inequívoca:

a) De la existencia de un registro de datos de carácter personal, de la finalidad de la recolección, del tratamiento y de los destinatarios de dicha información. Así como de la imposibilidad de modificar su finalidad y los destinatarios de la misma;

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean formuladas en el sector público, y del carácter facultativo en el caso del sector privado;

c) De la posibilidad de ejercer los derechos presentes en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional;

d) De la identidad y domicilio del responsable del registro o banco de datos, y la referencia del órgano de aplicación.

Art. 11. — *Datos especialmente protegidos.*

1. No podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen ideología, raza, religión, hábitos personales y comportamiento sexual.

2. No podrán ser objeto de tratamiento, los datos de carácter personal que revelen estado de salud, situación patrimonial y obligaciones tributarias, salvo que mediaren razones de interés general, y así lo disponga una ley o exista consentimiento del interesado.

3. Los datos de carácter personal relativos a procesos penales o infracciones administrativas, sólo podrán ser incluidos en registros o bancos de datos pertenecientes a las administraciones públicas competentes, en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

Art. 12. — *Datos relativos a la salud.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 sobre cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los pro-

fesionales correspondientes, podrán tratar datos de carácter personal relativos a la salud de personas que a ellos consulten o que hubieran de ser tratados por los mismos.

Art. 13. — *Seguridad de los datos.* El responsable del registro o banco de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su adulteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología aplicada, la naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estuvieren expuestos, sean provenientes de la acción humana o del medio físico natural.

Art. 14. — *Deber de secreto.* El responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardar dicho secreto, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el responsable del registro o banco de datos.

Art. 15. — *Cesión de datos.*

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario con el previo consentimiento por escrito del interesado. Será nula la cesión si no constase con claridad la finalidad de la misma.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será necesario cuando:

a) Una ley disponga lo contrario;

b) Se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público;

c) La cesión tenga por destinatarios a los magistrados del Poder Judicial, al defensor del pueblo, o al ministerio público, en ejercicio de las funciones propias de sus competencias;

d) La cesión se produzca entre las administraciones públicas en los supuestos previstos en el artículo 24;

e) La cesión de datos de carácter personal relativos a la salud, que sea necesaria para solucionar una urgencia, sin que para ello hubiera otro medio más idóneo y se requiera acceder a un registro o banco de datos, o para realizar estudios epidemiológicos previa disociación.

3. Siempre podrá ser revocado el consentimiento para la cesión de datos de carácter personal y el mismo no tendrá efectos retroactivos.

4. El cesionario de datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la cesión a la observancia de las disposiciones de la presente ley.

5. Si la cesión se efectuase previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores.

### TITULO III

#### Transmisión de datos al extranjero

Art. 16. — *Tratamiento internacional de datos de carácter personal.* Queda prohibida la cesión o transmisión internacional de datos entre la República Argentina y otros Estados, o con organismos internacionales o supranacionales que no aseguren una protección equivalente de los datos de carácter personal.

### TITULO IV

#### Derechos de los titulares

Art. 17. — *Impugnación de las valoraciones basadas exclusivamente en el tratamiento de datos de carácter personal.* El titular podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que tengan por único fundamento la valoración que de su persona se haga a partir del tratamiento de datos de carácter personal.

Art. 18. — *Derecho de información.* Cualquier persona podrá conocer la existencia de registros o bancos de datos de carácter personal, su finalidad y la identidad del responsable. Esta información deberá ser suministrada por el Registro General de Protección de Datos que será de consulta pública.

Art. 19. — *Derecho de acceso.*

1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal que consten en registros o bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes, así como de quienes han solicitado información sobre una persona.
2. La información podrá consistir en la mera consulta de los registros o bancos de datos, por medio de su visualización, o en la comunicación de la misma mediante escrito inteligible, aun cuando tengan sistemas de claves o códigos convencionales que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerlo en cualquier momento.

Art. 20. — *Derecho de rectificación, eliminación y conservación.*

1. El responsable del registro o banco de datos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación, actualización o eliminación en el plazo máximo de cinco días hábiles.
2. Los datos de carácter personal que resulten inexactos, incompletos o discriminatorios serán rectificados o eliminados, respectivamente.

3. Si los datos rectificadas o eliminados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del registro o banco de datos deberá notificar la rectificación o eliminación efectuada al cesionario, dentro del tercer día hábil de realizado el tratamiento de datos por el responsable.

4. La eliminación de datos incompletos no procederá cuando pudiese causar perjuicio a intereses legítimos de afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación de conservar los datos, pudiéndose completar los mismos.

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable del registro o banco de datos y el interesado, y mientras subsista la finalidad que lo justifique.

Art. 21. — *Procedimiento de acceso.* A los efectos de la presente ley no se exigirá contraprestación alguna por el acceso, por la rectificación, actualización o eliminación de los datos de carácter personal inexactos, incompletos o discriminatorios.

Art. 22. — *Tutela de los derechos.*

1. Deberán ser indemnizados los afectados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley por parte del responsable del registro o banco de datos, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos.
2. Cuando se negase el acceso al dato o a su rectificación o eliminación, total o parcial, el afectado podrá solicitar la tutela de sus derechos promoviendo acción de amparo, en los términos del artículo 36 de la presente.
3. En los casos de registros o bancos de datos de titularidad pública o privada, la responsabilidad por daño se exigirá por medio de acción sumaria ante los órganos de jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes.

### TITULO V

#### Disposiciones sectoriales.

#### Registros o bancos de datos de la administración pública nacional

Art. 23. — *Creación, modificación o eliminación.*

1. La creación, modificación o eliminación de registros o bancos de datos de la administración pública nacional sólo podrán hacerse por medio de acto legislativo o administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Nación y anotado en el correspondiente Registro General de Protección de Datos, el cual funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Oficial.

## 2. Dichos datos deberán indicar:

- a) La finalidad del registro o banco de datos y usos previstos para los mismos;
- b) Las personas sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal que resulten obligadas a suministrarlos;
- c) El procedimiento empleado o a emplearse para el tratamiento de datos de carácter personal;
- d) La estructura básica del registro o banco de datos y la descripción de los datos de carácter personal en ellos contenidos;
- e) Las cesiones de datos de carácter personal que, en su caso, se prevean;
- f) Los órganos de la administración responsables de los registros o banco de datos;
- g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, información, rectificación, actualización o eliminación de datos de carácter personal.

## 3. En las disposiciones que se dicten para la eliminación de registros se establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para aquélla.

Art. 24. — *Cesión de datos entre administraciones públicas.*

1. Los datos de carácter personal sometidos a tratamiento por parte de las administraciones públicas en el ejercicio de sus atribuciones, no serán cedidos a otras administraciones públicas para el desempeño de competencias diferentes o que versen sobre materias distintas, salvo cuando la cesión hubiese sido prevista por las normas de creación del registro o banco de datos o por disposición posterior de igual o superior rango.
2. Podrán ser objeto de cesión los datos de carácter personal que una administración pública obtenga con destino a otra.

Art. 25. — *Cesión de datos a registros o bancos de datos privados.* No obstante lo dispuesto en el artículo 15, inciso 2, apartado b), la cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a registros o bancos de datos de titularidad privada sino con el consentimiento del interesado o cuando una ley así lo disponga.

Art. 26. — *Registros o bancos de datos de defensa y seguridad nacional.*

1. Los registros o bancos de datos de las fuerzas armadas y organismos de seguridad e inteligencia que contengan datos de carácter personal, que,

por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, quedarán sujetos al régimen general de la presente ley.

2. El tratamiento de datos de carácter personal con fines de defensa nacional por parte de las fuerzas armadas y organismos de seguridad e inteligencia sin consentimiento de los afectados, quedarán limitados a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real y cierto, para la defensa nacional, debiendo ser tratados en registros o bancos de datos específicos y establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
3. Los datos de carácter personal registrados con fines policiales serán eliminados cuando dejen de ser necesarios para las averiguaciones que motivaron su tratamiento.

A estos efectos se considerará especialmente la edad del interesado, el carácter de los datos tratados, la necesidad de mantener dichos datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, indulto, amnistía, rehabilitación y prescripción de la responsabilidad.

Art. 27. — *Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y eliminación de datos.*

1. Los responsables de los registros o bancos de datos que contengan la información referida en el apartado 2 del artículo anterior podrán denegar por resolución motivada, el acceso, la rectificación o la eliminación de datos de carácter personal en función de los peligros que pudieran amenazar la defensa nacional, la protección de los derechos de terceros y las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
2. Los responsables de los registros o bancos de datos de la hacienda pública podrán igualmente denegar por resolución motivada, el ejercicio de los derechos mencionados en el apartado anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando el afectado estuviere siendo objeto de inspección e investigación con su conocimiento.
3. El afectado al que se le niegue arbitrariamente, en forma total o parcial, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del defensor del pueblo, o promover acción de amparo.

## TITULO VI

## Registros de titularidad privada

Art. 28. — *Creación.* Podrán crearse registros o bancos de datos de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento de la actividad u objeto legíti-

mo de la persona física o jurídica titular y se respeten las garantías que esta ley establece para la protección de los derechos en ella consagrados. Estos registros o bancos de datos deberán inscribirse en el Registro General de Protección de Datos al que se refiere el artículo 23 de la presente.

**Art. 29. — Comunicación de la cesión de datos.**

1. El responsable del registro o banco de datos privados que efectúe cesión de datos, deberá informar de ello a los interesados, indicando la finalidad del registro o banco de datos, la naturaleza de los datos que han sido cedidos, y el nombre y domicilio del cesionario, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, debiendo contar con el consentimiento previsto en el mismo.
2. No existirá obligación en comunicar la cesión de datos cuando la misma sea impuesta por ley.

**Art. 30. — Datos sobre los abonados al servicio de telecomunicaciones.** Los números de teléfonos y demás servicios prestados por empresas de telecomunicaciones, junto con otros datos complementarios, podrán figurar en los repertorios de abonados de acceso al público, siempre que el interesado no hubiere exigido su exclusión.

**Art. 31. — Prestación del servicio de tratamiento de datos.**

1. Quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, no podrán tratar los datos obtenidos con un fin diferente al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a terceros ni aun para su conservación.
2. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados, deberán ser eliminados salvo que mediare autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios, en cuyo caso se podrán tratar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

**Art. 32. — Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito.**

1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público, o del propio interesado.
2. Podrán tratarse igualmente datos de carácter personal relativos al cumplimiento o no de obligaciones, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta e interés.

En ambos casos, se notificará en el término de diez días al afectado respecto del tratamiento de dichos datos, y del registro o banco de datos donde consten los mismos.

3. Cuando el interesado lo solicite, el responsable del registro o banco de datos le comunicará los datos, evaluaciones o apreciaciones que sobre

el mismo hubieren sido elaboradas dentro del plazo máximo de cinco días.

4. Sólo se podrán tratar datos de carácter personal que sean determinantes para evaluar y apreciar la solvencia patrimonial y el crédito de su titular con una antigüedad no mayor de cinco años.

**Art. 33. — Registros o bancos de datos con fines publicitarios o análogos.** Quienes se dediquen al tratamiento de datos de carácter personal, con domicilios, reparto de documentación, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, podrán utilizar listas tratadas automatizadamente o no, cuando aquellos datos fueran accesibles al público o hubieren sido obtenidos directamente del interesado.

**Art. 34. — Registros o bancos de datos relativos a encuestas o investigaciones.** Sólo se utilizarán datos de carácter personal en las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercado, investigaciones científicas o de otras actividades, siempre que el interesado hubiera prestado libremente su consentimiento a tal efecto. Estos datos no podrán ser utilizados con finalidades distintas ni cedidos, salvo que se los disociara antes de su cesión.

**Art. 35. — Código tipo.** Mediante acuerdos, los responsables de los registros o bancos de datos de titularidad privada podrán formular códigos tipo, los que podrán establecer las condiciones de organización, funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad, programas o equipos, obligaciones de las partes intervinientes en el tratamiento de datos, garantías para el ejercicio de los derechos de los titulares de los mismos, con pleno respeto de lo previsto en la presente ley y su correspondiente reglamentación con recurso ante el defensor del pueblo como autoridad de aplicación.

## TITULO VII

### Procedimiento

**Art. 36. — La acción de amparo** prescrita por el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional deberá tramitarse por proceso sumarisimo y según el procedimiento establecido por el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez interviniente dictará sentencia que haga lugar o deniegue dicho amparo. La sentencia que lo conceda ordenará la rectificación, actualización o eliminación de los datos de carácter personal según sea el caso, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder. En caso de deducirse recurso de apelación, éste tendrá sólo carácter devolutivo.

**Art. 37. — Rechazo de la acción de amparo.** El rechazo de la acción de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante, pudiendo el afectado promover las acciones correspondientes.

## TITULO VIII

### Sancciones

**Art. 38. — Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes de los daños y perjuicios ocasionados al**

afectado y de las sanciones penales a que hubieran dado lugar los delitos cometidos, las personas responsables de los registros o bancos de datos que infringieran esta ley, serán pasibles de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), eliminación o clausura de los registros o bancos de datos por parte del defensor del pueblo, que será órgano de aplicación de acuerdo a la reglamentación que al efecto dicte la comisión bicameral creada por el artículo 5°.

Las multas que se apliquen se destinarán a la tecnificación del órgano de control, que es el defensor del pueblo.

## TITULO IX

### Alcance federal

Art. 39. — Se invita a las provincias a crear sus registros de bancos de datos provinciales y a establecer sus órganos de aplicación. La jurisdicción provincial en el marco del artículo 5° de la Constitución Nacional deberá tener una acción sumarisima para la defensa de los derechos establecidos en la presente ley y en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional. La ausencia de reglamentación procesal no impedirá la tramitación de la acción sumarisima prevista en el artículo 43.

Art. 40. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI  
Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.

## NOTA

Los fundamentos de los proyectos presentados por los señores senadores no se publican, se deja constancia que los mismos se hallan impresos en los Diarios de Asuntos Entrados según el siguiente detalle: S.-1.384/95 DAE Nº 113/95; S.-2.006/95 DAE Nº 166/96; S.-111/96 DAE Nº 10/96; S.-230/96 DAE Nº 17/96; S.-563/96 DAE Nº 40/96; S.-773/96 DAE Nº 52/96; C.D.-30/96 DAE Nº 71/96; y se encuentran a disposición de los señores senadores en el expediente original.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1996.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Carlos F. Ruckauf.

S/D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar la inclusión de mi firma en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre hábeas data (expedientes S.-111/96, S.-230/96, S.-563/96, S.-773/96, S.-1.384/95, S.-2.006/95 y C.D.-30/96). Hago expresa reserva de mi disidencia parcial al mismo.

Saludo a usted atentamente.

Horacio D. Usandizaga.

### Disidencia parcial del senador nacional doctor Horacio D. Usandizaga, al proyecto venido en revisión sobre regulación del hábeas data (Expediente C.D.-30/96)

Señor presidente:

El *hábeas data* es una modalidad de amparo según rige el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El bien jurídico tutelado es el derecho a la privacidad (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y 1.071 del Código Civil).

Desde el Estado, el *hábeas data* puede convertirse en un procedimiento de mejora cualitativa de la información contenida en sus registros, aspecto sumamente útil para facilitar la toma de decisiones.<sup>1</sup>

Al tiempo que debe reconocerse su carácter condicionante del secreto de Estado.<sup>2</sup>

El instituto protege el derecho a informarnos sobre nuestros datos personales que se encuentran almacenados en bancos de datos, así como el derecho a requerir su supresión, modificación o actualización cuando la información registrada resulte discriminatoria o de alguna manera inexacta.

La información puede estar contenida en soportes de diversa índole: prontuarios, fichas, legajos, archivos, soporte magnético o cualquier clase de documento.

Pero no es el simple almacenamiento lo que preocupa, sino el hecho de que los avances tecnológicos permiten que la información procesada acerca de una persona pueda ser transmitida a terceros en segundos, tanto dentro como fuera del país.

Nos desvela entonces la posibilidad de que los datos sean manipulados por otras personas, otros organismos, otras entidades y que puedan ser utilizados en contra de su titular,<sup>3</sup> máxime cuando se trate de datos inexactos, incompletos o desactualizados.

Del mal uso de los datos puede derivar un daño severo al honor, la intimidad, al derecho de propiedad (patentes y modelos de utilidad), a la propia imagen.<sup>4</sup> Y, aún más, al derecho a la identidad personal, es decir a la "personalidad cultural, dinámica, que se forma desde que nacemos y que alteramos, agrandamos; achicamos, cambiamos a lo largo de nuestra vida, según nuestros sentimientos, ideas religiosas, estudios científicos, etcétera."<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Alvin Toffler, en *Hábeas data*, Oscar Andrés de Masi, "La Ley", Actualidad, 16 de junio de 1994.

<sup>2</sup> Francisco Delich, Convención Constituyente, 1994.

<sup>3</sup> Jorge Reinaldo Vanossi en "El *hábeas data*: no puede ni debe contraponerse a la libertad y los medios de prensa, "El Derecho", tomo 159, páginas 949-954.

<sup>4</sup> Conforme Alberto Bianchi en *Hábeas data y derecho a la privacidad*, "El Derecho", tomo 161, página 866.

<sup>5</sup> La preservación de la privacidad frente al desafío tecnológico en I Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la Información, Presidencia de la Nación, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Subsecretaría de Informática y Desarrollo, 1995, página 35.

Hasta los datos más inofensivos pueden resultar por su tratamiento en informaciones que afecten la intimidad del interesado.<sup>6</sup>

En consecuencia, frente al enorme poder de quien posee la información —Estado o entidades privadas—, debe pensarse en una regulación que proteja al individuo.

### Regulación

A partir de este análisis surge la voluntad de regular la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos públicos o privados destinados a brindar informes y el acceso a la información por medio del recurso de amparo del *habeas data*.

La tarea no es sencilla ya que en el tema interactúan principalmente dos cuestiones a proteger: la "privacidad" y la "libertad de información".

A raíz de estas consideraciones Gregorio Baderna se ha permitido expresar que en particular en "el ejercicio del *habeas data*... se producirá la inevitable colisión con la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados, la seguridad del Estado y el sistema democrático constitucional, el secreto profesional, el secreto comercial, el secreto industrial y otras manifestaciones de la vida humana que disfrutan de expresa o implícita protección constitucional en salvaguarda del valor fundamental de la Constitución: la libertad"<sup>7</sup>.

Mientras que en la regulación de la protección de los datos personales se deberá atender muy especialmente al carácter de bien económico que ha adquirido la información, en tanto genera riqueza y es objeto de transacciones<sup>8</sup>.

Por esas razones, la regulación integral de la protección de datos personales y el recurso de *habeas data* ha de respetar mínimamente las siguientes pautas<sup>9</sup>.

1º) Que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos.

2º) Que se actualicen los datos atrasados.

3º) Que se asegure la confidencialidad, impidiendo que ciertos datos se transfieran ilegítimamente a terceros.

4º) Que se rectifiquen los datos inexactos.

5º) Prohibir el registro de información sensible, relativa a religión, conducta sexual, raza, ideas políticas, en la medida que ello importe discriminación.

<sup>6</sup> Conf.: Alcides López, proyecto de ley de regulación del *habeas data*, expediente 563/96.

<sup>7</sup> Reforma constitucional e instituciones políticas, página 254.

<sup>8</sup> Conf.: Rodolfo Iribarne en *La información como bien económico en un mundo globalizado*, Primer Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la Información, Presidencia de la Nación, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Información y Desarrollo, 1995, página 35.

<sup>9</sup> Conf.: Ley inglesa de protección de datos personales, y autores nacionales como Sagüés y Vanossi.

### Sujetos de la norma

Especial consideración se debe otorgar a los sujetos intervinientes y sus diferentes intereses en la formación de archivos y el tratamiento de datos:

a) El titular de los datos: persona física, ciudadano o extranjero o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país;

b) El operador de los datos: regulando su acceso a los datos y distinguiendo aquellos datos vacantes (públicos) a los que todos tienen llegada en un Estado de derecho que reconoce el pluralismo de la información y la libre investigación científica del especial tratamiento de los datos privados y la prohibición de operar datos sensibles;

c) El distribuidor, cuyo derecho a proporcionar información está más limitado. Las excepciones a la libertad de expendio de información están relacionadas con datos que está prohibido almacenar, datos registrables pero que sólo pueden ser utilizados por determinados sujetos en supuestos específicos (juez) y datos que nunca pueden proporcionarse (portador de HIV);

d) Los usuarios: para quienes si el banco de datos es público el acceso es libre, si es privado, el acceso se verá restringido.

Así como a los sujetos del *habeas data*:

a) El sujeto activo: toda persona física, ciudadano o extranjero con residencia legal o persona de existencia ideal con domicilio legal en el mismo. No es una acción popular; ha de articularla el afectado (Sagüés);

b) Sujeto pasivo: quien tiene bajo su custodia el "banco de datos"; persona física o de existencia ideal pública o privada.

El archivo privado es cuestionable por el *habeas data* si provee informes a terceros o si no los provee de hecho pero está destinado a hacerlo (Sagüés).

El doctor Iván Cullen mocionó en la Convención Constituyente la incorporación de la frase "proveer informes de uso público" para dejar a salvo el secreto profesional de abogados, contadores, etcétera.

### Análisis en general del dictamen

A partir de las apreciaciones expuestas, puntualizamos nuestra disidencia parcial con el dictamen.

En primer lugar, hubiésemos preferido que se legislara sobre la acción de amparo por *habeas data* sólo con el alcance que la Constitución le asigna en el párrafo tercero del artículo 43:

"Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, certificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes periodísticas".

Sostenemos con el doctor Vanossi que: "el secreto del *habeas data* está en su sencillez. Si al *habeas data* se lo convierte en un mecanismo complejo demasiado sofisticado y demasiado articulado, no va a ser captado

y entendido por los propios interesados, es decir por los ciudadanos o por los habitantes que van a encontrar dificultades en el acceso al mismo para poderlo esgrimir y utilizar como una herramienta protectora. La suerte del *habeas data* va a correr pararela con lo que históricamente fue la suerte de los famosos *writs* del derecho inglés, que primero lograron afianzarse a través de ese desenvolvimiento natural de la equidad y recién después, el legislador les dio el perfil con que hoy los conocemos en el derecho comparado".

En cuanto a una ley de protección de datos personales ella ha de requerir un debate intenso y una consulta prudente a la legislación comparada y su práctica de años (Data Protection Act de Inglaterra de 1984, Privacy Act de Estados Unidos de 1974, legislación europea de la década del '70 —Alemania, Austria, Dinamarca y Francia—, Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, que desarrolla los llamados "datos sensibles" y directiva sobre "Protección de Datos Personales" del Parlamento y Consejo de la Unión Europea, octubre de 1995).

El tema es sumamente complejo y requiere de normas ponderadas y razonables que equilibren el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

La enorme casuística que presenta el proyecto en cuanto a la temática de protección de datos (artículos 1º a 32 inclusive), seguramente habrá de generar conflictos en un futuro cercano, ante el avance tecnológico que se anuncia en materia de sistemas más sofisticados de almacenamiento de datos, transmisión instantánea de los mismos y sobre todo de excepcionales métodos de tratamiento de imágenes.

El exceso de normas también dificulta la interpretación, en tanto se repiten iguales conceptos en distintas oportunidades, se incurre en contradicciones y redundancias y se resta valor a las definiciones del artículo 2º.

Así, se define el "tratamiento de datos" en el artículo 2º y se comprende en su enunciado a la "cesión". Luego, se continúa la regulación diferenciando dichos conceptos: "tratamiento" en el artículo 5º y "cesión" en los artículos 11 y 12.

Por otra parte, el artículo 5º, inciso 2 establece que no será necesario el consentimiento del titular para proceder al tratamiento de datos personales, en determinados supuestos. En igual sentido se expresa la norma al regular la "cesión" en el artículo 11, y consigna la extensión del consentimiento remitido a los supuestos previstos en el artículo 5º, inciso 2 y agregando otros. Entre estos últimos figura en el inciso d) el caso de la cesión entre dependencias de los órganos del Estado, ya incluido en el inciso 2 del mismo artículo y en el artículo 5º, inciso 2, si nos guiamos por la definición de tratamiento de datos.

Además, el supuesto d) del artículo 5º, inciso 2 repite el contenido del inciso c) del artículo 11.

En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la norma requiere de un esfuerzo de comprensión. Indudablemente se trata de archivos públicos y de privados destinados a brindar informes, tal como lo dispone la Constitución Nacional, y no se comprenden los registros mantenidos con fines exclusivamente personales y los dedicados a la actividad periodística.

Tampoco se especifica la regulación de los registros pertenecientes al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y al Registro Nacional de las Personas, así como los registros electorales.

La consideración de las personas jurídicas como titulares del derecho de privacidad y sujetos de la norma, no condice con la legislación comparada más actualizada europea y norteamericana. Creemos hubiese sido conveniente excluir de las disposiciones de la ley a los bancos de datos en cuanto contengan información referida a personas jurídicas (artículo 1º, segundo párrafo, artículo 33, inciso 3).

En tercer lugar, nos preocupa la protección desmedida que se brinda al Estado en cuanto al tratamiento de datos personales y en especial las posibilidades de su cesión entre organismos. Circunstancia ésta que no refleja la tendencia legislativa comparada más moderna, ni las fuentes que dieron origen al proyecto originario del diputado nacional doctor César Arias, sobre el que trabajó la sanción de la Cámara de Diputados.

Numerosas normas se resuelven en desmedro de los derechos del titular de los datos, sujeto principal de protección de la norma constitucional.

Entre ellas cabe citarse:

Artículo 5º, punto 2, inciso b) no exige el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia. Disposición que se vincula estrechamente con el artículo 11, punto 2 d), al disponer que el consentimiento para la cesión no es exigido cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Por su parte, la disposición del artículo 17 determina la posibilidad de denegar el acceso, la rectificación y cancelación de datos de carácter personal obrantes en los mismos en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden, la seguridad públicos o de la protección de derechos e intereses de terceros.

Asimismo, se autoriza a denegar la información sobre datos de carácter personal, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas.

El *habeas data* es un instrumento para que el ciudadano afirme sus propios derechos individuales y ello a su vez afirme la propia legitimidad del Estado. Las limitaciones a su ejercicio deben ser excepcionales y en todos los casos notificadas debidamente al afectado.

Correspondería en estos supuestos optar por una redacción como la propuesta por el proyecto del senador Berhongaray (S-773/96, artículo 26) y permitir el acceso a los particulares que estuvieran sujetos a experimentar restricciones actuales en sus derechos como consecuencia de los datos obrantes en los ficheros en cuestión, con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso, supuesto en que deberá brindarse tal acceso en oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.



En cuarto lugar, nos preocupa la indefinición del proyecto acerca de quién será el órgano de control, ya que la misma viene precedida de antecedentes poco aceptables.

Así, la sanción de diputados instituyó en tal función al ombudsman, desconociendo que por su ley de creación, 24.284, el Defensor del Pueblo sólo puede formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes legales y funcionales y propuesta para la adopción de nuevas medidas y no es competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas (artículos 27 y 28).

Tal vez la solución más prudente sería pensar en la creación de un ombudsman o comisionado especializado en la protección de datos (tal como establece la legislación alemana y el proyecto del diputado Alfredo Bravo).

Tampoco parece aconsejable pensar en un órgano de control multitudinario, y de proceder burocrático, a partir de lo expresado *ut supra* sobre la necesidad de sencillez en el diseño del procedimiento y austeridad en las normas.

#### *Análisis en particular del dictamen*

En lo particular observamos los siguientes artículos:

Artículo 1º — Creemos necesario formular dos comentarios al artículo 1º del dictamen:

a) El bien jurídico tutelado por el conjunto de las disposiciones contenidas en el dictamen es derecho individual personalísimo, el derecho a la intimidad del artículo 19 de la Constitución Nacional.<sup>10</sup>

Dicho derecho se vulnera cuando se difunden hechos relativos a la vida privada de una persona o a su familia, se divulgan expresiones o hechos concernientes al titular que lo mortifiquen en sus sentimientos, se atente contra la privacidad del domicilio, la reserva de las comunicaciones y se emplazan aparatos para grabar, filmar, etcétera.

En su ámbito se protege también al sujeto de toda intromisión en su personalidad psicológica y se determina que la acumulación de datos por los sistemas de informática debe respetar el derecho del sujeto a respetar su amplitud y tenor y permitirle corregir y actualizar los mismos, limitando su utilidad para la finalidad para la que fueron elegidos.<sup>11</sup>

Anexo a ese derecho se ubica el derecho al honor, comprensivo de la protección de la propia estima y el buen nombre externo.

El *habeas data* pasa de una visión pasiva a una visión activa de los derechos, ofrece al ciudadano una herramienta que le permitirá afirmar su propio derecho.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> CnCiv, sala H, mayo 19/1995, "Rossetti c/Dun y Bradstreet S.R.L.", "La Ley", tomo 1995, E.

<sup>11</sup> Proyectos de ley de regulación de los derechos personalísimos de los diputados (m. c.) Ortiz Pellegrini y otros; y Parente.

<sup>12</sup> Francisco J. Delich; Convención Nacional Constituyente; citado en Bidart Campos, G.: *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Buenos Aires, 1995, página 643.

La redacción elegida no expresa claramente lo antedicho y podría confundir en la interpretación. En ese sentido proponemos lo siguiente:

"Artículo 19: Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral del derecho a la intimidad de las personas en cuanto pueda ser vulnerada por el tratamiento y cesión de sus datos personales contenidos en archivos públicos y privados destinados a prestar informes públicos.

"Asimismo, reglamenta el derecho de acceso del titular de los datos a la información que sobre él se registre en conformidad a lo establecido en el 43, párrafo 3º de la Constitución Nacional."

b) El eje central del proyecto gira en torno a la protección del derecho a la intimidad frente a la acumulación y tratamiento informático de datos propiamente dicho. La caracterización de los archivos o registros son conceptos principales a desarrollar.

Siguiendo al convencional constituyente doctor Iván Cullen, proponemos se indiquen con mayor precisión las características que diferencian los registros públicos de los privados, y se señale que estos últimos son comprendidos por la norma en tanto se encuentren destinados a brindar informes públicos.

Quedan así perfectamente excluidos los archivos específicamente personales, los científicos y los periodísticos.<sup>13</sup>

A su vez, a partir de la norma constitucional y de las enseñanzas del doctor Humberto Quiroga Lavié, por registros públicos debería precisarse que se entiende se trata de los de carácter administrativo, los de la administración centralizada o descentralizada, existentes tanto en organismos civiles como militares o de seguridad.<sup>14</sup>

Art. 2º — Se propone la inclusión de la definición sobre "registro o banco de datos público" y la de "registro o banco de datos privado destinados a brindar informes públicos".

La falta de normas claras conduce a la confusión en varios supuestos, a saber:

Artículo 7º, inciso 3: En la prohibición de formación de archivos de datos sensibles, ¿se comprende a ambos archivos?

Artículo 21: En la inscripción en el registro que habilita el órgano de aplicación, ¿se incluyen ambos archivos o sólo los privados?

Artículo 22, inciso 4: La mención de "datos almacenados en fuentes accesibles al público", ¿indica archivos públicos? En tal caso, contradice la excepción de consentimiento del artículo 5º, inciso 2 y el 11, inciso 3 a).

En particular y con respecto al inciso a) del artículo en análisis se propone una descripción más completa que distinga entre datos:

— Objetivos, comprensivos del nombre, domicilio, profesión, documento de identidad.

<sup>13</sup> Idem propuesta convencional Adelina de Viola.

<sup>14</sup> Humberto Quiroga Lavié: *El amparo, el habeas data y el habeas corpus*, en "La reforma de la Constitución explicada por los miembros de la comisión de redacción"; Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1994, página 158.

— Reservados, como los referidos a estado civil, patrimonio, hobbies, instrumentos de pago, hábitos de compra, etcétera, y los

— Sensibles, relativos a la ideología, religión o creencia, salud, conducta sexual, delitos e infracciones.

Con respecto a los datos objetivos y reservados rige el derecho de acceso y en especial las normas del artículo 25 sobre prestación de servicios informatizados de carácter personal, del artículo 26 sobre prestación de servicios de información crediticia y del 27 sobre archivos de datos con fines de publicidad. En este último caso debe respetarse la opción del titular de los datos de salir del sistema (artículo 27, inciso 3).

En cambio, el almacenamiento de datos sensibles ha de requerir una regulación más restrictiva prohibiéndose la creación de registros exclusivamente con esos datos, y advirtiéndose al titular que puede negarse a suministrar dicha información sobre su persona.<sup>15</sup>

Artículo 4º, inciso 5º: Para mayor claridad de la norma, la referencia a la cancelación o sustitución "de oficio" de los datos inexactos, debería reemplazarse por la indicación de que tales cometidos corresponden al "titular del registro o banco de datos".

Artículo 7º, inciso 3º: Si la norma es genérica y aplicable a todo archivo, aun los privados que no suministrar informes al público, en la excepción a la prohibición de tratar datos sensibles sobre la persona deberían mencionarse otras asociaciones como las homosexuales, las de enfermos de sida, cáncer, etcétera.

Artículo 7º, inciso 4º: La información sobre antecedentes contravencionales, es tratada por las empresas de prestación de servicios informatizados en otros países y utilizada para el cálculo de las primas de seguros de accidentes de automóviles. Una legislación de ese tipo sería beneficiosa en el futuro para nuestro país y obligaría a la reforma de esta disposición.

Artículo 10, inciso 2º: No expresa quién permite el relevamiento del "deber de confidencialidad". Se propone que se autorice por resolución judicial.

Artículo 14, inciso 3º: Limita el ejercicio del derecho de acceso del titular a sus datos a intervalos no inferiores a seis meses. No fue ésa la intención de los convencionales constituyentes al pensar y diseñar el instituto del *hábeas data* y particularmente al consagrar la libertad de información. Debe suprimirse.

Artículo 15, inciso 3º: La amplitud de medios por los que el titular puede requerir informes sobre sus datos al banco o archivo (por escrito, telefónico, electrónico, etcétera) parece excesiva y puede resultar costosa. Debería obligarse al titular del registro a informar por escrito y en su caso a ofrecer otro medio, siempre que contare con el consentimiento del requerente.

Artículo 21, inciso e): Deben incluirse como destinatarios de la transmisión de datos a las personas fi-

sicas además de las personas jurídicas, únicas comprendidas en el término "entidades" que contiene la norma.

Artículo 31, inciso 1º: Su redacción no es clara, tratándose posiblemente de un defecto en la transcripción, el que debe ser subsanado.

Artículo 31, inciso 2º: Las sanciones deberían ser tipificadas y reguladas con mayor precisión en la norma y no derivadas tan ampliamente a la reglamentación.

Artículo 33, inciso 1º: Debería encabezarse de la siguiente manera: "la acción de *hábeas data*".

Artículo 38, inciso 2º: El plazo para contestar el informe debe ser determinado con precisión y no librado a la decisión del juez.

Horacio D. Usandizaga.

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja como miembro informante.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales me ha conferido la distinción de ser el miembro informante por la mayoría de este importante y trascendente proyecto de ley que tiene como objeto la regulación de una de las nuevas garantías surgidas de la Constitución Nacional, reformada en 1994, en su artículo 43, párrafo tercero.

Se trata de una de las garantías más modernas que existen en el derecho constitucional, no obstante que su denominación está integrada por la confluencia de dos palabras de distinto origen: "hábeas", de origen latino, y "data", de origen inglés, y cuya traducción sería "tener los datos", "traer los datos" o "conservar los datos". Constituye una de las instituciones tendientes a preservar dos de los bienes más preciados que puede tener el hombre: el honor y la intimidad.

La inclusión de esta institución en la reforma constitucional de 1994 es una de las muestras, señor presidente, de la veracidad de nuestra afirmación en el sentido de que esa reforma ha otorgado un carácter garantista a nuestra Carta Magna. Decimos que es una Constitución garantista no sólo porque ha ampliado el espectro de los derechos, sino porque, además, ha afianzado y avalado la operatividad de los derechos consagrados en ella. Porque de nada valdría una mera declaración de derechos si, al mismo tiempo, no se asegura o no se avala la efectividad de las garantías consagradas en nuestra Ley Fundamental. La Constitución se convertirá en un mero catálogo de ilusiones si esa declaración de derechos no contara con los mecanismos que aseguren su efectividad y protección.

¿Cuál es el bien protegido a través del instituto del *hábeas data*? Este instituto viene a pro-

<sup>15</sup> Conf.: Alberto Bianchi en: *Hábeas data y derecho a la privacidad*, "El Derecho", tomo 161, página 866, y Ley Orgánica 5/92, completada por el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, España, real decreto 428/93.

teger el derecho a la intimidad de las personas y, también, conforme con la definición contenida en el artículo 1º del proyecto de ley que hoy estamos considerando, el derecho al honor de las personas.

El concepto de honor ha sido ya elaborado por la doctrina del derecho penal, que lo ha definido como la valoración que hace uno de su propia persona, considerada desde un punto de vista subjetivo, o la valoración que otros hacen de la propia persona, desde un punto de vista objetivo. La unión de los aspectos subjetivo y objetivo nos lleva a la concepción integral del honor, que es uno de los bienes —al igual que la vida, la integridad física y los demás valores inherentes a la persona— que forma el conjunto de cualidades componentes de la personalidad del hombre.

En cuanto al derecho a la intimidad, bien se ha dicho que es una derivación del derecho a la dignidad.

En un trabajo sobre hábeas data, publicado por los juristas Ekmekdjian y Pizzolo Calogero, se define al derecho a la intimidad como la facultad que tiene una persona de disponer de una esfera, espacio privativo o reducto inderogable de la libertad individual, el que no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado.

Este derecho también ha sido definido, señor presidente, con una expresión típicamente inglesa. Se ha dicho que es "the right to be alone" o "the right to be let alone", es decir, el derecho a estar solo. Se lo ha traducido como el derecho de la persona a estar en la soledad de su espíritu o, como diría el poeta, lejos del mundanal ruido. Es el derecho a la privacidad, a gozar de esa esfera dentro de la cual el individuo puede meditar y ejercer sus facultades. Es, en definitiva —y como dije anteriormente— el derecho de la persona a ser dejada en la tranquilidad de su espíritu, el que también tiene alguna connotación en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando se refiere a las acciones privadas de los hombres, que están exentas de la autoridad de los magistrados y sólo reservadas a Dios. Es, en síntesis, el derecho a estar solo.

El prestigioso constitucionalista español Sánchez Agesta nos decía que la intimidad de la persona está vinculada a su propia dignidad en cuanto supone las condiciones mínimas para que los hombres desarrollen su inteligencia y su libertad, llegando a compararla, en el orden moral, con un pudor similar a la desnudez física.

Por su parte, también la jurisprudencia ha precisado cuál es el concepto de intimidad diciendo que es el derecho que tiene toda persona humana a que sea respetada su vida privada y familiar y a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la zona espiritual íntima y reservada a una persona o grupo.

Corresponde señalar, además, que el derecho a la intimidad también está protegido, desde el punto de vista del derecho civil, por el artículo 1.071 bis del Código Civil. Pero la protección que da dicho artículo es a posteriori, es decir, prevé cuáles son los efectos de la violación del derecho a la intimidad.

En cambio, con el hábeas data lo que se quiere hacer es prevenir, actuar anticipadamente para evitar la lesión del derecho a la intimidad porque si bien el artículo 1.071 bis puede habilitar a un resarcimiento no es suficiente y nunca va a serlo, por más elevado que sea, para reparar los agravios y la lesión que se puede ocasionar a una persona en su honor y en su intimidad.

Debo aclarar que la norma también contempla la protección de datos de las personas de existencia ideal o personas jurídicas. No es que se esté protegiendo su derecho a la intimidad porque es sabido que no puede hablarse de la intimidad de las personas de existencia ideal o de las personas jurídicas, pues la intimidad es uno de los derechos personalísimos que sólo tienen las personas físicas.

Lo que se protege, cuando se trata de personas de existencia ideal, es el derecho que tienen a que la información que de ellas se difunda sea correcta y, en caso contrario, que puedan tener derecho a la corrección de la información dada porque una información o un dato equivocado sobre una persona jurídica podría causarle daños irreparables y hasta su propia extinción. Es el caso, por ejemplo, con la difusión de que una sociedad está en quiebra o es fraudulenta, con lo cual se puede atentar contra su propia existencia. Esto, sin perjuicio de que con una falsa información sobre una persona de existencia ideal también se puede afectar a los integrantes de la sociedad, es decir, a personas físicas.

Entonces, al proteger el prestigio de las personas jurídicas, también se protege el de las personas físicas que forman parte de ellas.

Concretamente, no se les reconoce a las personas de existencia ideal el derecho a la intimidad sino el derecho a que sea correcta la información que sobre ellas se difunda.

Debe decirse que el hábeas data es uno de los denominados derechos de tercera generación. Son los derechos que se han sistematizado y desarrollado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del impacto que ha producido en la sociedad y en el hábitat humano el avance de la ciencia y de la tecnología. Así, se ha empezado a hablar de nuevos derechos, como a tener un ambiente sano, a la competencia y los derechos de los usuarios y consumidores.

Evidentemente, los bienes que protegen esos derechos no son nuevos porque se trata de derechos que existieron siempre. Lo que ocurre es que, por el avance de la tecnología y de la ciencia, esos bienes son agredidos, con lo cual es necesario darles una nueva protección. Tomemos el caso del medio ambiente. Con la parafernalia de elementos químicos el hombre ha agredido el hábitat humano. Por eso se requieren nuevos modos de protección.

Las nuevas formas de producción y de comercialización y la creación de monopolios exigen también medios de defensa de la competencia, del usuario y del consumidor.

Todos estos derechos a los que me estoy refiriendo nacen luego de los derechos individuales consagrados por el Estado liberal y de los derechos sociales desarrollados en la etapa social que va de la segunda mitad del siglo pasado hasta la primera parte de este siglo, por eso se llaman derechos de tercera generación.

¿Por qué incluimos aquí el derecho a la intimidad? Este derecho ha existido siempre. Lo que ocurre es que hoy se ve agredido y en peligro por el avance de la informática que, a través de estas redes internacionales y del progreso de las telecomunicaciones, constituye un peligro potencial. Y no sólo potencial; el peligro que corre el derecho a la intimidad de las personas es también real y efectivo por la facilidad con que se consiguen y difunden los datos. Por un mal manejo, por un manejo arbitrario de dichos datos, de la noche a la mañana una persona puede ser convertida en alguien indeseable, alienado en la sociedad en que vive o en un paria social.

Por eso, el Derecho está dando respuestas a este verdadero desafío que constituye el avance de la ciencia, que no sólo se da en esta área. Veamos si no, por ejemplo, lo que pasa con los casos de fertilización asistida, alquiler de vientres y con todos los temas que plantean problemas de bioética y que exigen una respuesta del Derecho. Con toda razón alguien dijo en alguna oportunidad que el Derecho está como cer-

cado o sitiado por los avances de la técnica y de la ciencia y necesita dar una respuesta. Hoy, con la regulación del hábeas data, estamos dando una respuesta jurídica a la necesidad de proteger ese bien tanpreciado como es el derecho a la intimidad y al honor. Por eso decimos también que es un derecho de tercera generación.

¿Cuál es la naturaleza de la norma que vamos a sancionar hoy? Es importante señalar que, al menos en lo que hace a los capítulos I a IV, y también el artículo 32, que contiene una norma de derecho penal, estamos considerando una ley de fondo y no procesal. Pero claro, esto funciona como un piso.

Las provincias pueden incursionar en los aspectos procesales, porque así lo establece nuestro régimen institucional. Pero en lo que hace a lo contemplado en los artículos 1º a 4º — que regulan lo que son los datos, cómo deben ser los registros, qué derechos asisten a los usuarios y a los titulares de los datos —, se trata de normas de fondo y, por lo tanto, no pueden ser modificadas por las provincias, que sí pueden establecer reglamentaciones en materia procesal.

Un enfoque muy novedoso es el abordaje de este tipo de derechos como el derecho a la intimidad desde la perspectiva del derecho privado. Se trata de un abordaje de un derecho constitucional desde un enfoque privado. Por eso alguien ha dicho que se ha creado una nueva rama del derecho, que es el derecho privado constitucional, tesis sostenida por Julio Rivera en "El derecho privado constitucional", publicado en Revista de Derecho Privado y Comunitario.

¿Cuáles son los objetivos que persigue el hábeas data o la protección de datos personales? Son los siguientes: en primer término, que una persona pueda acceder a la información que de ella o de su grupo familiar se tenga en un registro o banco de datos. Asimismo, tiene el derecho de conocer la finalidad de dicho registro. Por lo tanto, no sólo tiene el derecho de acceder sino también el de saber para qué se recogen los datos. En segundo lugar, la persona tiene derecho de que se actualicen los datos que sobre ella existen, se rectifiquen los que no son exactos y se supriman los que son obsoletos.

En tercer término, comprende también el derecho de que se asegure la confidencialidad de la información que está en los registros, evitando que se transfieran a terceros sin conocimiento o consentimiento del titular de dichos datos.

En cuarto lugar, esta acción o derecho persigue que se suprima la información denominada sensible, que está definida en el propio proyecto

de ley que estamos analizando. Se trata de aquella que se refiere a las creencias religiosas, a la raza, a las ideas políticas, a los hábitos sexuales; es decir, todo aquello que haga a los datos cuya difusión no interesa o no debería interesar a nadie, porque hacen al ámbito íntimo de la personalidad de un individuo. O sea que en ningún registro puede admitirse que existan constancias de los datos denominados sensibles. Si los hubiera, el titular puede ejercer el derecho de solicitar que sean suprimidos. Si así no se procediera, puede ejercer la acción de hábeas data para conseguir la supresión por vía de un orden judicial.

Esta institución tiene antecedentes en el orden internacional y en el derecho comparado. El Pacto de San José de Costa Rica no lo contempla en forma expresa, pero sí dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su familia, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esos ataques o injerencias.

La Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 91, denominada "Directrices para la regulación de ficheros automáticos de datos personales", que contiene todos los principios respecto al hábeas data y en la que se dan normas sobre los modos de recolección de datos, la finalidad perseguida, etcétera. En esta resolución se define a los datos denominados sensibles, hecho muy importante. Es un modelo a seguir, ya que habla de los que hacen referencia a raza, origen étnico, color, vida sexual, opinión política, religión, filosofía y otras creencias, así como ser miembro de asociaciones o uniones sindicales; también hace alusión a la calidad de los datos, a la especificación, etcétera. Para la protección de las personas jurídicas existe una cláusula optativa, es decir que pueden ser incluídas o no.

En cuanto a las Constituciones extranjeras, han incluído el hábeas data la de Portugal, de 1976, que es considerada como la primera que consagró esta garantía; la de España, de 1978; la de Brasil, en su artículo 5º; la de Perú, que además amplía el radio de protección porque comprende el derecho de réplica. Pero considero que esa no es materia que debería estar

dentro del hábeas data. El derecho de réplica hace a la defensa del honor en otro campo, frente a los ataques que sufre el individuo por los medios de difusión masivos. En ese caso sí cabe el derecho de réplica. Como es sabido, hace varios años el Senado de la Nación sancionó un proyecto de ley sobre derecho de réplica. Recuerdo que se trataba de una iniciativa del señor Ricardo E. Lafferrière, que luego no fue tratada por la Cámara de Diputados.

De todos modos, el derecho de réplica está en el Pacto de San José de Costa Rica y ha sido reconocido como derecho vigente en nuestro país por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las Constituciones provinciales, por supuesto, que siempre van adelante en el derecho público nacional, también se han hecho eco y han receptado el hábeas data, como por ejemplo la de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Jujuy, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

La jurisprudencia también ha efectuado interesantes aportes en materia de hábeas data. Así, por ejemplo, en el caso "Vago, Jorge c/Ediciones 'La Urraca'", de 1991, se plantea la necesidad de armonizar el derecho de información con derechos constitucionales como la intimidad, el honor y la reputación de las personas.

En el caso "Rosetti Serra, Salvador c/Brastrí" se reconoció el ejercicio del artículo 43 a las personas de existencia ideal, identificando la acción del hábeas data como una especie de amparo.

También existen muchos otros casos de jurisprudencia sobre el reconocimiento del derecho de hábeas data.

Este proyecto de ley, señor presidente, viene luego de la sanción en la Cámara de Diputados. En esta instancia revisora se ha procurado mejorar el perfil del proyecto ante las inquietudes planteadas por distintos sectores o instituciones, y también se han tenido en cuenta proyectos presentados por varios señores senadores en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Asimismo, se ha procurado compatibilizar esta legislación con otra ya existente en la comunidad internacional, tratando, por supuesto, de que fuera armónica. Porque en definitiva, cuando se trata de la protección de un derecho humano, los principios aplicables deben ser lo más parecidos posible en todos los países del mundo...

—Varios señores senadores dialogan entre sí.

**Sr. Menem.** — Voy a esperar que los colegas terminen de dialogar.

**Sr. Presidente.** — Estaba tan atento escuchando al señor senador por La Rioja que no me había dado cuenta de ello.

Continúe, señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — En esta exposición general sobre el hábeas data debemos marcar cuál es el criterio interpretativo. Es decir, debemos tener en cuenta cuál es el valor esencial que se procura defender.

Porque desde luego que aquí concurren dos intereses o dos tipos de derecho: por un lado, el derecho a trabajar, el derecho a informar y, por el otro, el derecho a la intimidad que tiene el individuo. Entonces, hay que buscar un equilibrio. El Derecho, en definitiva, siempre consiste en la búsqueda de un equilibrio para que exista paz y armonía en la sociedad; equilibrio que no siempre se puede conseguir.

En el Derecho Administrativo ¿qué buscamos? Buscamos el equilibrio entre los derechos del administrado y los derechos del Estado; el equilibrio entre libertad y autoridad. En este caso estamos buscando equilibrio entre dos derechos: el derecho de informar y el de trabajar, y el derecho a la intimidad que tienen los individuos.

Pero en el caso de que exista alguna duda hay que tener un criterio interpretativo. Y este criterio interpretativo, señor presidente, es que debe prevalecer el derecho a la privacidad y al honor de las personas por sobre cualquier otro.

Es decir que en una colisión entre el derecho a la intimidad y la información que puede proporcionar un banco de datos crediticio destinado al *marketing*, el ordenamiento jurídico indudablemente se inclina por preferir los derechos personalísimos que pudieran estar afectados.

Porque indudablemente, señor presidente, en este caso no se trata sólo de defender la circunstancia de que en los bancos de datos o en los archivos no existan referencias a cuestiones íntimas o datos sensibles, sino que también el individuo tiene derecho a que la información que de él se tenga sea la correcta también en otras materias. Porque bien se ha dicho que a veces una mala información sobre otros aspectos de la persona quizá pueda ser más dañosa que la difusión de un dato de los denominados sensibles.

Creo que en nuestro país una persona no se vería perjudicada porque se conozca su religión. Estimo que nadie estaría privado de trabajar por ello; pero si hubiera un mal dato sobre su solvencia económica o sobre la forma en que cumple con sus obligaciones, podría tener problemas hasta de subsistencia.

Por eso protegemos que no se registren datos sensibles pero también que no se vaya a difundir en forma incorrecta otro tipo de datos.

Cuando hay colisión entre el derecho a informar y el derecho a la privacidad, debe prevalecer siempre éste.

Respecto de la protección de datos entonces hay dos aspectos: por una parte, la regulación; es decir, el modo como se forman los archivos, cómo se recogen los datos; y, por otra, está la acción de hábeas data; es decir, el aspecto procesal; o sea, la forma como se debe actuar en caso de que no se consiga el dato o no se consigan los resultados a través de la gestión directa que haga el individuo frente al titular del banco de datos.

¿Cuáles son los medios comprendidos en la ley? Se refiere a los archivos, registros o bancos de datos, informatizados o no; si bien los que constituyen una mayor fuente potencial de peligro son los bancos de datos informatizados, también es cierto que los bancos o los archivos manuales pueden ocasionar perjuicios. Por esta razón en la ley se incluye todo tipo de registros, archivos o bancos de datos.

¿Cuáles son las personas protegidas? Las personas físicas y las personas jurídicas, como dije anteriormente. Mucho se ha discutido sobre si las personas jurídicas debían ser incluidas.

Dentro de nuestro orden legal, la discusión no tiene razón de ser, no tiene sustento, porque el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución, dice: "Toda persona podrá interponer esta acción."

Al decir "toda persona" está abarcando tanto a las personas físicas como a las personas de existencia ideal, por aquel aforismo que dice que donde la ley no distingue no debemos distinguir. Si mal no me acuerdo del latín: *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*. Disculpen por el latín. (*Sonrisas*)

Entonces, en nuestro país no hay duda de que tienen que estar incluidas las personas de existencia ideal. En otros países también se las ha acogido, como es el caso de Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Noruega y Suiza.

El organismo u órgano de control. Este es un tema muy polémico. Se discutió mucho en la comisión cuál debe ser el órgano de control de los registros de datos.

En el dictamen en mayoría se ha optado por establecer en grandes líneas sus funciones y atribuciones, dejando al Poder Ejecutivo la organización burocrática que corresponda, teniendo en

cuenta además los procesos de reforma administrativa que están en marcha.

De todas formas, por vía de la reglamentación, se pueden mejorar o ampliar estas disposiciones —o entrar en mayores detalles—, que no deben estar en la ley, porque la materia de la recolección y sistematización de datos, toda la materia informática, es de una dinámica tan fuerte, tan cambiante, que también debe ser cambiante la regulación que de ella deba hacerse.

Por eso, establecimos cuáles son los procedimientos, dejando que la reglamentación se ocupe del organismo que deba efectuar el control.

El proyecto de ley también se refiere a algunas otras cuestiones en particular. Por ejemplo, se ha optado por contener en un solo capítulo a todo tipo de archivo, ya sea público o privado y después, a lo largo del articulado, se contemplan situaciones especiales.

Así, el artículo 21 constituye la norma genérica; los artículos 22 y 23 se refieren a los archivos públicos; el 24, a los privados; y los siguientes —hasta el 28— se refieren a distintos archivos, según la finalidad que tengan.

Algunas reflexiones especiales, porque han sido motivo de gran polémica, merecen los registros de datos destinados a informes crediticios —el artículo 26— y los destinados a publicidad —artículo 27—.

El artículo 43 de la Constitución Nacional cuando contempla la acción de hábeas data no tiene en mira la protección del crédito o el funcionamiento del libre mercado sino la honra y la libertad de las personas. Pretender defender los servicios de información crediticia por sobre los derechos de las personas sobre sus datos limitándolos a los datos sensibles —como dije anteriormente— es empobrecer el concepto y olvidar que los derechos al patrimonio como atributo de la personalidad y de la propiedad son integrantes del plexo de derechos de las personas, necesarios para alcanzar su perfección y felicidad. De ahí que a la protección de la privacidad se subordina cualquier otra actividad informativa.

Por supuesto que no desconocemos la importancia de la actividad relativa a la información crediticia en el mercado actual, pero el espíritu de la ley pone su acento en la transparencia y en la lealtad. De ahí la insistencia en que se haga conocer a las personas cuándo se están recolectando sus datos personales y para qué finalidad pueden ser usados.

En el caso de los servicios de información crediticia cada uno de los actores que proporcionen datos al sistema deberán arbitrar los recaudos

para no sorprender a sus titulares, a quienes se les debe brindar la posibilidad de saber a qué lugar irá su información, ya que de algún modo su conducta frente al crédito es objeto del registro.

El medio de protección no puede ser la sorpresa o la acechanza. El interesado —deudor o titular de los datos— debe saber a qué se arriesga si no cumple o si quiere acceder al crédito, y por una cuestión de lealtad deberá admitir su inclusión en el sistema; pero debe saberlo.

Otro tema muy polémico es el de los archivos o banco de datos para la defensa y seguridad. La protección de la comunidad y de los intereses generales del Estado no se satisface sólo con la existencia de las fuerzas armadas y de seguridad.

En el mundo globalizado actual también se globaliza el terror y el crimen; de ahí que resulte necesario prever en forma adecuada la actividad de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado para prevenir acciones que atenten contra la sociedad y el mismo sistema democrático. Es decir que esta sociedad democrática debe defenderse de las acciones antidemocráticas. Por eso se le da un tratamiento diferencial a los registros de datos que existen en los organismos de inteligencia y de seguridad, lo cual no es una novedad en nuestra legislación porque también existe en el derecho comparado.

Podemos encontrar un tratamiento diferencial, por ejemplo, en la ley federal de protección de datos de Alemania en su artículo 12 inciso 2) punto 1º; en el artículo 5º de la ley 2.588 de protección de datos de Irlanda; en los artículos 27 y 28 de la ley británica de 1984 y en la ley orgánica española de 1992 en sus artículos 20 y 21. Es decir que en todas estas leyes también existe una protección especial de datos en los casos de los organismos de defensa y seguridad.

Dentro de esta línea, el artículo 17 de proyecto establece excepciones al principio de acceso a los datos personales en registros o bancos de datos. Por supuesto que en todos los casos que mencionan los artículos 17 y el 23 inciso 2) el registro no debe constituirse en un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa. Y en el caso de que hubiera una negativa infundada a proporcionar datos, es sabido que siempre existe la acción de hábeas data para que por vía judicial se pueda tener acceso a ellos, ya que de eso trata precisamente la regulación de esta acción.

Es el juez el que en cada caso apreciará si es correcta o no la negación del dato, invocando razones de defensa o de seguridad.

Se ha incorporado en el artículo 18 la facultad de las comisiones específicas del Congreso de solicitar datos reservados atinentes a cuestiones de seguridad y defensa. Ello es así porque se entiende que las comisiones del Parlamento por su rango institucional pueden tener acceso a ellos, dado que su actividad tiende a preservar la seguridad, la defensa nacional y el orden democrático.

En el proyecto se prevén sanciones, no sólo administrativas sino también penales para aquellas conductas que puedan considerarse más perniciosas y donde no puede satisfacerse el interés de la comunidad en protegerse con la sola sanción administrativa.

Por supuesto, nuestro país cuenta con otras normas que tipifican las conductas discriminatorias. En ese sentido, la ley 23.592 eleva las escalas penales cuando el delito reprimido por el Código Penal o por las leyes complementarias sea cometido por persecución racial o por razones religiosas o de nacionalidad. De esta forma, con esa ley y con las sanciones penales que se establecen en este proyecto de ley, se cierra el círculo de garantías del derecho a la igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

En cuanto a los aspectos procesales de la acción de hábeas data, ya sostuvimos que ella es una especie de la acción de amparo. Es decir, es una acción especial de amparo que tiene características especiales motivadas por dos aspectos principales: en primer lugar, porque se trata de defender derechos personalísimos, como son los derechos al honor y a la intimidad. En segundo término, dado el tipo de información que se maneja, muchas veces es necesario que esta acción sea lo más rápida y sumaria posible para poder bloquear la difusión de datos, porque en algunas oportunidades la acción puede llegar tarde para evitar su difusión. Por ello aquí se contempla en forma especial el hecho de que se pueda bloquear la difusión de datos, a fin de preservar lo que, precisamente, es el objeto protegido de este proyecto de ley: el derecho a la intimidad.

Esto le da a la acción de hábeas data una característica muy especial, en virtud de que, sin desconocer su propia naturaleza, se trata de una acción de amparo especial por su rasgo característico de defensa de derechos personalísimos.

Además por la naturaleza del bien protegido, en algunos casos es menester producir un inmediato bloqueo de la difusión de informes y, asimismo, es preciso darle competencia a la justicia federal cuando se trata de datos que pueden difundirse por los sistemas de redes interjurisdiccionales.

En lo que se refiere a los legitimados activos y pasivos, la iniciativa en tratamiento establece quiénes tienen legitimación activa y pasiva y también prevé la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo. Es sabido que la Constitución reformada en 1994 ha institucionalizado esta figura como protagonista principal de la defensa de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal en la defensa de los derechos humanos y, en este caso concreto, se le da posibilidad de actuar como coadyuvante porque, a veces la difusión de datos puede afectar intereses colectivos. Esa difusión puede ser de una magnitud tal que afecte los derechos de un grupo de personas, casos en los que se prevé —reitero— la intervención del Defensor del Pueblo en forma coadyuvante.

Para la presentación del hábeas data —esto es muy importante—, el proyecto de ley establece un criterio amplio en las condiciones de admisibilidad de la acción. O sea, un criterio amplio para admitir la acción. Al mismo tiempo, fija un criterio estricto o restrictivo para la interpretación de las excepciones legales establecidas en el acceso de datos. Es decir, amplitud para la admisión del recurso y criterio restrictivo en cuanto a la interpretación de las excepciones.

En cuanto a las sentencias, el proyecto establece que deben tener un contenido específico, que es la materia de protección y así se lo dice expresamente, lo que no constituye un sobreacondicionamiento de datos porque el hábeas data tiene un objetivo específico y el contenido de las sentencias también debe ser específico.

De esta forma, he dado los lineamientos generales de una institución que viene a integrar el arsenal de defensa de los derechos humanos de nuestro régimen institucional que se ha enriquecido con la reforma constitucional de 1994 porque nuestra Constitución, adoptando una postura de avanzada ha dado rango constitucional a los ocho tratados de derechos humanos más importantes mencionados en la propia Constitución. Y no se ha limitado solamente a consagrarlos y darles jerarquía constitucional sino que, además, ha previsto los medios para proteger esos derechos a través de la acción de amparo fijada por el artículo 43, cuyas acciones especiales para la defensa de los valores esenciales de la persona humana son el hábeas data y el hábeas corpus.

Por estos motivos, señor presidente, considero que damos un paso muy importante en la consolidación no sólo de la democracia sino también de los valores más importantes de la persona humana.



**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López** — Señor presidente: me toca informar por la minoría en un proyecto de jerarquía constitucional muy importante para el asentamiento de la democracia, para garantizar los derechos humanos de los habitantes del país y para la necesidad de preservar su privacidad, como bien lo señalaba el señor senador informante del bloque de la mayoría.

El señor senador por la Rioja fue constituyente, ha escrito sobre el tema y ha expuesto con mucha solvencia sobre los principios generales que la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada incorporan como esenciales para el tratamiento de los datos, tanto en el mundo como en nuestro país.

La disidencia que tenemos proviene de que quizás, no todos los principios que muy bien han sido enunciados tienen en la norma concreta que se pone a consideración del cuerpo su garantía específica debidamente asentada.

Pienso que para hablar de este tema tenemos que partir de las normas constitucionales. En ese sentido, el señor senador de la mayoría mencionó el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde los constituyentes de 1853 garantizaban la órbita privada de las personas. Pero la Constitución reformada de 1994, independientemente de cuál haya sido la intención de los constituyentes, pareciera que no pone límites al derecho de acceso —derecho básico que debe consagrar un principio garantista de los datos personales— de la persona, humana o ideal, al banco de datos que está procesando sus datos personales. El artículo 43 de la Constitución pareciera dirigirse directamente, en principio y en primer lugar, a ese derecho que tiene la persona de acceder al dato, sobre todo cuando está en registros públicos, al decir que “toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes...”. Entonces, me da impresión de que la primera intención del legislador fue garantizar el derecho de acceso de la persona a los bancos de datos públicos. Esto no es una casualidad en nuestro país porque, a raíz de los datos incorporados en los registros públicos del Estado, a veces mal tratados y otras tratados con mala intención, se produjeron violaciones a los derechos humanos, con un costo de miles de vida desaparecidas y persecuciones ideológicas y políticas.

Luego de un primer análisis de esta norma, debo decir que en realidad no nos convence lo que en muchos aspectos se concreta. Si bien es cierto que están perfectamente enumerados los principios establecidos en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado —que son muy valiosos en una ley de datos—, también es cierto que las numerosas excepciones que la ley prevé hacen que ellos caigan y que haya una vastísima cantidad de posibilidades en las cuales no va a existir el derecho de acceso a los datos ni a prestar el consentimiento para que ellos sean procesados ni a impedir la cesión de información que un banco de datos público o privado pueda tener de una persona.

Esta violación a los principios generales nos hace disentir profundamente con la norma en discusión.

Hace un momento se decía que estaban totalmente preservados los datos sensibles, que revelan el origen racial y étnico; las opiniones políticas; las convicciones religiosas, filosóficas o morales; la afiliación sindical o la información referente a la salud o a la vida sexual. Pero resulta que en el inciso 2. del artículo 7º se establece que los datos sensibles “sólo pueden ser recabados y objeto de tratamiento cuando median razones de interés general autorizadas por la ley”, con lo cual hay una fuerte posibilidad de generalizarlos por vía de excepción y de violentar los principios establecidos en los primeros artículos del proyecto.

Nuestras principales objeciones pasan precisamente por la independencia del órgano de control y su ubicación en el organigrama del Estado. Además, nuestra disidencia surge porque estamos delegando una facultad que nos es propia, porque según establece la Constitución, a nosotros nos corresponde en primer lugar reglamentar este instituto y establecer cuál es el órgano de control que queremos para preservar mejor el derecho a la privacidad de nuestros habitantes.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. López.** — ¿Cómo debe estar compuesto ese órgano de control? ¿Cuál debe ser su grado de independencia, que permita garantizar los derechos humanos de nuestra gente en nuestro país?

No nos satisface que el Poder Ejecutivo pueda, por vía reglamentaria, establecer cuál va a ser el órgano de control, cómo va a estar compuesto, cuál será su ubicación en el organigrama del Estado, cuál va a ser su grado de depen-

dencia de un poder político, cómo van a ser designados sus funcionarios, cuál va a ser su estabilidad. Esto no nos conforma en absoluto. Creemos que estamos haciendo una grave delegación de facultades legislativas, que deberíamos asumir para garantizar los principios que brillantemente fueron expuestos por el miembro informante de la mayoría con relación a la privacidad de las personas.

Señor presidente: la legislación comparada en materia del órgano de control es valiosa. Las legislaciones que más han avanzado sobre las garantías con respecto al tratamiento de los datos personales han establecido perfectamente cuáles son los organismos de control que obran con independencia de los poderes públicos y que garantizan la privacidad de las personas.

Todas las leyes internacionales en vigencia reconocen al individuo una serie de derechos de control que se conocen con el nombre de acceso. Dichos organismos de control a nivel institucional están perfectamente reglamentados por las leyes respectivas. Así sucede en Noruega, en Austria, en Dinamarca, en Francia, en Alemania. El derecho de acceso no sería una garantía suficiente sin la existencia de un órgano que controle la legalidad de la actuación de las entidades públicas y privadas. Un control eficiente supone una clara separación entre el organismo de control y los organismos controlados, ya que la autoridad del órgano de control está basada en su independencia. Además, un derecho sin garantía es un eufemismo. Si el órgano que va a controlar el registro de los bancos de datos públicos puede ser creado por el Poder Ejecutivo y se lo hace depender directamente de él mismo, ¿qué garantía tienen los ciudadanos en la Argentina de que ese órgano va a obrar con independencia en el tratamiento de sus datos personales?

Por eso, no estamos conformes con la forma en que se regula el mecanismo del órgano de control. En el proyecto de ley que habíamos presentado preveíamos un órgano de control totalmente diferente. Decíamos que este organismo de control debería ser autónomo y estar integrado por un miembro elegido por la Cámara de Diputados de la Nación, uno elegido por el Senado de la Nación, uno por el Poder Ejecutivo nacional, uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno elegido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Que funcionaría con un presupuesto adecuado y totalmente independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Que tendría el control del Poder Legislativo pero

sería un órgano independiente. En la comisión se nos objetó que eso sería crear un organismo burocrático más, precisamente en el proceso de reforma del Estado. Esto es simple de contestar.

Acá estamos garantizando un derecho humano elemental, el derecho a la privacidad —como bien lo exponía el señor miembro informante por la mayoría—, la necesidad del individuo de estar solo, de preservarse en el espacio y en el tiempo que los medios de comunicación y la informática establecen en el momento actual de la historia. Hoy es posible traer un dato del pasado en un segundo y proyectarlo, superando ese límite natural que tenía el tratamiento de los datos personales antiguamente, cuando el propio tiempo hacía que las cosas se olvidaran y que el individuo pudiera recomponer una personalidad cuando había cometido algún tipo de error. Hoy tampoco existe el límite del espacio. Como ustedes saben, estamos conociendo lo que está pasando en cualquier parte del mundo casi en el mismo momento en que se produce. Y la densidad demográfica, aunque parezca mentira, también ha quitado privacidad a las acciones de los hombres. Es un elemento no mencionado por la doctrina; sin embargo, deberíamos tenerlo en cuenta para regular todos estos aspectos.

Señor presidente: me da la impresión de que los principios que fueron expuestos no están debidamente garantizados en este proyecto de ley. No lo están el organismo de control ni el derecho de acceso ni el de corrección. Porque las excepciones establecidas al principio son muchísimas y numerosas. Vanossi decía que cuanto más poder se concentra (el que acumulan las computadoras y las máquinas de información), más necesidad hay de establecer controles más rígidos y mayor responsabilidad para el Estado. Entonces, este aspecto de que se estaba creando un órgano burocrático no nos parece importante frente a la necesidad manifiesta de defender la privacidad y los derechos humanos de las personas. Creemos que si hay que gastar en crear una comisión de control importante, el Estado está gastando bien la plata en ese aspecto, garantizando la libertad y la individualidad de sus habitantes. Tampoco nos convencía el argumento de que los senadores o los diputados vamos a estar en tantas comisiones que vamos a descuidar nuestra tarea legislativa, porque no era esa la forma que proponía la norma. La que nosotros proponemos en nuestro proyecto de ley no decía que sea un diputado o un senador, sino un miembro elegido por la Cámara de Diputados, que puede perfectamente no ser un diputado, y un miembro elegido por la Cámara de

Senadores, que puede perfectamente no ser un senador, o un miembro de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que no tiene por qué ser uno de sus titulares.

Entonces, ésa es una primera objeción básica que nosotros oponemos al tratamiento de este proyecto y que será motivo de una propuesta diferente en el tratamiento en particular.

Pero entre las facultades de este organismo de control se inserta una que también nos parece muy importante marcar para ver si podemos modificarla en la consideración en particular, porque hace a la concentración de los datos de todos los bancos, ya sean públicos o privados, precisamente en el órgano de control.

Existe una contradicción en el artículo 29, que es el que establece las facultades del organismo de control. En efecto, el inciso e) de ese artículo dice lo siguiente: "Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que se les requieran". Es decir, toda información sobre datos personales que exista en los bancos privados y públicos del país va a estar concentrada en el organismo de control. Casi con seguridad podría decir que ese organismo de control va a depender del Poder Ejecutivo, por lo que su composición se realizará a su criterio.

En este proyecto de ley tan importante relativo a los derechos humanos estamos delegando en el órgano de control la facultad de garantizar su independencia.

Decimos que existe una contradicción porque en el inciso d) de ese mismo artículo se dice que el organismo de control controlará "la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registro o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos". Pero en el inciso e) se dice que puede requerir directamente los programas sin necesidad de solicitar la autorización judicial.

Considero que debemos corregir esa contradicción y disponer que la autorización judicial sea obligatoria. De esta manera estaríamos creando un organismo propio de un Estado totalitario, y no de uno democrático.

Las excepciones establecidas en el artículo 5º en materia de previo consentimiento para el tratamiento de los datos personales, como los concernientes a la cesión de los datos personales prevista en el artículo 11, inciso 3º), son tan im-

portantes, amplias y abundantes que, como bien lo señala el señor senador Villarroel en su disidencia, hacen caer los principios establecidos de que no pueden tratarse ni cederse los datos personales sin el conocimiento y consentimiento de la persona.

Lo establecido en esos artículos nos hace sentir en profundidad con esta norma. En ese sentido, llamamos a la reflexión para ver si podemos mejorar el texto en el tratamiento en particular.

Existe la posibilidad de los bancos de datos de denegar información al juez, según lo que establece el artículo 39, inciso 2. del proyecto de ley contenido en el dictamen en mayoría. Frente a la acción de hábeas data, previamente el juez debe solicitar al banco de datos pertinente que le mande los datos registrados que son materia del recurso presentado. Esos datos pueden ser denegados por los propios bancos de datos cuando tengan alguna característica que según su criterio afecte la seguridad pública, la fuente de información, etcétera. Pero el proyecto dice que esos datos pueden ser denegados no a la persona sino al juez. El inciso 2. del artículo 39, en sus dos primeros párrafos, dice lo siguiente: "Los archivos, registros o bancos de datos públicos sólo podrán invocar las excepciones autorizadas por la presente ley, o los establecidos en una ley específica. En tales casos deben acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal."

"El juez apreciará con criterio restrictivo toda oposición al envío de informes sustentado en tales causas, debiendo expedirse dentro del segundo día de planteada la excepción". Es decir que ante la negativa, el juez tiene que ratificar su decisión de que le envíen los datos. Incluso, el banco de datos tiene la facultad de apelar la decisión del juez. Nosotros creemos que esto no es propio de un estado democrático, en el que el Poder Judicial tiene, precisamente, la tarea de garantizar los derechos individuales y la intimidad de las personas. Creemos que el banco de datos siempre debe enviar los datos que el juez le requiera, y que es el propio juzgado quien debe decidir si los proporciona al accionante del hábeas data en base a las excepciones establecidas por la ley. Para eso está el Poder Judicial; para interpretar las excepciones a la ley y el alcance de las mismas. No podemos trasladar, entonces, esta facultad al banco de datos requerido, razón que motiva nuestra disidencia con el proyecto en este aspecto. No todos los principios enumerados por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada que han sido expuestos

en este recinto están perfectamente insertos en el texto del proyecto de ley en tratamiento.

Otra cuestión es la relativa a las posibilidades de aplicar sanciones por parte del organismo de control, las que pueden llegar hasta los 100 mil pesos o a la clausura o cancelación de la autorización judicial para funcionar, sin intervención judicial previa. Estas facultades son similares a las otorgadas a la DGI, por vía de una omisión legislativa de derogar una norma vigente, para clausurar comercios mediante una simple acta de inspección y sin intervención judicial, facultades que han traído innumerables problemas en el país.

En consecuencia, el órgano de contralor podrá clausurar los bancos de datos prácticamente sin intervención judicial, cuando se le ocurra cancelar su autorización para funcionar, o imponer las sanciones administrativas que el proyecto de ley establece, algunas de ellas muy importantes y con montos de hasta 100 mil pesos, cifra que no es broma en los circuitos monetarios de nuestro país.

Otra cuestión está dada por la posibilidad del órgano de control de constituirse en querellante mediante una acción penal, produciendo la injerencia de diferentes organismos del Estado, puesto que, obviamente, ya está actuando la fiscalía querellando al particular pasible de una acción penal. No veo entonces la necesidad de establecer la posibilidad de otro querellante llevando adelante un proceso tendiente a sancionar al particular. Creo, entonces, que esta facultad de querellar es absolutamente sobreabundante y no contribuye al sistema que se pretende establecer.

El artículo 10 del proyecto en tratamiento, relativo al deber de confidencialidad y al secreto profesional, establece: "El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos...". Está bien lo establecido por esta norma, que es, precisamente, uno de los principios sostenidos por toda la doctrina al respecto. Pero luego continúa diciendo: "... El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública". La pregunta es ¿por quién? ¿Por el órgano de control, que puede no ser independiente y depender expresamente del Poder Ejecutivo, que puede no representar una garantía para los derechos de las personas? No-

sotros creemos que el obligado solamente podrá ser relevado de ese deber por resolución judicial. Y en este aspecto creemos que también debería modificarse la norma.

No quiero avanzar sobre la cuestión de la cesión de los datos, a la cual he hecho mención con anterioridad. Pero debo decir que, precisamente en materia de cesión y cuando se habla de la transferencia internacional de datos, se establece en el artículo 12 del proyecto lo siguiente: "Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la República Argentina...". Pero después se establece: "... La prohibición no regirá en los siguientes supuestos: Colaboración judicial internacional...". Esto está bien. "... Intercambio de datos de carácter médico cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica... Esto también está bien. "... Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable...". Este texto es un poco amplio en su redacción y quizás convendría pensarlo mejor...; "Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte..."; lo que está bien. Pero en el inciso e) se dice: "Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico". ¿Quién decide si se transfieren los datos internacionalmente en base a la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico? ¿El propio organismo de inteligencia o de control, que puede no ser independiente, como decíamos anteriormente? ¿O este caso está necesariamente involucrado en el inciso d) y los datos se podrán transferir cuando existan tratados internacionales al respecto, como creemos que debe ser, porque si no estaríamos dejando en manos de los organismos de inteligencia el desparramo de los datos personales de los argentinos en sus propias manos sin que exista un contralor, ni siquiera del organismo de control en la Argentina?

Nosotros participamos de los principios que el miembro informante ha expuesto. ¿Cómo no lo vamos a compartir! Lo que ocurre es que no nos gusta el hecho de que las decisiones sean tan amplias que violen los principios, que haya un organismo de control que no sea independiente, que los datos se puedan ceder —incluso internacionalmente— sin el consentimiento de las per-

sonas, y que la cesión la puedan efectuar los propios organismos de seguridad. No nos gusta cómo ha quedado redactada la cuestión de los supuestos especiales del artículo 23, tal como ha sido pedido por los organismos de inteligencia de la Nación.

A nuestro entender, siempre que se contengan datos personales en un registro, deben quedar sujetos al régimen de la presente ley. No solamente en cuanto a los datos administrativos, porque los propios organismos de seguridad dijeron que no les interesan, sino precisamente en cuanto a los datos personales.

Creemos que el tratamiento de los datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública, que son conceptos amplios, solamente puede hacerse cuando existe un peligro real e inminente, y no pueden conservarse indefinidamente. Esto ha servido para violaciones importantes de los derechos humanos. Entonces, tratemos de poner los límites que están en nuestras manos cuando corresponde, es decir, durante el tratamiento del presente proyecto.

Con estas palabras dejo fundamentada la disidencia parcial del bloque de la Unión Cívica Radical. En realidad, es casi una disidencia total, porque si el organismo de control es el que se señala, se lo puede crear como se dice, y no se garantiza su independencia, no puede ser una disidencia parcial.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque autonomista.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: evidentemente, el tema que hoy nos ocupa es trascendente.

(Lee): "Voy a tratar de ser lo más concreto posible teniendo en cuenta que yo había presentado un proyecto a este Honorable Senado de la Nación, que era reglamentario de la acción de hábeas data que prevé el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Estimaba que ello implicaba colaborar con la sanción de una de las leyes de la reforma de 1994.

Mi proyecto estaba diseñado —en mi opinión— de una forma clara y concisa. Lo redacté de forma tal que sólo en cinco artículos establecía el marco operativo necesario para que todos los habitantes de nuestro país, tanto personas físicas como jurídicas, puedan ejercer esta garantía y proteger adecuadamente sus derechos.

Como es sabido, la acción del hábeas data refleja una necesidad que nace del auge de la infor-

mática y la multiplicación de los archivos de datos referentes a las personas.

El proyecto que oportunamente presentara estaba dirigido a proteger, por un lado, la veracidad de la información y, por otro, los derechos vinculados en forma directa y profunda con la libertad individual.

No hay ejercicio pleno de la libertad si no existe una zona protegida de las interferencias de terceros, ya sea el Estado o los particulares.

El proyecto que hoy consideramos, a mi criterio, adolece de un excesivo reglamentarismo que lo priva de claridad. Está destinado en sustancia a un aspecto que excede el hábeas data: la regulación de los archivos y bancos de datos electrónicos o manuales, sean éstos privados o estatales.

Esta regulación, en muchos aspectos, resulta en extremo casuística y, en definitiva, puede tener como efecto —como veremos luego— la demora en la implementación del hábeas data, que es la garantía que deberíamos asegurar a todos los habitantes.

Quiero recordar que la doctrina de nuestros constitucionalistas —Bidart Campos, Ekmekdjian, Vanossi— ha estimado que la norma constitucional vigente debe considerarse operativa aun sin la norma que la reglamente, dado que constituye una nueva garantía constitucional dentro del género del amparo, que debe ser aplicada por los jueces con los elementos procesales que prevé la legislación vigente.

Los Tribunales de la Nación y la Cámara Nacional en lo Civil también se han pronunciado sobre su directa operatividad en los autos "Rosetti c/Dunn y Bradstreet", del 19 de mayo del año pasado. Es decir —reitero— que en lugar de facilitar la implementación de la garantía es posible que la estemos demorando.

En efecto, el proyecto tal como está redactado abriría esta última posibilidad dado que el artículo 43 establece que "El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación".

Creo que debemos dejar en claro en el texto de la ley que la acción de hábeas data es operativa aún antes de que el Ejecutivo dicte aquella reglamentación.

Desde mi punto de vista, algunas de las disposiciones restringen en forma severa la posibilidad de ejercer la garantía. Así, por ejemplo, el artículo 17 dispone que: "Los responsables o usuarios de bancos de datos, pueden denegar el

acceso, rectificación o la cancelación en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública...”.

Estos conceptos son demasiado vagos y pueden abrir un extenso repertorio de posibilidades que impidan el ejercicio de derechos que han sido expresamente establecidos en la Constitución Nacional.

También parece inconveniente, en líneas generales, la obligación de que todos los particulares que formen archivos que no sean para su uso exclusivamente personal deban registrarse.

Es un dato de la realidad, por ejemplo, que la mayoría de los establecimientos educativos tienen datos personales de sus alumnos. Estos establecimientos deberían estar exentos de la regulación.

Por su parte, creo que el ámbito de las funciones que el artículo 29 confiere al organismo de control es demasiado amplio y puede ser peligroso para las libertades individuales. Aquél dictará las normas y reglamentaciones vinculadas con los archivos de datos —inciso b)—; deberá realizar un censo de aquéllos y mantener un registro permanente —inciso c)—. Por su parte, las entidades públicas y privadas deberán proporcionarle los antecedentes, documentos, programas y otros elementos relativos al tratamiento de datos que se requieran —inciso f)—.

Pero además la ley le da competencia para imponer las sanciones administrativas que correspondan y puede imponer multas de hasta cien mil pesos y la clausura o cancelación de la autorización del archivo o banco de datos —artículo 31, inciso 1— . Es decir que quien dicta las normas, las aplica.

Esto es contradecir expresamente los principios de la Corte Suprema de Justicia, que estableció hace cuarenta años en el caso “Mouviel” (fallos 237:636-1957) que la preservación del principio de la división de poderes impide que el mismo ente administrativo que hace la norma la juzgue.

A mi criterio, el proyecto tampoco designa el órgano judicial que revisará sus decisiones, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde el caso “Rodríguez Arias” (fallos 247:646-1960).

También el ente decide sobre la procedencia de los códigos de conducta que establezcan las asociaciones de los responsables o usuarios de los bancos de datos —artículo 30, inciso 2—, lo que parece impropio de un órgano administrativo, dado que esta es función típicamente jurisdiccional.

Finalmente, en lo que se refiere en forma específica a la acción de hábeas data, consideramos que es excesivo el ámbito que se atribuye como competencia de la justicia federal. Esto es especialmente claro en lo que se refiere a los archivos de datos que se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales nacionales.

La misma índole de la actividad y los progresos de la informática hacen que los datos de la actividad estén generalmente interconectados, de tal forma que la decisión de la mayor parte de las acciones de hábeas data será de competencia de la justicia federal, lo que significa un menoscabo para las autonomías provinciales y sus instituciones de justicia y una nueva concentración de poder en manos del gobierno federal.

En verdad, siento que el Congreso de la Nación no haya optado por sancionar una ley breve y clara que garantice a los ciudadanos el derecho a controlar la veracidad y difusión de los datos que hacen a sus personas.

Considero que el proyecto propuesto puede postergar la implementación de hábeas data; es peligroso para la libertad de ejercer industria lícita y es deficiente en la protección de las garantías del debido proceso”.

De acuerdo con lo que acabo de manifestar, con lo que fijo mi posición en cuanto a este proyecto que estamos considerando, quiero señalar que en el tratamiento en particular voy a proponer una modificación en la redacción del artículo 39 y también en el artículo 12 inciso 1.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: voy a intentar acortar mi exposición, porque creo que ya han sido suficientemente exhaustivos y medulosos los informes que han vertido los oradores preopinantes, incluso aclarando algunas dudas que se expresan como críticas al dictamen que he firmado de conformidad, en cuanto a lo manifestado por la mayoría.

La verdad es que se debe destacar que ésta no es una decisión apresurada, no meditada, no discutida, ya que se han realizado numerosas reuniones en la comisión respectiva y se ha escuchado una pluralidad de opiniones de parte de los distintos sectores que se sintieron afectados o interesados en enriquecer con su propia visión lo que habría de resultar en el texto definitivo.

También se han tenido en cuenta interesantes proyectos de distintos señores senadores y, desde luego, la iniciativa inicial venida en revisión desde la Cámara de Diputados.

Yo he firmado este dictamen creyendo recoger una suerte de conformidad que distintos sectores afectados nos hicieran llegar en su momento sabiendo incluso que algunos de ellos no están plenamente satisfechos.

Si bien puede ser objetable, por ejemplo, un exceso de minuciosidad, considero que ello muestra el desvelo que se ha tenido para contemplar diversos supuestos, máxime en un instituto que es virgen en nuestra propia experiencia.

Por eso he firmado este dictamen de conformidad, sin perjuicio de que un nuevo examen de pensamiento me haga realizar algunas observaciones y manifestar disidencias que en su momento habré de exponer ante la opinión de esta Cámara.

Este instituto, como se ha puesto de manifiesto, viene a recoger lo que expresamente, de manera muy terminante, establece la Constitución reformada en su artículo 43, tercer párrafo, que intenta resguardar constitucionalmente —y ahora, a través de la ley que se va a dictar— un doble derecho que asiste a los individuos en el ejercicio de ese derecho de intimidad que precisamente ha sido señalado y delineado por parte del miembro informante de la mayoría: me refiero al derecho a recabar los datos personales que afectan a cada individuo y al derecho a rectificar —o hacer rectificar— aquellos que estén en desacuerdo con la verdad o que se contraponen a la protección que siempre se debe dar al derecho a la intimidad.

Este amparo cobra hoy una importancia muy especial porque con el desarrollo de los medios, sobre todo de tipo informático y con las técnicas de comunicación, la persona humana se ve sobrepasada por una curiosidad pública que a veces no es justificada de ninguna manera cuando se trata del resguardo de los derechos que hacen al honor del individuo.

Y por eso es justo que en la norma se haya intentado resguardar esos derechos, incluso estableciendo una dimensión muy específica, mucho más precisa, sin duda alguna, de lo que se había instaurado; inicialmente en la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

Quiero leer la opinión de un conocido constitucionalista, el doctor Gregorio Badeni. Precisamente, en el matutino "La Nación", hoy se publica un artículo suyo alertando sobre la circunstancia de que, a veces, por grande que sea nuestra preocupación por resguardar ese derecho, con el notable desarrollo y la amplitud técnica que ofrece la informática podría verse

vulnerado. Por ejemplo, si en la Internet alguien introduce subrepticamente datos que no se sabe de dónde vienen, quedaría vulnerado todo el sistema de resguardo que nosotros pretendemos introducir.

Dice Badeni en su libro sobre los nuevos derechos y garantías constitucionales: "El ejercicio del hábeas data, sin perjuicio de la remisión constitucional a la acción de amparo, requiere necesariamente de una ley reglamentaria destinada a precisar sus alcances". Y señala que la reglamentación legislativa del hábeas data deberá ser sumamente prudente, procurando evitar la lesión de derechos y garantías fundamentales, tales como la inviolabilidad del domicilio; de la correspondencia epistolar y de los papeles privados, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, así como también la documentación pública relacionada con la seguridad del Estado y del sistema constitucional democrático.

Pero esa ley reglamentaria en modo alguno podrá vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística, tal como lo prescribe expresamente el propio artículo 43.

A esto, como bien se ha puesto de manifiesto, tenemos que agregar otros derechos, tales como el de la libertad religiosa y política, el secreto profesional, el secreto industrial o el secreto comercial, y el derecho a la no discriminación, entre los muchos derechos que pueden originar conflictos en la materia que ahora estamos analizando.

Sin duda alguna, creo que el dictamen ha tenido en cuenta esta toma de posición doctrinaria del autor que cito. Ciertamente, el dictamen ha sido fruto de un estudio prolijo, desprovisto —creo yo— de intenciones partidistas por parte de las comisiones y ha recibido y tomado en cuenta numerosas sugerencias y críticas que se nos hicieron llegar en el curso de las diversas audiencias públicas que hemos realizado en relación con este tema.

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, este proyecto recepta la regulación del hábeas data y también la de los archivos de datos y bancos de datos, según se ha hecho notar.

Sin embargo, dije que tengo algunas observaciones que formular. Por ejemplo, respecto del artículo 1º, considero que no es necesaria la disyunción "electrónicos o manuales", por lo que creo que sería de buena técnica proceder a su eliminación.

El artículo 2º del proyecto se refiere, como sabemos, a los datos sensibles; dice —y leo—: "...son los que revelan origen racial y étnico,

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.

Coincido completamente con esta diferenciación que se ha hecho entre los que se denominan datos de carácter personal, distinción que no estaba en el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, aunque se les daba una protección especial, por medio del artículo 11.

Creo que está muy bien esta distinción entre los datos sensibles y los de carácter personal, porque en aquéllos —en los casos de datos sensibles— entramos de lleno en aspectos que hacen al honor y a la intimidad de las personas y que pueden incidir en la discriminación a la que se refiere el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Este tema, como dije, es uno de los que recibió mayor atención por parte de la comisión. Se buscó equilibrar el amparo previsto en la Constitución Nacional con el resguardo de ciertos datos personales, específicos y singulares, a los que se ha denominado datos sensibles.

En el proyecto de la Cámara de Diputados se hablaba de derechos especialmente protegidos. Parte de esos derechos, especialmente los comprendidos por el inciso primero del citado artículo 11, y el referido a la salud, del inciso segundo, han sido receptados en el artículo 2º del dictamen que estamos considerando, con lo cual se clasifica un tema muy delicado y se actúa dentro de esa norma o criterio de prudencia al que aludía el autor que he citado.

La protección contra el tratamiento de datos sensibles se completa con lo dispuesto en el artículo 7º, incisos 1º, 2º y 3º. Con respecto al artículo 7º, adhiero a la disidencia formulada por el señor senador Usandizaga en cuanto al inciso 4, ya que en otros países los datos de antecedentes contravencionales son objeto de tratamiento para el cálculo de las primas de seguros en caso de accidentes de automóviles. En consecuencia, no resulta razonable lo dispuesto en ese inciso ya que sólo se autoriza a las entidades públicas competentes para tratar ese tipo de datos. Es decir que se excluye a los organismos privados y acabo de citar —en coincidencia con el senador Usandizaga— un caso que evidentemente ameritaría un tratamiento diferente.

Respecto de los datos de carácter personal, el artículo 5º considera ilícito su tratamiento cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito o por otro medio que se le equipare, de-

biendo figurar ese consentimiento juntamente con las advertencias del informe al interesado que establece el artículo 6º.

Las excepciones, algunas de las cuales han sido criticadas, considero que son justificadas.

También es positiva la solución que da el artículo 3º del proyecto al problema de la licitud de la formación de bancos de datos, lo cual será viable cuando ellos se encuentren debidamente inscriptos. Aquí primó el criterio de la sola inscripción en el registro pertinente por sobre la tendencia que postulaba la autorización previa, que hubiera podido dar lugar seguramente a ciertas arbitrariedades en el otorgamiento.

Quiero adherir a la disidencia formulada por el señor senador Villarroel respecto del artículo 10, en el sentido de que debe establecer qué autoridad puede relevar al obligado del deber de confidencialidad. Es evidente que la autoridad indicada tendría que ser un juez, tanto es así que me permito leer una cláusula tentativa que se agregaría al punto 2 del artículo 10 y que diría que el juez podrá relevar al obligado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, a la defensa nacional o la salud pública.

El artículo 12 prohíbe la transferencia internacional de datos personales de cualquier tipo con países u organizaciones que no den un nivel de protección equiparable al nuestro. Esta prohibición no regirá en los casos de colaboración judicial internacional, en el intercambio de datos de carácter médico y en otros que se detallan más adelante.

En la comisión recibimos algunas sugerencias que nos fueron transmitidas incluso por algunos colegas de la Cámara de Diputados, en el sentido de si esto no podría afectar nuestros compromisos con otros países del Mercosur.

Considero que eso está contemplado en el artículo 12, punto 2, inciso d) al establecerse que no regirá la prohibición del artículo 12 punto 1 cuando la transferencia se hubiera hecho dentro del marco de los tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte.

De manera que esta prevención que se nos hizo llegar al seno de la comisión considero que está perfectamente aclarada dentro de este contexto.

Un tema que sin duda alguna ha traído y sigue trayendo preocupación en muchos sectores es el de los servicios de información crediticia. Este es un asunto acerca del cual ayer hemos recibido una presentación —por cierto, no desdeñable—



de la totalidad de asociaciones que nuclean a los bancos privados, públicos y cooperativos.

Al respecto, voy a hacer una interpretación de la norma del artículo 26 porque conforme a lo que dispone su inciso 1º podría interpretarse que los datos referidos a la solvencia económica y al crédito de una persona física sólo podrán ser objeto de tratamiento cuando fueran obtenidos de fuentes accesibles al público o facilitadas por el interesado o con su consentimiento. Es evidente que esa persona, si tiene problemas de incumplimientos, difícilmente brindará esa información o prestará su consentimiento para tal fin. Ello, como sostienen las entidades a las que hice alusión, provocará un encarecimiento o restricción del crédito, lo que no es beneficioso, máxime cuando actualmente se sostiene que la falta de crédito retarda el proceso de reactivación que todos deseamos. Por ello, a la luz de lo que disponen los incisos 2 y 4 del artículo 26, considero que la inquietud planteada podría ser tenida en cuenta en el futuro.

Por otro lado, dejó sentada una disidencia que es producto de una reflexión posterior a la firma del dictamen. Considero que los registros, bancos o archivos de datos pertenecientes a las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la norma en tratamiento. Por un lado, debe tenerse en cuenta que no se trata de archivos de datos cuya finalidad sea suministrar informes sobre las personas físicas o jurídicas, como también sería el caso de los servicios de información crediticia, sino que esos registros son simplemente el soporte o el sustento de la noticia periodística que se va a dar.

Por otro lado, resalto el peligro que implica tal inclusión para la libertad de prensa y la confidencialidad de sus fuentes, en razón de la posible intromisión que podría producirse por parte de los poderes públicos en dichos archivos. Esto podría poner en peligro la imperiosa o categórica disposición del artículo 43 de nuestra Constitución, que dice: "No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

En consecuencia, si bien es cierto que está vigente lo normado en el inciso 1º del artículo 39 del proyecto en análisis, sería conveniente mantener el criterio que se había establecido en el proyecto de ley en revisión, en el que se excluía del régimen de la presente ley a los registros o bancos de datos de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística.

Por esa razón, en su momento voy a solicitar que se agregue a la definición de archivo, registro, base o banco de datos —que figura en el artículo 2º—, el siguiente párrafo: "A los fines de esta ley se excluyen aquellos pertenecientes a personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística por cualquier medio de comunicación social. En ningún caso, podrá afectarse el secreto de las fuentes ni pretender que las mismas sean reveladas".

Otro punto que mereció mi preocupación recientemente ha sido puesto de manifiesto en la discusión precedente en lo referente al órgano de control.

Se ha dicho que ese órgano de control no se ha querido explicitar, dejándolo al arbitrio de la reglamentación que oportunamente tendrá que dar el Poder Ejecutivo. Creo que hubiera sido bueno que lo explicitáramos nosotros luego de una discusión madura, buscando la mayor neutralidad posible dadas las evidentes grandes atribuciones que puede tener un órgano de control en el proceso de aplicación de este proyecto.

Con relación a la legitimación activa, a la cual oportunamente se refirió el señor miembro informante de la mayoría cuando habló de la actividad coadyuvante del defensor del pueblo, me parece que está bien que no solamente actúe en el ámbito público, sino que también pueda introducir su acción cuando se trate de archivos y bases de datos privados. En cambio, creo que es excesivo lo que se prevé en el artículo 37, inciso 2º, referido a los requisitos que debe tener la acción o demanda de hábeas data.

Si se tiene el derecho a recabar el dato y traerlo ante el tribunal porque es falso, inexacto o discriminatorio, no es necesario señalar de qué modo afecta los derechos de la persona; basta con que sea falso para que el titular tenga derecho a solicitar su rectificación. Basta que se trate de un tema sensible para que también el interesado pueda pedir su supresión. No tiene, entonces, por qué demostrarse la existencia de perjuicio alguno porque puede ser eventual y no actual.

El artículo 3º indica que la formación de archivos de datos será lícita cuando los mismos se encuentren debidamente inscriptos en el registro habilitante y cuando observen los principios establecidos en el presente proyecto y en la reglamentación que se dicte en consecuencia. Como está redactado, podría interpretarse que se refiere a los bancos de datos a formarse en el futuro y no a los existentes.

El artículo 44 del texto que consideramos, que es una disposición transitoria y que establece que los registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley deberá inscribirse en el registro a habilitarse, entiendo que es insuficiente porque sólo exigiría a los bancos o registros de datos existentes la inscripción pero no la adecuación a su operatoria. Es decir, la adecuación de su operatoria al régimen legal que estamos legislando.

Por ello, creo que podría suscribirse una pequeña modificación consistente en agregar entre "el artículo 21" y "dentro del plazo" un párrafo que diga "y adecuarse a lo que dispone el presente régimen".

Señor presidente: estamos por votar un texto legal, trascendente y necesario. El transcurso del tiempo y el funcionamiento de la institución nos dirá si estamos legislando con acierto o si puede aconsejarse en la experiencia que se viva las modificaciones concurrentes.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: quiero dejar constancia del arduo trabajo que se ha hecho en la búsqueda de un consenso, más allá de las coincidencias y disidencias que han aflorado a lo largo del debate.

En este sentido, ha quedado evidenciado el común deseo de sancionar el régimen legal que reglamente una institución novedosa para nuestro país —no así para otros— que dará respuesta a muchos problemas que antes no tenían solución legal.

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta las observaciones o disidencias que he explicado en el curso de mi exposición, adelanto mi voto favorable en general al proyecto que estamos tratando.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: celebro que finalmente estemos tratando este tema en esta Cámara. También celebro las fundamentaciones —diría la filosofía— con que fue encarado el proyecto.

Al igual que otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra, y como consta en las hojas impresas que están en cada banca, tengo disidencias respecto de determinados artículos que en el tratamiento en particular señalaré, y espero sean aceptadas.

Dado que el hábeas data tiende a preservar los derechos de cada uno de nosotros en lo que respecta a los datos sobre nuestra persona y su difusión; dado que el destinatario de este amparo son los organismos de Estado o privados que almacenan esos datos y que pueden llegar a manipularlos, y dado que el objetivo es que cada uno de nosotros pueda conocer el contenido de esos datos y, eventualmente, rectificarlos, actualizarlos o eliminarlos si siendo datos sensibles nos hacen pensar en alguna forma de discriminación, este sistema, esta legislación amplia que estamos elaborando debería apuntar —como creo que lo indicó el espíritu de los convencionales que participaron en la reforma constitucional de 1994— a garantizar al máximo esos derechos y a limitar al máximo las trabas que puedan ejercer, precisamente, esos organismos tanto del Estado como privados, o a limitar, en todo caso, la posibilidad de que se inmiscuyan, manejen y manipulen los datos de nuestra privacidad.

Voy a argumentar por qué he de solicitar la modificación de los artículos 2º, 12, inciso b, 17 —por los supuestos vagos y a nuestro criterio inconstitucionales de defensa de la Nación, orden y seguridad pública como argumento para no dar datos o información— y 23.

Ante la argumentación planteada por cuerpos legales del Servicio de Inteligencia del Estado debo decir que nadie en este país quiere impedir a los servicios de inteligencia que trabajen. Al contrario. Estamos a cada rato ante atentados: a la Embajada de Israel, a la AMIA, y ahora al cementerio de La Tablada, para no poner más que algunos ejemplos. En efecto, estamos exigiendo que esos servicios de inteligencia trabajen. En todo caso, si la inexistencia de la ley de hábeas data no les aceleró la capacidad investigativa en ese sentido y en estos casos, no veo cómo en el futuro pudiera trabarla.

Estoy convencida de que el derecho de ejercer inteligencia para proteger los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal debe tener y mantener un equilibrio con los derechos individuales. Esto lo exige el derecho republicano de cada uno de nosotros y por eso vamos a pedir que se modifique también el artículo 23.

Por lo tanto, adelanto ya mi voto afirmativo en general y, cuando se trate en particular, voy a decir cuáles son nuestras disidencias que, pero, sean aceptadas.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: en primer lugar es casi irresistible la tentación de señalar

que a tono con la materia que estamos tratando, este debate se está desarrollando cuasi en la intimidad y, para quienes gustan de las curiosidades históricas y además de las coincidencias, aprovechando este tono de intimidad, creo que no sería inoportuno decir que el casamiento de la hija de un senador —no aquí sino en Estados Unidos, en 1890— fue la circunstancia que originó el por algunos denominado primer trabajo orgánico sobre este tan traído y llevado derecho a la intimidad. Resulta que la hija del senador Samuel Warren contrajo matrimonio, y la prensa de la ciudad de Boston no sólo se ocupó de los detalles de la boda sino también de otros muchos detalles de la vida íntima del senador, de su familia y de todos los involucrados en ese acontecimiento social, lo cual desde luego, molestó bastante al senador, quien ante la emergencia encargó a un famoso abogado, que luego fue ministro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, llamado Louis Brandeis, que buscara entre los antecedentes del *common law*, para saber si entre esos precedentes se encontraban algunos principios derivados de conceptos jurisprudenciales que le sirvieran de escudo protector contra esa intromisión de la prensa en su vida privada.

Allí surgió ese célebre opúsculo que, mal traducido, con una traducción literal que tampoco hace honor a nuestro idioma, se llama el derecho a privacidad. La palabra privacidad no existe en nuestro idioma, podría traducirse como derecho a intimidad, pero tendríamos que decir, de todas maneras, que la palabra intimidad tampoco abarca todo lo que el concepto jurídico desarrolló en nuestra Constitución, incluso antes de la Reforma de 1994.

Ocurre que hay algún fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de 1928, pero hay otros, como el muy citado de Ponzetti de Balbín, que se basa en las normas por entonces vigentes de la Constitución Nacional para resguardar este derecho, más allá de que a criterio de algunos constitucionalistas como es el caso de Carlos Nino, el apoyo de ese derecho de intimidad debió estar referido no al artículo 19, que citan los votos mayoritarios, sobre todo el de Petracchi, sino al artículo 18 que, al proteger la inviolabilidad de la correspondencia, el domicilio, etcétera, a primera vista presenta un sustento suficientemente amplio para la defensa de este derecho.

Pero más allá de estas glosas, quisiera decir que seríamos injustos con nuestro derecho patrio si olvidáramos que, en rigor, nosotros tenemos un artículo como el 19, de una belleza que se destaca dentro de un texto que se ha ca-

racterizado precisamente por la galanura de su lenguaje y que, además, se remonta a los orígenes de nuestro derecho patrio porque ya estuvo incluido en el Estatuto de 1815, luego en el Reglamento Provisorio de 1817, casi con el mismo texto, en la Constitución de 1819, en la de 1826 y luego pasó a la de 1853. Se trata de aquello de que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas —subrayo “reservadas”— a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Prácticamente la norma es inspiración de un sacerdote, el presbítero Antonio Sáenz.

Esa norma de nuestra Constitución tradicional, la de 1853/1860, presentaba ya en su época un resguardo mucho más preciso y acabado que el previsto en el derecho norteamericano, porque en aquellas latitudes del Norte tenían que recurrir no sólo a los precedentes del recordado asunto posterior a la boda de la hija de un senador, sino también a algunas normas de la Constitución de ese país que, en rigor, se referían de modo bastante indirecto al asunto.

No voy a abusar de la paciencia de mis colegas ni de la del señor presidente. De manera que intentaré no entrar en una conceptualización general sobre este derecho, que por otra parte ha sido materia de una muy prolija y destacable exposición por parte del miembro informante de la mayoría; el senador por La Rioja. Tan sólo agregaría que no sólo se trata del derecho al resguardo a quedarse a solas, como decía Cooley, al resguardo del honor o de la dignidad, sino también del relativo a algo fundamental: la identidad.

La identidad no está conformada exclusiva y naturalmente por los datos que figuran en los documentos que proporciona la Policía Federal u otros organismos sino también con lo que hacemos con nuestra vida, sentimientos, emociones, cultura; con lo que hacemos con nuestro proyecto de vida, incluso con nuestra capacidad de inventarnos. Si no recuerdo mal, Ortega y Gasset dice que el principal atributo de la verdadera persona es su capacidad para inventarse todos los días; es el mejor ejercicio de la libertad. También Ortega y Gasset dice: “Yo soy yo, y mis circunstancias”. Las circunstancias son todas estas cosas que nos pasan y que conforman también los bancos de datos.

Sería un abuso ciertamente si yo intentase en este momento repetir los argumentos que ya he dado quizá con demasiada extensión en la disidencia que está impresa —que abarca virtualmente todo el contenido del proyecto de ley—,

porque me parece que debo evitar repeticiones ociosas y porque doy por descontado que el tenor de esa disidencia, de la que han hecho mérito algunos señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, ha sido leída y objeto de reflexión por parte de todos mis colegas. De modo que no voy a insistir con este punto. Me remito a las consideraciones que he hecho. Adelanto desde ya que esas consideraciones no aparecen refutadas con los argumentos esgrimidos por la mayoría.

Simplemente me voy a limitar a señalar cuáles son los núcleos que fundan esta disidencia de mayor extensión sobre el proyecto impulsado por la mayoría.

El primer núcleo de disidencia se refiere a que tras sentar el proyecto la regla del consentimiento para el tratamiento de los datos, entendiéndose por tratamiento el acto de recabar los datos, de retransmitirlos, etcétera, esa regla del consentimiento resulta claramente desvirtuada, a nuestro criterio, debido a la amplitud de las excepciones, que son las contempladas en el artículo 5º, apartado 2, subapartados a), b) y c) del proyecto, en cuanto se refieren a datos accesibles al público. Cabría observar aquí que, por ejemplo, los datos contenidos en el Registro de la Propiedad Inmueble o en el Registro del Estado Civil son, por principio, accesibles al público y no por ello se va a autorizar la difusión de los datos contenidos en esos registros. Por lo tanto, en la norma debió hablarse de datos de acceso irrestricto a fin de que quede bien configurada la excepción.

También forman parte de las excepciones los datos que recaben los organismos del Estado en el ejercicio de sus funciones propias, lo cual es algo demasiado amplio aun con la ola privatizadora y el achicamiento del Estado. Además se contempla el caso de los datos personales que se puedan obtener en registros públicos, en donde se incluyen, por ejemplo, algunos datos que muchos pueden tener interés en que no se conozcan, como ser el número de teléfono a fin de no ser importunados demasiado a menudo.

El otro núcleo de disidencias se refiere a la regla sobre tratamiento de datos sensibles, que padece igual desvirtuación por la vía de una norma un tanto curiosa, que es la del artículo 6º, apartado c), en la cual, mediante la previsión de que se puedan recabar estos datos distinguiendo entre respuestas obligatorias y facultativas, y mediante la previsión también de que se pueda excepcionar el principio, según dice la ley por razones de interés general autorizadas por otra

ley, se está abriendo un campo de excepciones demasiado ancho y, por lo tanto, se está poniendo en severa duda la vigencia de la regla.

Lo mismo ocurre con la regla de la incesibilidad, salvo consentimiento, porque según la norma pertinente del artículo 12, y la remisión a las excepciones del artículo 5º, apartado 2, también la regla queda en serio cuestionamiento, y librada, además, a criterios discrecionales por parte no sólo de los responsables de los registros públicos sino también de los privados.

El otro núcleo de disidencias se refiere a la regla que fija el derecho de acceso del titular de los datos a los bancos en que estén registrados sus datos personales. Esta regla tiene una excepción de enorme extensión y es la que hemos criticado quizás con mayor énfasis, no sólo porque remite a los datos que la administración del caso o los organismos de seguridad decidan no dar —según el artículo— en función de razones de seguridad, defensa e interés de terceros, sino también porque, a través de estas excepciones, la norma deja abierta la posibilidad de que se niegue el acceso a tales datos ante la eventualidad de que ese suministro pudiera interferir con investigaciones en curso. Y porque, en definitiva, también el último apartado de estas excepciones —en el artículo 17— posiblemente debido a un defecto de redacción, pareciera que incluso limita el acceso cuando se está ejerciendo el derecho de defensa porque dice: "...sin perjuicio de las excepciones anteriores".

El otro núcleo de disidencias radica en la indeterminación legislativa de este órgano de contralor, que está reiteradamente aludido en el proyecto, lo cual es singularmente grave porque, si partimos de la base de que ese órgano de control es el encargado de ejercer la superintendencia sobre el regular funcionamiento tanto de los bancos de datos públicos como privados, y que por ende es el encargado de poner en acción un derecho individual y una garantía ahora hecha explícita —porque a mi criterio existía con anterioridad en la Constitución—, se acentúa el error de deferir la institución de ese órgano y la atribución de sus facultades y funciones precisas de control a una reglamentación ulterior del Poder Ejecutivo.

Esto también lo hemos sostenido con cierta amplitud. No nos parece prudente que la amplitud de un derecho o garantía constitucional resulte sujeta a eventuales restricciones a través de un órgano administrativo cuyas funciones e institución va a definir el Poder Ejecutivo.

El último núcleo de disidencias está constituido por los récaudos que se le imponen a la llamada acción de amparo especial o hábeas data, no sólo por el hecho bien señalado por el señor senador por Corrientes de que se exige la mención de un perjuicio o de qué modo los datos que no se dan o que se pretenden rectificar afectan los derechos de las personas que se suponen que están afectadas —es lo que surge del artículo 43—, sino también porque no queda claro qué es lo que en realidad puede hacer el juez llamado a entender en el amparo cuando el organismo de seguridad principalmente se niega a dar los datos aduciendo razones de seguridad. Esto va a ser materia de algunas ulteriores consideraciones, que voy a hacer en el tercero, último y breve capítulo de esta intervención, que pretendo sea lo más acotada posible.

Para salir un poco de la disidencia tan extensa y detallada, me parece que hay que parar mientes en la cuestión que subyace a todo este asunto de la garantía del hábeas data, es decir si tenemos realmente un derecho o no, ya que aquí he escuchado que hay que buscar equilibrio entre ese derecho y, por ejemplo, los intereses generales del Estado. Creo que eso es una heterodoxia constitucional porque hay que partir de la base de que los derechos son precisamente barreras y limitaciones levantadas para protección del individuo frente a los intereses del resto, de la mayoría y aun del propio Estado.

Si me disculpan, voy a incurrir en una lectura, a lo que no estoy habituado y para lo cual, además, tengo dificultades. Del 7 al 9 de junio del año pasado tuvo lugar el Primer Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la Información, organizado por la Presidencia de la Nación. Entre otros expositores, habló el doctor Santos Cifuentes, un reconocido especialista en el tema del derecho a la intimidad, la inviolabilidad de las personas y la autonomía individual, que son todos los valores comprometidos en este asunto.

En la página 35 de dicha publicación dice el doctor Cifuentes: Las constituciones se hacen porque es necesario proteger los derechos fundamentales. No son las constituciones las que crean, protegen, reconocen estos derechos fundamentales, sino que estos derechos fundamentales le dan base al carácter constitucional de estas normas. Insisto en la frase que dice: estos derechos fundamentales le dan base al carácter constitucional de estas normas.

Entonces, la ortodoxia constitucional, el respeto por la ideología liberal, explícita y no implícita en nuestra Constitución Nacional, exige que

retengamos este dato. El derecho individual, por definición, es una limitación y una barrera infranqueable frente a los intereses del Estado y de las mayorías. Incluso esa explicación tiene la procedencia del control judicial de constitucionalidad.

Dice Carlos Nino, en una obra que debe ser la última de envergadura que publicara, editada en 1992 y que se llama *Fundamentos de Derecho Constitucional*, página 481: La única justificación del Estado y de la coacción que él ejerce es la preservación y promoción de los derechos individuales. No hay otros valores que puedan ser invocados para restringir o suspender tales derechos. La misma noción de derechos individuales incluye —como se dijo— la de poner límites a la persecución de objetivos colectivos o consideraciones de bien común, por lo que invocar estas consideraciones para restringir los derechos implica claramente negar la función limitadora de los derechos.

Nino, que hace una crítica sólida, profunda y detallada de nuestra práctica constitucional —entendiendo por práctica constitucional lo que deciden los tribunales, aun los superiores que, dicho sea de paso, han cohonestado desde 1930 hasta aquí la negación del derecho, que es el gobierno de facto—, se refiere a algunos de los argumentos a los que se acude para restringir los derechos individuales.

Cuando se dice aquello de que no hay derechos absolutos, en realidad, se trata de una verdadera entelequia. ¿Qué significa "absolutos"? Lo que hay y lo único que debe tenerse en cuenta cuando se trata de dirimir una cuestión de esta naturaleza es si existen conflictos entre derechos, no conflictos entre un derecho e intereses, así sean de la mayoría.

Otro de los conceptos a los que se acude es que los derechos se tienen conforme a las leyes que los reglamentan. Eso ha servido más de una vez a ciertos tribunales demasiado deferentes con el poder político para aceptar que las reglamentaciones, en la realidad, desnaturalicen a los derechos. También se ha sido deferente para con el poder político cuando se ha acudido a la preeminencia presunta del poder de policía de los órganos políticos del Estado frente a los derechos individuales. Son todas, no diré algo tan fuerte como "corruptelas" sino, en todo caso, muestras de la deficiente práctica constitucional argentina.

Creo que más allá de la honestidad intelectual y del sincero deseo de instrumentar esta garantía, que descuento ha existido en quienes han

impulsado el proyecto y quienes lo apoyan, tal como está estructurado incurre en este olvido de la ortodoxia en materia de definición de los derechos individuales y, mucho más, de la garantía de un derecho individual, como es lo que está en juego.

No quiero abundar más en citas, salvo para sustentar algún punto específico que ha sido materia de cierto debate, incluso intenso, en el seno de la comisión —cuya labor, desde luego, reconozco, compartiendo los conceptos que se han expresado recientemente—. Y en esta apreciación que hacemos respecto de la vulneración o el cercenamiento del derecho por la vía de excepciones amplísimas —particularmente en cuanto a la reserva de datos de los órganos de seguridad o de inteligencia—, desde luego, no estoy solo.

Hay un artículo del profesor de la Universidad de Buenos Aires, constitucionalista Carlos Colautti, que se llama *Reflexiones preliminares sobre el hábeas data*, publicado en el diario "La Ley" del 4 de junio de este año, que dice categóricamente: Creo que en ningún caso quienes manejan los registros pueden negarse a suministrar los datos que solicita la persona a quienes éstos se refieren. Esto vale para los bancos de datos tanto públicos como privados.

Se trata de una cita conforme a su opinión, lo cual es cierto, porque también he consultado otro artículo publicado por Miguel Angel Ekmekdjian, que se llama "El hábeas data en la reforma constitucional", publicado en la revista "La Ley", 1995, Tomo E, página 946, que se refiere precisamente a que no es admisible que se invoquen razones de defensa nacional o de seguridad, así en abstracto, para fundar una excepción a la obligación de suministrar datos a quienes los requieren. Y dice también este autor que otro constitucionalista, que es el doctor Sagués, presenta alguna objeción razonable sobre este tema cuando dice que en materia de datos que puedan reservarse por razones de seguridad, de defensa, de orden público, etcétera, de todas maneras, debe haber en la negativa una arbitrariedad manifiesta, y que dicha arbitrariedad manifiesta puede ser remediada por el juez al que se convoca para el juzgamiento de la acción de amparo.

Me pregunto de qué manera el juez del caso va a estar en condiciones de verificar la razonabilidad o la irrazonabilidad de la negativa del órgano de seguridad a suministrar la información, si precisamente el órgano de información se va a escudar en la excepción legal, cuya amplitud ya

hemos visto, si se quiere, hasta con exceso. Simplemente el órgano de seguridad dirá que no puede suministrar el dato y el juez no tendrá la menor posibilidad de verificar si esa negativa es razonable porque quizá —ésta es una reflexión de Perogrullo— no contará con los datos que le permitan darse cuenta de si realmente está comprometida la seguridad o la defensa.

Precisamente Colautti, Ekmekdjian y otros autores, como es el caso de Altmarm y Molina Quiroga, en otro artículo publicado en "La Ley" del 14 de marzo de este año, se refieren específicamente al punto y dicen que este tipo de excepciones parecen no tener en cuenta nuestra experiencia reciente y además la proclividad casi invencible al secreto que tienen estos organismos de inteligencia, más allá de que sepamos desgraciadamente todos los argentinos que las equivocaciones de estos órganos más de una vez han tenido resultados trágicos y lamentables.

Por eso, y para terminar, señor presidente, señores senadores, el grado de mi disenso abarca un poco más que estas menciones particulares que están contenidas en el dictamen. Cuestiona toda una filosofía según la cual parece que los derechos individuales en definitiva fuesen concesiones del poder al individuo y no al revés; justamente la salvaguarda de los derechos individuales es la razón de ser del Estado y la razón de ser de la coacción que ejerce.

En esta cuestión, que es central y fundamental, radica el origen en rigor de esta disidencia que he venido planteando. Por razones que son fácilmente comprensibles, si se tiene en cuenta que la Cámara de Diputados ya aprobó una iniciativa y que hay un despacho en mayoría que además cuenta con la cantidad necesaria de voluntades para dar ejemplo muy claro de cuál será el resultado de la votación, no he considerado el caso de presentar un proyecto de mi autoría.

De todos modos, debo decir —porque estas cosas no deben quedar en aguas de borraja ni en indefiniciones— que en cualquier caso hubiere preferido un régimen legal muy escueto que se circunscribiera al ejercicio de la acción. Porque no tengo dudas de que el derecho y la garantía son plenamente operativos aun sin reglamentación. Además me parece que en lugar de pretender abarcar en una ley, por más que sea loable el intento, toda esta realidad tan compleja, tan cambiante, tan fluida y tan poco experimentada en nuestro país del poder de la informática y de la telemática, para afectarnos en nuestra "mismidad", era más prudente confiar

en la discreción y en la prudencia de los jueces y, sobre todo, no poner las barreras que se han colocado para que ni siquiera ellos estén en condiciones — como ya lo he dicho — respecto de los datos obrantes en organismos de seguridad para verificar si la negativa de acceso o rectificación realmente está fundada en razones de seguridad, de defensa o de intereses de terceros.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Renovador.

**Sr. Ulloa.** — Señor presidente: cada día más gente sabe más cosas de nosotros, y con el desarrollo de la informática esta información llega a límites a veces increíbles. De manera que, de alguna forma, nos sentimos a la intemperie ante tanta información que posee el Estado y los privados sobre nosotros.

(*Lee:*) “En tal sentido, el hábeas data, como nuevo instituto nacido en el derecho argentino a partir de la última reforma institucional, nos ofrece la posibilidad de garantizar derechos personalísimos frente a los nuevos avances tecnológicos que faciliten el manejo y circulación de la información.

En el derecho comparado, los Estados Unidos de América fueron sus precursores en 1966 al dictar el ‘Freedom of Information Act’, norma de carácter federal por la cual se estableció como principio que toda información en manos del Estado es por naturaleza del pueblo. Como consecuencia, el pueblo tiene derecho a conocer qué información tiene el Estado sobre uno.

Posteriormente, el ‘Privacy Act’ de diciembre de 1974, aumenta los derechos de los ciudadanos sobre los bancos de datos, incorporando el derecho de rectificación, de eliminación y de control de los datos a efectos de ser utilizados en los casos previstos para los fines contemplados.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2.450 del 19 de diciembre de 1968, invita al estudio de los problemas planteados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de los derechos del hombre y, en particular, el respeto de la vida privada de los individuos frente al progreso de las técnicas del registro.”

Como bien se ha dicho aquí, el artículo 19 de la Constitución, que tan sabiamente previó de alguna manera la privacidad de las personas, queda en cierta forma superado por la capacidad de penetración del manejo de la información a través de la informática.

En pocas palabras, puede concluirse que la irrupción y el auge de la computación en los

países desarrollados ha dado cabida constitucional al instituto del hábeas data.

Así, las primeras Constituciones que abordaron expresamente el problema generado por la aparición de la informática sobre los derechos fundamentales de las personas fueron las de España y Portugal.

En nuestro país, en 1986, la Subsecretaría de Informática y Desarrollo del Ministerio de Justicia de la Nación presentó un proyecto de ley de protección de datos personales, no mereciendo entonces tratamiento ni sanción legislativa.

En el ámbito provincial, el instituto en análisis fue regulado en varias Constituciones a partir del proceso constituyente pre y posreformista de 1983-1994. Así lo han previsto en sus textos las Constituciones de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Jujuy, Río Negro, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Salta — esta última, en lo que se refería a datos de información policial —; cada una de ellas, de distinta manera y con mayor o menor amplitud.

En todos los casos se concluye que el instituto del hábeas data, cuyo régimen y reglamentación estamos tratando, tiene por finalidad esencial garantizar y preservar la intimidad, honra y privacidad de las personas, derechos éstos que hacen a la esencia misma del hombre.

De tal manera, la norma a sancionar tiende a evitar que mediante el uso de la informática (y me refiero a la informática porque es lo que ha actualizado el problema) se pueda lesionar el honor y la intimidad de las personas.

También es cierto que no se necesita la informática para esto. Mientras estudiaba el problema no podía dejar de recordar lo que sucedió en la Alemania nazi, cuando tantos judíos fueron llevados a la muerte a través de las listas que existían en colegios, instituciones, sinagogas y que, en definitiva, terminaron en manos del Estado para condenar a tanta gente.

No existía entonces el hábeas data, pero tampoco se respetaban los derechos de las personas que, por cierto, no necesitan ser creados por las Constituciones sino que son propios de la naturaleza humana.

Creo que el proyecto en tratamiento cumple con buen criterio los objetivos planteados por el artículo 43 de la Constitución: acceder a la información, conocer su finalidad, rectificarla, actualizarla, suprimirla, asegurar su confidencialidad.

Considero que este proyecto es perfectible y no puedo dejar de compartir la preocupación ex-

presada en este recinto con respecto a las excepciones contenidas en el artículo 39, que permite a los que tienen banco de datos a oponerse al requerimiento de los jueces. Esto no deja de ser preocupante.

Con todo, estimo que en esta sesión estamos realizando un avance importante al legislar sobre este derecho previsto en la Constitución.

En conclusión y adelantando mi voto favorable en general al proyecto en tratamiento, cabe decir que al legislar sobre el instituto del hábeas data estamos —en concordancia con el precepto constitucional— reglamentando la adecuada relación entre una justa protección de los derechos, principalmente a la intimidad, y la posibilidad del uso de los sistemas de automatización.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: deseo formular algunas breves consideraciones sobre el instituto que estamos tratando de reglamentar y que responde, como bien dijo Alvin Toffler, a uno de los reclamos de esta generación que prácticamente viene a ser la última de algo así como una edad que se fue.

Seguramente, cuando los que vengan escriban la historia de la humanidad, además de las épocas clásicas que nos enseñaron nuestros maestros, después de la Edad Contemporánea, hablaremos de la Era o Edad Tecnológica.

Es difícil ser contemporáneos y hablar de nuevos tiempos; pero es tan espectacular la evolución, el cambio y el progreso que se han dado en el área de la tecnología que quizá como la estamos viviendo no lo alcanzamos a apreciar debidamente. Basta decir que el conocimiento se duplica cada dos años.

Hablar del conocimiento es hablar del poder; hablar del poder es hablar del saber y hablar del saber es hablar de estas nuevas formas de dominación que existen en el mundo.

Históricamente el poder y el saber estaban concentrados en el Estado. El secreto de Estado; el manejo de la información que tenían los estados hacía que aumentara el poder del Estado sobre los individuos.

Hoy los poderes están compartidos. Y quizás los poderes del Estado no serán los mayores de los tiempos que vivimos y que vendrán. Los poderes particulares avanzan sobre los del Estado. Y con el acompañamiento y el desarrollo de la informática nos encontramos en un mundo impensado hasta hace pocos años incluso por noso-

tros mismos; ni pensar por nuestros padres. Nosotros somos mucho más parecidos a nuestros padres —y nuestros padres a sus abuelos— que a nuestros hijos. Y en mayor magnitud sucederá lo mismo con los hijos de nuestros hijos.

Este cambio es espectacular, y tenemos que adecuarlo con institutos legislativos que permitan, en esta lucha permanente del individuo frente al poder, resguardar a la parte más débil, que es el individuo.

Hace pocos días estaba analizando el fantástico incremento del desarrollo de las AFJP en Chile. En pocos años el poder de concentración de capital de las AFJP en Chile equivale al 40 por ciento del producto bruto interno de dicho país. Y está previsto que para el 2005, es decir dentro de muy pocos años, los capitales que concentren las AFJP estarán en el orden del 80 al 90 por ciento del producto bruto de Chile.

Esto nos hace pensar que seguramente este proceso se va a repetir en la Argentina, donde además las AFJP, que ya tienen concentrados 5 mil millones de dólares de recaudación en apenas dos años, van a incrementar sus recaudaciones a través de las ART. Y si a esto le agregamos el hecho de que en su mayoría los dueños de las AFJP son los dueños de los principales bancos, observaremos que el poder financiero es tremendo en su incremento. Y yo diría que el poder del Estado cada vez se empequeñece más frente al poder de los particulares.

Realmente esto que hoy estamos tratando ha sido tema de preocupación prácticamente en todas las legislaciones más avanzadas del mundo y, como bien se dijo acá, en las últimas constituciones provinciales. Y se ha puesto empeño en tratar de limitar esta enorme concentración de poder que se está realizando y concretando para los tiempos que vienen.

Como decimos siempre, “saber fue poder”. Y este inmenso poder que deviene de la informática, sumado a la enorme concentración del poder financiero, hace que quizás con bastante pesimismo tengamos que analizar incluso la función nuestra —de los que nos decimos representantes del pueblo—, de los partidos políticos y de las instituciones, que no están directamente vinculados con estos grandes sectores de concentración de poder.

Porque así como el individuo está cada vez más desprotegido frente al poder económico y a la concentración de la información, también cada vez será mayor la posibilidad que tengan estos representantes del poder financiero e informático de poner sus legisladores y su gobierno.



Y si a esto le agregamos el poder de los multi-medios, nos vamos a encontrar con una gran concentración de poder. Y seríamos absolutamente irresponsables si observando, previendo y conviviendo con esa situación no hiciéramos nada para tratar de resguardar, al menos dentro de nuestras posibilidades, los derechos de los individuos.

Por ello, me parece que fue un acierto del constituyente de 1994 incorporar el derecho de hábeas data en el tercer párrafo del artículo 43. Así como hábeas corpus es que tengas tu cuerpo, hábeas data es que tengas tus datos, que sepas qué se sabe de vos y de cada uno de nosotros, que se establezcan limitaciones a esta transferencia y a esta manipulación del poder que se puede hacer a través de la informática.

Aquí se ha hablado de los derechos protegidos por estos institutos. Somos conscientes de que a veces, a través del mal uso de la informática y del manejo de los datos que en ella se pueden llegar a manipular, puede arribarse a algo así como a la muerte civil. Hace pocos meses estuvo de moda aquí la película *La Red*, en la que su protagonista, Sandra Bullock, era una persona que trabajaba en el manejo de datos. Precisamente, al descubrir una red informática delictual observó que su propio registro había sido vaciado y desnaturalizado. Entonces, cuando quiso regresar a los Estados Unidos —cabe aclarar que la película era de origen norteamericano—, se encontró con que no podía ingresar porque en los registros de datos de migraciones figuraba como delincuente, corrupta y prostituta. Era su muerte civil. Finalmente, tuvo que iniciar una carrera desesperada para tratar de revertir esa situación.

Muchas veces, a través de estos datos —que pueden parecer un poco triviales—, encontramos la explicación cabal de la gravedad de ciertos temas de los tiempos que vivimos y nos enfrentamos a la necesidad de regularlos. Más aún, llegamos a la conclusión de que en estos temas es razonable exagerar, si es necesario, a favor del individuo.

Ayer observé las propuestas de modificaciones al artículo 26, formuladas por distintas entidades financieras. Seguramente, como toda propuesta, tienen su cuota de razonabilidad. Ante la argumentación de que una limitación en el registro de datos crediticios vinculados con el sector financiero podría llegar a producir un encarecimiento del crédito y frente al otro valor jurídico en juego, que es la defensa de la intimidad de los

más débiles, ni lo pienso, ni lo pensamos: aun a riesgo de que haya que pagar un punto más de interés debe prevalecer el interés de los derechos de cada persona sobre eventuales, no probados y quizás dudosos argumentos de intereses patrimoniales.

Por ello, considero que es un acierto haber incorporado en este instituto el derecho de recabar no sólo los datos públicos sino también los de registros privados porque, como se decía hace un momento, es muy probable que dentro de poco tiempo estos últimos sean los principales.

Asimismo, considero que también es razonable la legislación que se estableció a través del recurso de amparo. Fíjense que uno de los temas donde mayormente no ha habido grandes fisuras en la legislación comparada ha sido la restricción a los datos en los registros que existan en organismos públicos por razones de defensa o de seguridad. Pareciera ser que eso debería ser el punto central: el individuo frente al Estado, queriendo saber qué sabe el Estado de cada uno de nosotros. Pero ésta no ha sido la principal preocupación en el derecho comparado, quizás, porque se estaban dando cuenta de que los principales registros que en el mundo que se viene pueden limitar los derechos del individuo son los registros particulares y no los públicos, precisamente por este corrimiento que hay del sector público al privado. De todos modos, creemos que este tema no está bien resuelto en el despacho de la mayoría.

En el artículo 26 del proyecto que se presenta en disidencia se establecen mecanismos que limiten la denegatoria de los organismos que almacenan datos cuando ella está motivada en razones de seguridad o de defensa. No basta la denegatoria; tiene que ser razonada y razonable, tiene que basarse en la posibilidad de que con esta información se esté poniendo en peligro real —no general— la seguridad o la defensa. También procede en el caso de que se entorpezca una investigación concreta, real —no genérica— y que comprometa, realmente, la seguridad o la defensa.

Por eso, la redacción del artículo 26 lo establece claramente: "1. Los titulares de los ficheros de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y organismos de inteligencia, podrán denegar el acceso [aceptamos la posibilidad de la denegación], la rectificación y la cancelación de los datos de carácter personal obrantes en los mismos, en el supuesto en que tales acciones puedan ocasionar

un daño significativo [no cualquier daño] a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado.

"No obstante, deberán en cualquier caso permitir el acceso: a) Al particular que estuviera sujeto a experimentar restricciones actuales en sus derechos..."

Si esa información implica restricciones inmediatas a sus derechos, aquellos titulares de registros públicos deben, aunque se estén afectando la seguridad y la defensa, salvo que sea una cuestión inmediata, permitir acceder a los datos con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso. Y se agrega que deberá, no obstante, brindarse pleno acceso a los registros en cuestión, en la oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa. Toda resolución de denegatoria debe ser fundada y notificada al afectado. El afectado a quien en forma arbitraria se denegare el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, podrá interponer, dentro del décimo día de notificada la denegatoria, la acción de amparo prevista por la presente ley. Es decir que, aun en estos casos, creemos que se ha legislado con mentalidad de tiempo pasado.

Queremos que en esta vieja lucha entre el individuo y el Estado, salvo razones especiales o excepcionales, se legisle para la parte más débil; es decir, el individuo.

Otro tema al cual quiero referirme brevemente, por cuestiones de horario y porque se han dado la mayor parte de los fundamentos que uno podría llegar a señalar a través de buenas exposiciones que hemos escuchado, es el vinculado al texto que se refiere a la protección de las fuentes de información del periodismo.

Dice Germán Bidart Campos que "el derecho al silencio o a no expresarse necesita vincularse a un tema muy importante, cual es el secreto profesional —del sacerdote, del abogado, del médico, [del periodista]—. La relación de confidencialidad entre el profesional y el cliente exige que con respecto a ambos se respete suficiente y razonablemente lo que el primero conoce del segundo dentro de aquella relación como una forma del derecho al secreto, que hace parte no sólo de la libertad de expresión —en su faz negativa de derecho a no expresarse—, sino también del derecho a la intimidad o privacidad; el derecho al silencio también resguarda razonablemente, en relación con el derecho a la información, el secreto o la reserva sobre las fuentes de información periodísticas".

Gregorio Badeni nos dice que en la relación estrecha que media entre el secreto profesional y la libertad de expresión debe resguardarse el derecho del periodista. En efecto; el derecho del periodista no es lo mismo que el derecho de la empresa periodística. El periodista tiene derecho a reservar las fuentes frente a su empleador, quien no puede exigir al periodista que revele el origen de esas fuentes, porque estaría desnaturalizando este precepto constitucional. Me refiero al derecho que tiene el periodista frente a su empleador, a los terceros y las autoridades públicas o judiciales, pero también al deber —y quiero recalcar esto— que tiene el periodista de no revelar públicamente la fuente de la información recibida en forma confidencial.

Todo derecho trae aparejado, como contraparte, un deber. Cuando un periodista recibe en forma confidencial una información tiene el deber, correlativo al derecho de reserva de las fuentes, de no revelar esa información confidencial.

Ahí estamos encontrando el justo medio en la regulación de este instituto que ha sido incorporado como artículo 43 de la Constitución Nacional en la última reforma de 1994.

El secreto de la fuente de información periodística cede ante causas penales en dos casos: cuando la información haya sido obtenida por medios ilegales por parte del periodista o cuando la información no haya sido obtenida en el ejercicio auténtico de la profesión. Si alguno de estos supuestos se demostrara, frente a un requerimiento judicial cedería el derecho a la reserva de las fuentes.

Finalmente, y sin el ánimo de reiterar lo que ya se ha señalado con respecto a la reglamentación de estos institutos, voy a referirme solamente a la autoridad de aplicación. El órgano de control no puede ser el mismo Poder Ejecutivo. Desde mi punto de vista, la sana lógica rechaza el hecho de que el controlado y el controlante pertenezcan al mismo poder. La mayor parte de los registros públicos —si no todos— dependen del Poder Ejecutivo: dependen de los servicios de inteligencia, que dependen del Ejecutivo; o de la Policía Federal, que depende del Ejecutivo; o de la DGI, que depende del Ejecutivo; en fin, dependen de los distintos organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Y me parece que no es razonable que sea el propio Poder Ejecutivo el que actúe como órgano de control.

En ese sentido; coincido con la sanción unánime de la Cámara de Diputados, que estableció

que el órgano de control sea el ombudsman, que funciona en esferas del Poder Legislativo. Si bien en la ley que reglamentó el instituto no se encuentra asignada esta función —como no podía ser de otra manera—, por el principio de que el controlante no puede estar en la esfera del controlado, y toda vez que no tenemos necesidad ni es conveniente que se sigan creando nuevas instituciones burocráticas, cuando precisamente la tónica que nos reclama la gente es que achiquemos los aparatos burocráticos y que apliquemos mejor los que ya tenemos, no nos parece razonable que, sujeto a la reglamentación, se cree un órgano de control en esferas del Poder Ejecutivo.

Con estas pequeñas observaciones quiero poner de manifiesto la satisfacción por la creación del instituto que hoy vamos a sancionar, aunque no coincida plenamente con la reglamentación.

Oportunamente hemos señalado que tenemos disidencias parciales, pero creemos que es un paso adelante, a tono con las legislaciones que en este mundo nuevo se están planteando y que nosotros incorporamos en la sanción unánime de este instituto que realizó la Convención Constituyente en 1994.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa, de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: ante las exposiciones medulosas de los señores senadores de nuestra bancada, el senador López, miembro informante, el senador Villarroel y el senador Berhongaray, tan sólo voy a hacer algunas consideraciones y a poner énfasis en algunos aspectos que son fundamentales, a los efectos de ser lo más breve posible. En este sentido, tengo que preguntarle al miembro informante por la mayoría cuáles fueron los motivos que hicieron que se formulara este despacho y no se atuvieran a la sanción dictada por la Cámara de Diputados, sanción que respeta la Constitución y que podía ser perfectamente apoyada por la Cámara de Senadores, tal vez con algunas pequeñas modificaciones, pero, evidentemente, sin adolecer de los gravísimos defectos que tiene el despacho de la mayoría. Y digo “gravísimos defectos” porque, como bien lo dijeron los senadores López y Berhongaray cuando se refirieron a ese órgano de control, a él se le dieron facultades exorbitantes e inconstitucionales, ya que ese órgano tiene a su cargo la inscripción de los registros, el control de todos los bancos de datos y puede exigir —hasta ese extremo llega— los programas y otros elementos, lo que es sumamente grave. A

este punto me voy a referir luego en forma más detallada. Se le dieron facultades para juzgar y sancionar, para querellar, violando las facultades del ministerio público en lo que se refiere a la acción pública y violando las facultades del perjudicado, porque el querellante particular, si ha sido perjudicado, es el que tiene el derecho a ser querellante y bajo ningún punto de vista a este órgano de control se lo puede transformar en parte querellante.

—Se llama para votar.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: voy a suspender mi exposición a los efectos de esperar y saber qué está sucediendo.

**Sr. Presidente.** — ¿En qué sentido, señor senador?

**Sr. Maglietti.** — ¿Debo esperar, o prosigo con la exposición?

**Sr. Presidente.** — Por supuesto. Estoy llamando para votar porque usted es el último orador, y aunque todavía tiene mucho tiempo, quiero que cuando usted termine tengamos a todos los senadores aquí sentados. Continúe.

**Sr. Maglietti.** — Entonces, tenemos que este proyecto de la mayoría es peligroso para la democracia. Porque este órgano de control —como dije— se transforma en un órgano todopoderoso que tiene facultades legislativas, ya que en el artículo 29 se lo faculta para dictar normas y reglamentaciones, además de las facultades que se otorga al Poder Ejecutivo —por el artículo 43— de reglamentar la presente ley. Además, el proyecto viola el artículo 76 de la Constitución, porque ese artículo prohíbe la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y viola el artículo 99, inciso 3º de la Constitución, que dice que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad. Por otra parte, se le han dado facultades que implican controlar, juzgar y aplicar sanciones en el artículo 31. Deniega en el artículo 32, inciso 2, la inscripción de los solicitantes sin ningún recurso ante la Justicia; aplica en el artículo 31 apercibimientos, suspensiones y multas hasta 100.000 pesos. Además, puede realizar clausuras o cancelación de autorizaciones de archivos. Es decir, como bien se ha dicho aquí, es juez y parte, sin poder el afectado recurrir ante la Justicia. Ello constituye una flagrante violación del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Quiere decir entonces que este dictamen en mayoría implica de acuerdo con el artículo 29, inciso c), la concentración de todos los registros y bancos de datos que haya en el país, sean pú-

blicos o privados: por ejemplo los datos contenidos en los padrones electorales, la información de los registros civiles, de la propiedad inmobiliaria, de la Dirección General Impositiva, del Registro del Automotor, de la Policía Federal y de las policías provinciales, de los colegios y universidades, sindicatos, obras sociales, clubes, servicios médicos, compañías de seguros, censos, etcétera. La posibilidad de interconectar y cruzar estos datos le permitirá tener la información completa de una persona.

Esa práctica no está admitida en ninguna nación democrática del mundo. Según lo previsto en este despacho, vamos a tener el privilegio de ser la primera nación del mundo que tendrá un organismo de control con facultades para concentrar todos los bancos de datos.

Quiero traer un ejemplo. En los Estados Unidos, cuando se pretendió unificar el número de seguridad social con el de la licencia de conducir se produjo un verdadero clamor popular que abortó la iniciativa, porque se consideró que la concentración de datos de una persona — como bien lo dijo el senador Berhongaray en su exposición — implicaba un serio riesgo para la democracia. Ese aspecto no se ha tenido en cuenta en la iniciativa en consideración, porque si se lee con detenimiento el dictamen de la mayoría, como bien lo explicó el senador López, se crea un superórgano que es un verdadero peligro para el ciudadano, porque se puede invadir la privacidad, arrasar con los derechos personalísimos de la Constitución y posibilitar los abusos del Poder Ejecutivo en el caso de que ese poder quiera hacer uso de esos bancos de datos. Hay que tener en cuenta que se trata de bancos de datos que cada vez se van perfeccionando más, dado el avance de la tecnología.

De esa manera, el Poder Ejecutivo y los órganos interesados pueden tener una radiografía total de una persona. Podrán conocer su nacionalidad, sexo, estado civil, situación económica y financiera, religión, inclinaciones sexuales, familia, costumbres, ingresos, necesidades, dificultades, etcétera. Podrán conocer incluso las intimidades de las personas. Esa facultad puede ser utilizada para presionar a las personas y chantajearlas. O sea, puede ser usada en un esquema de dominación, aunque algunos puedan decir que tal vez estemos exagerando.

Pero fíjense lo que dice "La Ley" en un trabajo sobre el hábeas data en la reforma de la Constitución escrito por el doctor Miguel Angel Ekmekdjian: Estos datos, de acuerdo con la nueva tecnología informática, pueden ser interconectados y cruzados, con lo que se tiene un

total perfil de la persona buscada, invadiendo su ámbito de privacidad, algo así como una radiografía total que nos acerca a la sociedad asfixiante descrita magistralmente por Orwell en su novela 1984.

No lo digo yo, señor presidente; lo dice una revista autorizada. Fíjese entonces la gravedad que tiene este proyecto de ley, que va a permitir la concentración de todos los bancos de datos y registros del país y que, evidentemente, constituye un hecho antidemocrático. Es un hecho que los señores senadores deben analizar con detenimiento porque, lógicamente, estamos aún a tiempo de subsanar este problema, introduciendo las modificaciones necesarias o ajustándonos a la sanción de la Cámara de Diputados, en la que se establece un órgano de aplicación autónomo, cual es el Defensor del Pueblo, además de la reglamentación que debe ser efectuada en el ámbito del Poder Legislativo.

En el artículo 31 del proyecto que estamos considerando se aplican sanciones tales como suspensión, multa, clausura, cancelación y negación de inscripción. Me pregunto en qué casos, señor presidente, porque la ley no lo dice. ¿Quién lo va a decir? ¿La reglamentación? ¿La que dictará el Poder Ejecutivo conforme al artículo 43 o la que dictará el órgano de control, de acuerdo con el artículo 29?

Pienso — y creo que lo mismo pensarán todos los señores senadores — que es la ley la que debe fijar esos puntos. No podemos dejarlos librados a la reglamentación porque se estarían violando los artículos 76 y 99, inciso 3, de la Constitución, como dije anteriormente, además de los artículos 11 y 12 del Pacto de San José de Costa Rica.

Es indudable que el despacho en mayoría se ha transformado, también, en un proyecto de modificación al Código Penal. Y creo que en un proyecto de esta naturaleza no se pueden introducir, en forma apresurada, modificaciones al Código Penal porque, evidentemente, se cometen gravísimos errores, como los que se cometieron en otros aspectos de este despacho en mayoría.

Si hacemos un análisis rápido podremos ver que se modifica el Código Penal a través de la creación de una nueva figura delictiva dentro del Título II de dicho ordenamiento, relativo a los delitos contra el honor, en el cual están contenidos los delitos de calumnia e injuria. Incurrir en el delito creado por el dictamen de la mayoría quien insérte, o haga insertar maliciosamente, datos falsos en un archivo, artículo 32, que

agrega al Código Penal el artículo 117 bis, incisos 1 y 2.

En consecuencia, si el hecho constituye un delito, ya está legislado a través de las figuras de calumnia e injuria. Y si tal conducta no encuadra dentro de ninguno de estos dos delitos, es decir, si esos datos insertados son inofensivos, no existe delito. Me pregunto entonces cuál es la razón para crear esta nueva figura delictiva, que no tiene ningún asidero jurídico.

Esta norma debe ser eliminada, al igual que el artículo 117 bis, inciso 3, que aumenta la pena cuando el hecho deriva en un perjuicio personal. En efecto, esto ya se encuentra legislado, porque cuando existe delito de calumnia e injuria, el afectado puede pedir la indemnización del perjuicio provocado de acuerdo con el artículo 29 del Código Penal; y si no existen tales delitos, también puede pedir la indemnización correspondiente cuando se ha provocado un perjuicio por aplicación de la norma del artículo 1.071 bis del Código Civil. Dicha norma defiende los derechos individuales al establecer: "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación".

**Sr. Presidente.** — ¿Terminó, señor senador?

**Sr. Maglietti.** — No, señor presidente; estoy escuchando las conversaciones de los señores senadores justicialistas.

**Sr. Cafiero.** — Y radicales.

**Sr. Presidente.** — No sólo justicialistas.

Pido a todos los señores senadores que escuchan al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** — Además, en el proyecto de la mayoría se fijan excepciones, que, como bien se ha dicho aquí, son peligrosas porque implican negar el hábeas data establecido en el artículo 43 de la Constitución.

Precisamente, el hábeas data tiene como fin terminar con los abusos del poder y con el manejo irregular de información sobre personas que siempre hace el Estado, so pretexto de pro-

tección de la defensa, el orden y la seguridad, fundamentos con los cuales generalmente se niegan los derechos consagrados en el artículo 43.

El senador Villarroel hizo una exposición bien fundada de este aspecto, de manera que no voy a insistir al respecto. Sólo diré que considero que todas estas excepciones tendrían que ser derogadas porque significan un desconocimiento del hábeas data.

Por otra parte, quiero traer a colación una frase de un artículo que escribí en "La Ley" el doctor Miguel Angel Ekmekdjian con fecha 15 de noviembre de 1995. Dice lo siguiente: Este instrumento tiende a proteger al individuo contra calificaciones sospechosas incluidas en registros, especialmente estatales, cuando también pueden serlo privados, que sin darle derecho de contradecirlas pueden llegar a perjudicarlo de cualquier modo, por ejemplo, las famosas listas negras, tan populares hace unos años en el país.

De la misma manera, pienso que el hecho de que se especifique que se pueden plantear los pedidos de informes en un lapso no menor de seis meses también limita el derecho constitucional.

Quiero leer palabras de Alberdi, porque desgraciadamente, so pretexto de reglamentar un derecho constitucional, con el proyecto de la mayoría lo estamos deformando, modificando y, en definitiva, negando. En las "Bases", página 247 de la edición que tengo aquí, Alberdi decía lo siguiente: No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades las anule y falsee con disposiciones reglamentarias.

¡Qué sabio era Alberdi, señor presidente! Prácticamente, estaba pronosticando lo que nos iba a pasar a los argentinos, es decir, que mediante el pretexto de reglamentar derechos constitucionales los estamos negando y desconociendo. Eso es lo que pasa con el dictamen de la mayoría que no es un proyecto de hábeas data sino una reglamentación de los archivos o bancos de datos y se están negando y desconociendo derechos constitucionales, como consecuencia de lo cual no debe ser aprobado. Hay que darle preferencia, sin lugar a dudas, a la sanción de la Cámara de Diputados, que también, más que reglamentar el hábeas data reglamenta los bancos de datos, pero se ajusta a la Constitución.

Esa sanción de la Cámara de Diputados puede tener algunos párrafos para ser corregidos, pero son de menor importancia.

El proyecto incluye en el artículo 28 un organismo de inscripción, que es el Registro General de Protección de Datos, que está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Sabiamente, la iniciativa de la Cámara de Diputados establece en el artículo 38 que el órgano de aplicación será el Defensor del Pueblo. Es decir que el órgano de aplicación sale de las esferas del Poder Ejecutivo y pasa a un órgano que es autónomo y que constituye una garantía ya que es el encargado de defender los derechos de las personas.

Por lo tanto, la sanción de la Cámara de Diputados establece sabiamente que el órgano de control y de aplicación es el Defensor del Pueblo. De esa manera también se cumple con lo que expresara el señor senador Berhongaray: que no debemos aumentar la burocracia sino tratar de disminuirla.

Por otra parte, lo más lógico es que los órganos adecuados para aplicar esta ley sean autónomos. Bajo ningún punto de vista podemos tener un órgano de control dentro del ámbito del Poder Ejecutivo al que, al mismo tiempo, se dan atribuciones y facultades que son violatorias de la Constitución, como se dijera en este recinto.

Para terminar, la sanción de la Cámara de Diputados en el artículo 38 establece que la reglamentación va a ser dictada por la comisión bicameral. Es decir que queda dentro del ámbito del Poder Legislativo. Me pregunto qué motivos pudieron existir como para no apoyar esta iniciativa de Diputados, que se ajusta a la Constitución. Por otra parte, qué motivos pudieron existir para elaborar un proyecto como el de la mayoría, al que no podría haberse hecho más inconstitucional aunque uno lo hubiera querido. No hay artículo sobre garantías personales que no se viole con este proyecto.

Quiero decir a los señores senadores de la mayoría que los diputados de la Nación han legislado con fundamentos claros y han aplicado la Constitución como corresponde. Los senadores debemos seguir esa línea, que es la correcta. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es aprobar la sanción de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Es para una intervención muy breve, señor presidente.

En primer lugar, quiero repetir que en el género "amparo", el hábeas data es una de las especies que protege el derecho a la intimidad.

Además, los artículos 18 y 19 de la Constitución encuentran en el hábeas data uno de los correlatos más importantes para el funcionamiento de la democracia.

Haber llegado a madurar este instituto y a introducirlo en la Constitución y a tratar hoy un proyecto que, prácticamente, es el resultado del consenso de los sectores políticos, es un símbolo y un signo de la madurez de los argentinos, que pasamos por momentos muy difíciles y en otras épocas estuvimos en listas más o menos negras y supimos de las persecuciones y de los datos que no controlábamos. Cualquier servicio de información —público, privado, policial o parapolicial— tenía datos que, de alguna manera, no sólo nos hacían sentir inseguros y perseguidos sino que creaban un sentimiento de indefensión, que creo que con este proyecto corregimos.

Sin embargo, tengo algunas observaciones que realizar con respecto a esta iniciativa.

El proyecto de mi autoría debe haber sido el primero que ingresó en este Senado; no sé si en el Congreso. En aquella oportunidad me animaba, y me anima, la idea de que el hábeas data se debía inscribir en los regímenes procedimentales de la Nación y en los de las provincias en forma separada. Por eso aspiraba a que el hábeas data se contemplara en una ley especial, que solamente regulara este tema y no una universalidad de datos o de protección de derechos personalísimos, como se encara en este proyecto.

En este proyecto, un solo capítulo, el VII, se ocupa de esta cuestión, que en el ámbito de las provincias es competencia de ellas, y en la Nación, de la Capital Federal. Este asunto, que sí es un tema nacional, debió haber sido incluido en otra ley específica y mantener el hábeas data en una ley distinta. Cuando elaboré mi primer proyecto, mi intención era separar las competencias que, en este caso, están reguladas de distinta forma: en una, la vinculada a los códigos de fondo de la Nación y en otra, las facultades reservadas a las provincias. En la Nación es una cuestión casi procesal, que de alguna manera establece el mecanismo en que cada ciudadano ejercita su derecho a conocer los datos que sobre su persona tienen los registros públicos y privados.

Por eso insisto en que tal vez la metodología elegida, cuando se haga un análisis entre los tratadistas de lo que eligió Diputados y hoy elige el Senado, quizá no sea la que la mejor técnica legislativa aconseje. Tal vez se debió legislar de otra forma.

No obstante estas observaciones que señalo, porque fueron el fundamento de mi proyecto y

las repito aquí, en lo demás, comparto los fundamentos de fondo que se han esgrimido para la aprobación de este instituto.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — En consideración en particular.

— Se enuncia el artículo 1º.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — ¿Los miembros informantes de la mayoría van a ser los señores senadores Branda y Yoma? Les pido que identifiquen si los artículos a los que se va a referir la comisión son los que figuran en esta lista que obra en Presidencia.

**Sr. Yoma.** — Son esos artículos, señor presidente, más otro al que ha hecho referencia la señora senadora Fernández Meijide, que según tengo entendido es el número 33.

**Sr. Presidente.** — Entonces, se va a conceder el uso de la palabra al presidente de la comisión con respecto a este listado, con excepción de la solicitud efectuada por el señor senador por Formosa del Partido Justicialista, con respecto al artículo 1º.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: quisiera introducir un agregado al artículo 1º, para su mejor entendimiento. Donde dice "asentados" debería agregarse "o que se asienten" y continuar con "en archivos, registros, bancos de datos", etcétera. Ello es así porque pareciera que esta ley tendrá vigencia sobre los datos asentados y no en el futuro sobre los que se van a asentar. Por eso quiero que se introduzca la frase "o que se asienten".

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: la redacción utilizada en el artículo 1º es atemporal; no reconoce o distingue entre datos asentados actualmente o en el futuro. De todos modos vale...

**Sr. Presidente.** — Como interpretación legítima.

**Sr. Yoma.** — ...como interpretación legítima; efectivamente.

**Sr. Presidente.** — Con esa observación, en consideración el artículo 1º. Se necesitan treinta y siete votos por la afirmativa. Se va a votar. Hay treinta y cinco votos...

Si los señores senadores se sirven levantar claramente la mano, podremos registrar el resultado de la votación.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 1º. Se registraron cinco votos negativos de senadores radicales y treinta y siete votos por la afirmativa.

— Se enuncia el artículo 2º.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: conforme a lo que adelanté en mi exposición, propongo agregar en el artículo 2º, a la definición "Archivo, registro, base o banco de datos"; un párrafo que diga: "A los fines de esta ley se excluyen aquellos pertenecientes a personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística por cualquier medio de comunicación social. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes ni pretender que las mismas sean reveladas".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** — Solicito a los señores senadores se sirvan ocupar sus bancas y que, cuando se vote, lo hagan claramente, con las manos levantadas, porque estamos considerando una norma que requiere número *clausus*.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: el espíritu y la letra de la inquietud planteada por el señor senador por Corrientes va a ser contemplada en el tratamiento del artículo 39 de este proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: dado que se hizo una enumeración taxativa en el segundo punto del artículo 2º, es decir, datos sensibles, propongo a la comisión agregar luego de "... a la salud o a la vida sexual" la expresión "y similares".

La idea es que el concepto quede *in extenso* y no limitado a lo que se ha enumerado allí.

**Sr. Presidente.** — ¿Sería en el acápite "datos sensibles"?

**Sra. Fernández Meijide.** — En datos sensibles.

Dice: "Datos sensibles: son los que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual". Yo propongo agregar la expresión "y similares".

Cuando se realiza una enumeración así, queda un espacio que no se sabe qué puede incluir. La idea es cubrir todas las posibilidades.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: la intención de la señora senadora es atendible. La idea es que la enumeración de los datos sensibles no sea taxativa.

Lo que no me gusta es la expresión "y similares". No creo que signifique lo que la señora senadora quiere plantear.

Considero que habría que buscar otro término. El espíritu de que la enumeración no sea taxativa es bueno.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: por su intermedio, solicito sugerencias a mi colega el senador Villarroel, que suele tener buenas ideas...

**Sr. Villarroel.** — En este momento no se me ocurre nada. (*Risas.*)

**Sra. Fernández Meijide.** — Vamos a seguir pensando sobre esta cuestión.

**Sr. Presidente.** — Señores senadores: con que sea interpretación legítima que este artículo no implica una enumeración taxativa sino que es ejemplificativo, estaríamos cubriendo la inquietud de la señora senadora de la mano del juez que actúe en la causa.

Porque obviamente el sentido de que no sea taxativa queda claro en la opinión de los señores senadores al momento de votar esta norma que requiere, como he dicho, de un número específico.

Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

**Sr. Yoma.** — Creo que con la aclaración de la Presidencia queda contemplado cuál es el espíritu de la sanción.

De cualquier modo, si encontramos alguna expresión que no haga demasiado extenso el artículo y que pueda comprender lo que estamos hablando, la incluiremos.

Pero considero que con la aclaración de la Presidencia queda claro el espíritu de la norma.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja, que esperamos nos ilumine.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: en todo caso, yo diría "u otros de similar naturaleza".

Pero considero que con el criterio interpretativo de que la enumeración no es taxativa, es suficiente.

**Sr. Presidente.** — Así constará en el Diario de Sesiones.

Existe la interpretación auténtica en todos los fallos judiciales sobre artículos de estas características.

Se va a votar el artículo 2°.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Deseo proponer una corrección meramente formal. En la parte que dice "Titular de los datos", al final del párrafo, se expresa: "...cuyos datos sean objeto del tratamiento de que trata la presente ley." Propongo que diga: "...del tratamiento a que se refiere la presente ley.", para que no se produzca una redundancia.

**Sr. Presidente.** — ¿Está de acuerdo, senador Yoma?

**Sr. Yoma.** — Sí, estoy de acuerdo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: ya que estamos por mejorar este acápite denominado "Titular de los datos", creo que deberían suprimirse los términos "ciudadano argentino o extranjero", porque la Constitución no distingue entre unos y otros, sino que se refiere a toda persona.

Por ello, propongo que el texto diga: "...toda persona física o persona de existencia ideal...".

**Sr. Presidente.** — ¿Está de acuerdo el señor presidente de la comisión?

**Sr. Yoma.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 2° con las modificaciones sugeridas por los señores senadores por La Rioja y por Catamarca y aceptadas por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 2°. Se registraron 40 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 3°.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 3°. Se registraron 41 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.

— Se enuncia el artículo 4°.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Hay una modificación propuesta por el señor senador Usandizaga, en su pro-



yecto, y aceptada por la comisión. Es la siguiente: sustituir la expresión "de oficio", en el punto 5. del artículo 4º, por la fórmula: "por el responsable del archivo o base de datos".

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 4º. Se registraron 42 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 5º.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: propongo una sola modificación con relación al punto c), donde dice "... fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono". Es más correcto decir "domicilio", en lugar de "dirección".

**Sr. Presidente.** — ¿Está de acuerdo el señor presidente de la comisión?

**Sr. Yoma.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: el artículo 5º, punto 2, dice: "No será necesario el consentimiento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes accesibles al público".

**Sr. Presidente.** — Sí. Ahí, usted propone que diga: "acceso irrestricto".

**Sr. Villarroel.** — Así es. Propongo que diga: "... de fuentes de acceso público irrestricto". Porque, por ejemplo, en el caso de datos relativos al estado civil, cuando alguien ha reconocido un hijo, no se ve por qué cualquiera puede recabar esa información y difundirla.

**Sr. Presidente.** — Senador Yoma: el señor senador por Catamarca se refiere a que las excepciones no abran el camino a la profundidad de penetración de quien quiera ingresar en los datos.

Con respecto a la expresión "fuentes accesibles", sostiene el senador Villarroel — lo sostuvo hoy en su exposición en general — que, efectivamente, desde el punto de vista técnico-jurídico hay muchas fuentes accesibles pero no todas son de acceso irrestricto.

Por ello, el senador por Catamarca propone que se agregue el concepto de que los datos se obtengan de fuentes de acceso irrestricto al público. ¿Está de acuerdo?

**Sr. Yoma.** — Sí.

**Sr. López.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Sí, señor senador López.

**Sr. López.** — Señor presidente: la modificación que voy a proponer respecto de este artículo no es mía pero la he leído en algunas de las observaciones efectuadas en las disidencias parciales impresas.

El punto 1 del artículo en consideración dice al final de su primer párrafo "... que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare...".

Alguien propuso que dijera: "... que deberá constar por escrito o por otro medio fehaciente..." y no "... por otro medio que se le equipare...".

Pongo esta propuesta a consideración de la comisión.

**Sr. Presidente.** — ¿Señor senador Yoma...?

**Sr. Yoma.** — No aceptamos esta propuesta, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — En realidad, el término "equipare" cubre la expresión "fehaciente".

**Sr. Yoma.** — Así es.

**Sr. Presidente.** — Porque el consentimiento expreso constituye una equiparación fehaciente.

**Sr. Yoma.** — Así es.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 5º con las dos modificaciones propuestas, la del señor senador por La Rioja y la del señor senador por Catamarca, que fueron aceptadas por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 5º. Se registraron 40 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

— Se enuncia el artículo 6º.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: en el inciso a) luego de "destinatarios" habría que agregar "o clase de destinatarios".

**Sr. Presidente.** — Si no hay otra observación, se va a votar el artículo 6º con la modificación formulada por el señor senador por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 6º. Se registraron 42 votos a favor y 2 en contra.

— Se enuncia el artículo 7º.

**Sr. López.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente: voy a sostener la prohibición del tratamiento de datos sensibles. Considero que en este artículo debería establecerse dicha prohibición, dejándose solamente el inciso 1.

Quiero saber lo que sucederá cuando algún organismo o banco de datos público o privado —por cualquier fin específico— pregunte por la preferencia sexual de un individuo.

No sé cómo van a ser considerados los datos sensibles. En consecuencia me parece preferible avanzar sobre principios más claros y prohibir el tratamiento de datos sensibles. Yo no sé si en algunos registros públicos, viejos o nuevos, todavía registran antecedentes de esta índole, como por ejemplo cuáles son las convicciones filosóficas o religiosas de un individuo o información referente a su salud.

**Sr. Yoma.** — No aceptamos la propuesta.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 7º, texto originario.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 7º. Se registraron 37 votos a favor y 7 en contra.

—Se enuncia el artículo 8º.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: podría agregarse al final del artículo —ya que se trata de datos relativos a la salud— y siguiendo la filosofía del proyecto, “respetando los principios del secreto profesional”.

Considero que en este caso también habría que hacer referencia a este principio.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: es atinado el agregado, pero si se adopta el secreto profesional y se da el caso de una enfermedad que tiene que ser conocida, creo que el pensamiento va a ser dubitativo.

La cuestión quedaría un poco en el aire, porque si pedimos datos acerca de la capacidad física o psíquica de un individuo y el secreto profesional lo impide, vamos a estar anulados para saber cuál es el padecimiento que pueda tener.

**Sr. Presidente.** — ¿Acepta el presidente de la comisión la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja?

**Sr. Yoma.** — Sí.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 8º con la modificación formulada por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 8º. Se registraron 41 votos a favor y 3 en contra.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: quiero aclarar al señor senador Avelín que las normas del secreto profesional ya contemplan la situación por el planteada.

—Se enuncia el artículo 9º.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: por razones formales, en el inciso 2, en lugar de “No se deben registrar datos de carácter personal...”, propongo que se coloque: “Queda prohibido registrar datos de carácter personal...”, porque es mucho más categórico.

**Sr. Presidente.** — Señor senador Yoma: ¿acepta la propuesta de modificación formulada por el señor senador por La Rioja?

**Sr. Yoma.** — Sí, considero que es una mejor redacción.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja y aceptada por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 9º. Se han registrado 42 votos por la afirmativa y dos por la negativa.

—Se enuncia el artículo 10.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — En este caso, la comisión acepta las modificaciones y disidencias que plantearon los señores senadores Fernández Meijide, Usandizaga y Villarroel. Por tal razón, propongo que el inciso 2 del artículo 10 diga así: “El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.”

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 10 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 10. Se han registrado 42 votos por la afirmativa y dos por la negativa.

— Se enuncia el artículo 11.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Voy a sugerir un agregado al acápite *d*) del inciso 3 del artículo 11. Concretamente, propongo que su redacción comience de la siguiente manera: "Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa...".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Inclusive, podría suprimirse la expresión "...entre dependencias...", y se podría colocar "Se realice entre órganos del Estado en forma directa...".

**Sr. Presidente.** — Entonces, la redacción del acápite *d*) del inciso 3 del artículo 11 comenzaría así: "Se realice entre órganos del Estado en forma directa...".

Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas por los señores senadores por Formosa y por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 11. Se han registrado 37 votos por la afirmativa y 7 por la negativa.

— Se enuncia el artículo 12.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — En el inciso 1 del artículo 12, propongo que en lugar de: "Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables...", se coloque: "Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados...", como una manera de salvar las rela-

ciones de nuestro país con los países del Mercosur y con otras naciones del mundo con las que tenemos relaciones comerciales pero en las que no existen similares mecanismos de protección.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Había sugerido al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se agregara, al final del inciso 1 del artículo 12 el siguiente párrafo: "La reglamentación podrá excluir a los países miembros del Mercosur cuya legislación no prevea las garantías de esta ley". Pero de acuerdo con lo que se acaba de manifestar, quedaría salvado ese aspecto.

**Sr. Presidente.** — Claro. Ese es el objetivo, pero sin que ello implique un conflicto.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — El asunto del Mercosur está prácticamente salvado en el inciso *d*), que dice: "Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;". No creo que no tengamos tratados firmados con los restantes países del Mercosur, de manera que prácticamente ese asunto está salvado.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Mejjide.** — En el inciso *b*) del artículo 12, al tratarse la transferencia internacional de datos por investigaciones epidemiológicas, sugiero, si la Comisión estuviera de acuerdo, que se agregara: "siempre y cuando se asegure la inidentificabilidad de sus titulares". Es decir que sirva para fines estadísticos pero que no se pueda identificar a la persona.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — La inquietud de la señora senadora está contemplada en un inciso de un artículo anterior. Concretamente, el inciso *e*) del artículo 11.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Este artículo está referido a la cesión de datos en el orden nacional. Lo que propondría, complementando la observación de la señora senadora por la Capital, es que estos mismos requisitos se exijan en el caso de transferencias del campo internacional. Es decir que internacionalmente se apliquen las mismas condiciones que exige el artículo anterior con respecto a la cesión de datos en la órbita nacional.

Podría decir "en los términos del inciso e) del artículo anterior".

**Sr. Presidente.** — Exactamente. Podría decir "en los términos del inciso e) del artículo anterior". ¿Le parece bien, señora senadora?

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente: de acuerdo con lo que manifesté en mi exposición en general, voy a solicitar que se suprima el apartado e) del inciso 2 del artículo 12 porque, en todo caso, está comprendido en los tratados internacionales de los que la Argentina forma parte ya que en aquellos que se hicieron para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico la cesión de datos está autorizada.

Lo que queremos evitar es que haya en esta materia una decisión independiente del organismo de inteligencia sin conocimiento del Poder Ejecutivo o de los órganos encargados de las relaciones exteriores.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — La Comisión no acepta lo sugerido por el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con las modificaciones previstas y antes expresadas.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 12. Se han registrado 37 votos por la afirmativa y 7 votos por la negativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 13.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 13. Se han registrado 41 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.

— Se enuncia el artículo 14.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: en la mesa de la Presidencia figuran las propuestas de modificación a los artículos 14 y 33. Sin embargo, ellas serán sustituidas por la propuesta de modificación que hará la señora senadora Fernández Meijide cuando se considere el artículo 33. En consecuencia, no habría modificaciones en este artículo y sí en el 33.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: para poner en consonancia el apartado 1º del artículo 14 con el artículo 43 de la Constitución Nacional, debe hacerse una pequeña aclaración. Donde dice "datos públicos o privados" debería decir "datos públicos y de los privados..." porque si no, con la conjunción original, queda que solamente pueden pedirse de los archivos públicos cuando estén destinados a proveer informes. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece la separación cuando dice: "...que consiste en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes..."

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: simplemente, deseo hacer una corrección formal. Me parece que los datos no son públicos, los que son públicos son los bancos. En consecuencia, debería decir...

**Sr. Presidente.** — Dice "bancos de datos"...

**Sr. Cafiero.** — ... "bancos públicos o privados de datos...". No sé si está claro.

**Sr. Presidente.** — Es que "banco de datos", en realidad, es una frase descriptiva de una cosa. Está bien, pero, en todo caso, es un problema hermenéutico a discutir.

**Sr. Menem.** — Podría decir "bancos de datos" y ya se entiende que comprende a los públicos y privados.

**Sr. Presidente.** — Señor senador Villarroel: el senador Menem propone una idea que me parece muy razonable. La expresión "bancos de datos" —testando "públicos o privados"— incluye la totalidad; mucho más cuando esta discusión se ha dado en el recinto.

**Sr. Villarroel.** — Sí, la idea es mucho más comprensiva, pero lo que pasa es que los titulares de bancos de datos que no están destinados a proveer informes van a poner el grito en el cielo.

**Sr. Presidente.** — Ese es otro tema.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Maglietti.** — Si bien estoy de acuerdo con la sanción de la Cámara de Diputados, a título de colaboración propongo que lo redactemos tal como dice la Constitución: "registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes". De esta forma diríamos lo mismo que señala la Constitución.

**Sr. Presidente.** — Claro, pero con decir "bancos de datos" incluimos a todos.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Ulloa.** — Mi propuesta es similar, señor presidente: que después de “bancos de datos” pongamos entre comas la expresión “públicos o privados”. De esta forma queda perfectamente claro que los públicos no son los datos sino los bancos.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** — La propuesta del senador Menem es muy clara, ya que el concepto “bancos de datos” incluye a todo el mundo. No existen bancos de datos que no sean otra cosa que públicos o privados.

**Sr. Berhongaray.** — Hay bancos de datos privados que no tienen por objeto la distribución de información.

**Sr. Presidente.** — Por supuesto.

Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: me complace anunciar a esta Honorable Cámara que estoy de acuerdo con el senador Maglietti.

**Sr. Maya.** — Se levanta la sesión. (*Risas.*)

**Sr. Yoma.** — El espíritu de lo que dijo el señor senador Villarroel es que utilicemos la fórmula constitucional, que creo es lo más correcto. La Constitución dice expresamente lo que acaba de leer el senador Maglietti. Entonces, para ser estrictos con la norma constitucional incluyamos la coma.

**Sr. Presidente.** — ¿Están todos de acuerdo con seguir la norma constitucional?

—Asentimiento.

**Sr. Maya.** — Nos llena de preocupación, señor presidente. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 14, siguiendo la tesis propuesta por el senador Maglietti.

—La votación resulta afirmativa

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 14 por unanimidad.

—Se enuncia el artículo 15.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: en el punto 3, en lugar de decir “El acceso a opción del titular, podrá instrumentarse”, debería decir: “La información, a opción del titular, podrá instrumentarse”. Ello es así porque este artículo se refiere al contenido de la información. El derecho de acceso está contemplado en el artículo 14.

En el artículo en consideración se establece de qué forma debe instrumentarse la información a opción del titular.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. Yoma.** — En todo caso es el acceso a la información, que es en realidad lo que se instrumenta, y no la información.

**Sr. Menem.** — Entonces habría que remitir esto al artículo 14. Creo que el presente artículo se refiere a la información.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Yo también creo que se está refiriendo a la información, dado que en los dos primeros supuestos se hace referencia a ella. Además, el título del artículo es “Contenido de la información”.

**Sr. Presidente.** — Señor senador Yoma: además de haber coincidido con el senador Maglietti, ¿va a coincidir en este caso con el senador Menem?

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: como el senador Maya me dice al oído que tratemos el tema de Saadi, no pude escuchar lo que estaban diciendo los señores senadores. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — El senador Aguirre Lanari está de acuerdo con el senador Menem...

**Sr. Yoma.** — Y... bueno. Si hay tanto consenso, acepto la modificación. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 15 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado 41 votos a favor y 3 en contra.

—Se enuncia el artículo 16.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: quiero proponer una corrección en el plazo establecido en el inciso 2 del artículo 16. Donde dice “máximo de cinco días” propongo que diga: “diez días hábiles de recibida la denuncia o advertido el error o falsedad”.

**Sr. Presidente.** — Señor senador Yoma: antes de pronunciarse con relación al pedido que acaba de formular el señor senador Branda respecto del inciso 2, le solicito que comente la modificación que, según tengo anotado, quiere proponer con referencia al inciso 1.

**Sr. Yoma.** — El inciso 1 del artículo 16 dice: “Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizados, suprimidos...”. Propongo que antes de “suprimidos” se exprese “y, cuando corresponda,”.

**Sr. Presidente.** — Muy bien. Y en cuanto al inciso 2, se propone pasar de un plazo de cinco días a diez días.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Creo que el verificador, si realmente verifica y no corrige y no tiene plazo, puede quedar *sine die*, sin que pueda ratificar o anular si ha inducido el error.

**Sr. Presidente.** — ¿El señor senador por Entre Ríos quiere decir algo sobre esto?

**Sr. López.** — No termino de entender el inciso 5.

**Sr. Presidente.** — Espere que terminemos con el inciso 2, así me contesta el presidente de la Comisión, ¿cinco o diez días?

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Me parece que una vez detectado el error o la falsedad hay que hacerlo cuanto antes. No entiendo por qué establecer diez días si fue consensuado que fueran cinco días.

**Sr. Villarroel.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca. ¿Usted también quiere hablar sobre el inciso 2? Aclaro a los taquígrafos que es el inciso 2 del artículo 16.

**Sr. Villarroel.** — Sería conveniente leer cómo quedaría el inciso 2. Acá la cuestión no es el lapso, es decir, que sean cinco, diez o quince días. Dice que el responsable debe proceder a rectificación, etcétera, etcétera, en el plazo máximo de cinco días hábiles de verificado el error o falsedad. Pero, ¿cuándo empieza a correr el plazo?

**Sr. Presidente.** — Eso es lo que planteó Branda.

**Sr. Villarroel.** — Por eso pedía que se leyera. Que no sea simplemente una modificación de plazo, sino que se fije que el plazo se inicia desde que se pide...

**Sr. Branda.** — La redacción sería la siguiente: “El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, cancelación o actualización [...] en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la denuncia o advertido el error o falsedad”.

Ahí sí le damos un plazo cierto porque tiene un punto de partida.

**Sr. Presidente.** — ¿Están de acuerdo? Ahora sí, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. López.** — Voy a proponer que se suprima una parte del inciso 5 porque realmente no lo comprendo, salvo que me lo expliquen. Dice así: “La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado...”. Es decir, el hombre procede a la acción de hábeas data para que le cancelen un dato. Quién mejor que él para verificar si quiere que se le cancele el dato. ¿Cuál es el caso? Porque si fuera de terceros, lo dejamos. Eso yo lo respeto, pero dice “del afectado”. Por eso propongo que quede: La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.

**Sr. Presidente.** — Si el presidente de la Comisión está de acuerdo se procederá a la votación.

**Sr. Yoma.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 16 con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 16. Se han registrado 41 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra para hacer una aclaración.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Cuando empezó la votación, el señor presidente dijo que se necesitaban 37 votos. Pero para corregir la sanción necesitamos dos tercios. Para 44, no se requieren 37.

**Sr. Presidente.** — Pero 37 es por la índole de la ley.

**Sr. Menem.** — Lo que necesitamos es nada más que dos tercios de los miembros presentes. Y si somos 43, necesitamos 29 votos.

Yo lo digo para que no se discuta después y quede claro ahora cuál es la mayoría que se necesita para corregir la sanción de la Cámara de origen.

**Sr. Presidente.** — Efectivamente, el secretario parlamentario me dice que no eran 37 votos como anteriormente me había dicho. (Risas.)

—Se enuncia el artículo 17.

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: propongo que este artículo diga que se trata de los responsables o usuarios de bancos públicos de datos. Es difícil imaginar una instancia en que un banco privado de datos pueda alegar la defensa de la Nación y el orden y la seguridad pública para aplicar esta excepción. Entiendo que este artículo debería comprender solamente a los bancos públicos de datos.

**Sr. Presidente.** — ¿Acepta la Comisión la propuesta?

**Sr. Yoma.** — Se acepta la modificación propuesta.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: voy a proponer otra redacción a este artículo, de acuerdo con lo que informó cuando se hizo la consideración en general.

En principio, en la Comisión se había aceptado nuestra propuesta. No sé por qué después se cambió. Por eso voy a insistir en esta redacción: Los titulares de los ficheros de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales y organismos de inteligencia podrán denegar el acceso, la rectificación y la cancelación de los datos de carácter personal obrantes en los mismos en el supuesto de que tales acciones puedan ocasionar un daño significativo a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado. Deberán en cualquier caso permitir el acceso al particular que estuviera sujeto a experimentar restricciones actuales en sus derechos como consecuencia de los datos obrantes en los ficheros en cuestión, con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso, supuesto éste en que deberá brindarse tal acceso en oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa. Toda resolución de denegatoria debe ser fundada y notificada al afectado. El afectado que en forma arbitraria se le negare el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente podrá interponer dentro del décimo día de notificada la denegatoria la acción de amparo prevista por la presente ley.

Nosotros ya fundamentamos por qué creíamos más adecuado el texto que propuse. Consideramos que el concepto tal como está redactado en el dictamen impreso es muy amplio. En este sentido pensamos que debemos hacer prevalecer el interés del individuo sobre intereses que aparecen un poco generalizantes cuando no se

trata de situaciones concretas debidamente establecidas que hacen a la seguridad o a la defensa.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: considero que en el artículo se expresa de forma muy vaga lo relacionado con la defensa nacional y el orden. No se establecen límites a las decisiones que se puedan tomar, quedando al arbitrio de quienes deciden, determinar qué se comprende por orden y seguridad nacional.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: quiero señalar que este tema se debatió profundamente en la Comisión. Se hicieron consultas a distintos organismos relacionados con la defensa nacional. Nos parece correcto mantener la actual redacción del artículo teniendo en cuenta la modificación propuesta por el senador Cafiero.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: quiero aclarar que la norma exige que la resolución sea fundada. Además, queda el recurso de que el juez pueda disponer lo contrario a lo que diga el titular del registro. Entonces, que quede claro que la resolución no puede ser hecha en forma arbitraria. En primer lugar, tiene que ser fundada. Y si no está de acuerdo, el juez puede disponer lo contrario. Para eso está la acción de hábeas data. Esa es la inteligencia con la que aprobamos este artículo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital para una acotación, porque no puede hacer uso de la palabra dos veces.

**Sra. Fernández Meijide.** — Pido que se reflexione sobre la redacción de este artículo.

¿Cómo puede un juez determinar si corresponde o no, si carece de la información?

**Sr. Presidente.** — El presidente de la Comisión mantiene su posición.

En consecuencia, se va a votar el artículo 17 con el agregado propuesto por el señor senador por Buenos Aires.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado siete votos por la negativa y treinta y cuatro votos por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 18.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado siete votos por la negativa y treinta y tres votos por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 19.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado cuatro votos por la negativa y treinta y seis votos por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 20.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado cuatro votos por la negativa y treinta y seis votos por la afirmativa.

—Se enuncia el artículo 21.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — En el inciso e) del punto 2 hemos receptado una modificación propuesta por el señor senador Usandizaga. La redacción del inciso sería: "Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos".

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 21 con la modificación expresada por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado dos votos por la negativa y treinta y nueve votos por la afirmativa.

—Se enuncia el artículo 22.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: el punto 4 del artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "La cesión de datos almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos, no podrá efectuarse a archivos, registros o bancos de datos privados sin el consentimiento del titular de los datos o en virtud de una ley que lo autorice".

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 22, con la modificación propuesta en el punto 4 por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado tres votos por la negativa y treinta y ocho por la afirmativa.

—Se enuncia el artículo 23.

**Sra. Fernández Meijide.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Voy a proponer que, en el inciso 2, luego de las palabras "...legalmente asignadas a aquellos" se agregue: "...cuando exista peligro real y cierto..." a fin de evitar el estado de sospecha permanente. Una de las cosas que queremos que definitivamente desaparezca de nuestro país es ese pasado en el cual todo el mundo era sospechado. Cuando existe un peligro real y cierto, la situación es diferente.

**Sr. López.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente: mantengo lo que he manifestado en el tratamiento en general en el sentido de que directamente debe suprimirse el artículo 23 o, en su caso, debe aprobarse la redacción que hemos propuesto en la Comisión de Derechos y Garantías, que es la siguiente: "Los registros de bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e inteligencia que contengan datos de carácter personal, quedarán sujetos al régimen general de la presente ley".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: no aceptamos la modificación propuesta.

Este tema fue también profundamente debatido y consultado con organismos especializados, y existen aspectos en una investigación en los cuales, a pesar de no existir un peligro real, cierto o inminente, se requiere un determinado tratamiento. Por lo tanto, mantenemos la redacción tal como está.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 23 con su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado ocho votos por la negativa y treinta y cuatro por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 24.

**Sr. Presidente.** — Se han registrado 38 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

—Se enuncia el artículo 25.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa, del bloque Justicialista.



**Sr. Branda.** — Señor presidente: en el punto 2. del artículo 25 propongo que en la parte final se diga: "...por un período de hasta cinco años". Así se fija un plazo máximo y no mínimo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. Yoma.** — Está bien, se acepta la propuesta.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25 con el agregado propuesto por el señor senador por Formosa.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado 37 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.

— Se enuncia el artículo 26.

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: propongo que se agregue un punto 5., que diga: "La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios".

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado 34 votos por la afirmativa y 8 por la negativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 27 a 30.

**Sr. Presidente.** — Quedan aprobados. Se han registrado 37 votos por la afirmativa y 6 por la negativa, en cada uno de los artículos.

— Se enuncia el artículo 31.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: en el final del punto 2. tendría que agregarse: "...garantizando el principio del debido proceso".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión.

**Sr. Yoma.** — Se acepta el agregado propuesto.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 31 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja, aceptada por la Comisión.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado. Se han registrado 36 votos por la afirmativa y 7 por la negativa.

— Se enuncia el artículo 32.

**Sr. Villarroel.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: voy a sugerir una modificación en el apartado 1 del punto 1., que dice: "Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar maliciosamente datos falsos en un archivo de datos de carácter personal".

"Maliciosamente" es una calificación o una *aliquid* del dolo en las figuras penales. No entiendo por qué se va a exigir ese *aliquid* o elemento del ánimo que es de prueba prácticamente diabólica, cuando de lo que se trata es de reprimir a quien a sabiendas hace insertar un dato falso.

Entonces, incluso para seguir la técnica del Código Penal, que cuando se trata de hechos de falsedad se expresa de esta manera, sugiero que la norma quede redactada así: "Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas", en lugar de "maliciosamente". De manera que quedaría: "Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos de carácter personal."

**Sr. Presidente.** — Señor senador Yoma: la hermenéutica parece acertada. En el inciso 1, acápite 1, se hará la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca. ¿En el otro acápite también?

**Sr. Villarroel.** — Sí, en el mismo artículo, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — ¿En el mismo inciso?

**Sr. Villarroel.** — Lo mismo para el punto 2., cuando se refiere a la pena de 6 meses a 3 años: se suprime "maliciosamente" y se reemplaza por "a sabiendas".

También en el inciso 2, cuando se refiere al artículo 157 bis del Código Penal. El texto dice: "Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años el que maliciosamente...".

**Sr. Secretario Piuzei.** — Se suprime “maliciosamente”.

**Sr. Villarroel.** — Se suprime lo de “maliciosamente e ilegítimamente”.

**Sr. Presidente.** — En los dos incisos del artículo y en los dos acápites del primer inciso se modificará “maliciosamente” por “a sabiendas”.

**Sr. Villarroel.** — Exacto.

**Sr. Presidente.** — ¿Está de acuerdo el miembro informante?

**Sr. Menem.** — Debería dejarse “ilegítimamente” en el inciso 2.

**Sr. Presidente.** — Ese término queda. Solamente se reemplaza el término “maliciosamente”.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 32 con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 32. Se han registrado 39 votos a favor y 4 en contra.

— Se enuncia el artículo 33.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Cedo la palabra a la senadora Fernández Meijide, que va a hacer una propuesta.

**Sra. Fernández Meijide.** — El inciso 2 del artículo 33 dice: “Podrá ser ejercida por el afectado y sus sucesores, por sí o por intermedio de apoderado”.

He tenido noticias de que en el caso de familiares de gente desaparecida durante la dictadura que pidieron el hábeas data, este recurso les fue denegado. Hubo jueces que desaconsejaron el recurso de amparo. Hubo votos en disidencia; hoy tuve en mis manos un voto en disidencia de la jueza Marta Herrera.

Creemos que habría que ampliar esta cláusula para que quedara más clara. Solicito al presidente de la comisión que él lea la redacción final —él toma mis palabras—, para que quede bien redactada; no sé cuál será el texto que propondrá la comisión.

Sugiero: “...y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por un período de 5 años y posteriores a su deceso, cuando el deceso esté probado”. Tal vez sería mejor quitar la alusión a los 5 años, porque representaría un límite.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — A continuación de la redacción original.

**Sr. Presidente.** — Sí.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca, para este mismo tema.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: estoy de acuerdo con lo que acaba de proponer la señora senadora por la Capital, pero respetuosamente sugiero no cambiar la norma sino redactarla un poco más claramente.

Creo que tal como está redactado este artículo 33, incluso como acto lingüístico, no resulta muy inteligible. La redacción no respeta la concordancia, desconoce algunas reglas de sintaxis, equipara casos distintos. Dicho esto con ánimo sincero de colaboración.

Propongo el siguiente texto para el artículo 33, que lleva el título de “Procedencia. Legitimación activa”: 1. La acción de hábeas data procederá: a) para tomar conocimiento de los datos de carácter personal almacenados en archivos, registros y bancos de datos públicos, o en los privados destinados a proporcionar informes; b) para exigir la supresión de los datos falsos o sensibles, o la confidencialidad de estos últimos; c) para exigir la rectificación o actualización de los datos inexactos o desactualizados.

2. Podrá ser ejercida por el titular de los datos o por sus sucesores (agregando lo que acaba de proponer la señora senadora). Cuando la acción sea iniciada por personas de existencia ideal, deberá ser ejercida por sus representantes legales o por apoderados.

3. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el defensor del pueblo.

**Sr. Alasino.** — Está mal la metodología.

**Sr. Presidente.** — El señor senador propone una metodología distinta para la redacción del artículo 33.

**Sr. Yoma.** — La comisión no acepta, pero sí la propuesta de la señora senadora por la Capital Federal, a continuación de la actual redacción.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 33 con la modificación propuesta por la señora senadora por la Capital Federal, y aceptada por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 33. Se han registrado seis votos por la negativa y treinta y siete por la afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 34.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 34. Se han registrado cuatro votos por la negativa y cuarenta por la afirmativa.

—Se enuncia el artículo 35.

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: en este artículo, sobre la legitimación pasiva, propondría que queden exceptuadas las empresas periodísticas.

**Sr. Presidente.** — El señor miembro informante va a proponer una modificación en el artículo 39, que se incluya "fuentes de información periodística". Se trata de una modificación al inciso 1, que se encuentra en Presidencia y que obviamente usted no tiene por qué saber.

**Sr. Cafiero.** — Muy bien.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 35 con su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 35. Se han registrado seis votos por la negativa y treinta y siete por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 36.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 36. Se han registrado siete votos por la negativa y treinta y seis por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 37.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 37. Se han registrado siete votos por la negativa y treinta y seis por la afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 38.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 38. Se han registrado cuatro votos por la negativa y treinta y nueve por la afirmativa.

—Se enuncia el artículo 39.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: hemos conversado bastante sobre este artículo con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, el señor senador Romero Feris, y hay una propuesta en el punto 1 del artículo 39. Consiste en eliminar la palabra "secreto" y reemplazar "el supuesto" por "el caso". Quedaría de la siguiente manera: "Los registros, archivos o bancos de

datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodística".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical.

**Sr. López.** — Señor presidente: en consonancia con lo que sostuve en la exposición en general del proyecto, considero que hay un defecto de redacción, porque en la última parte del inciso 2 se habla de la resolución judicial que insista con la remisión de los datos. Quiere decir que hay un primer requerimiento judicial, que puede ser resistido por el banco de datos en cuestión. Por lo tanto este artículo requiere una modificación para que expresamente el banco de datos esté obligado ante el primer requerimiento judicial a mandar la información al juzgado —los datos que sean requeridos— y es el juez, no el banco de datos, el que va a apreciar si en realidad está contemplada una excepción legal.

En ese sentido, quiero hacer una reflexión para que el señor presidente de la comisión la tenga en cuenta y, en su caso, redactáramos nuestra propuesta.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: creo que la actual redacción contempla exactamente lo que plantea el señor senador.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: se trata de una cuestión meramente formal pero, tal vez, necesaria.

Cuando se habla de registros, archivos o bancos de datos privados, yo entiendo que a lo que se pretende hacer referencia es a los registros, archivos o bancos privados de datos. Es decir, la calificación de privado es con respecto a los archivos y no con respecto a los datos.

**Sr. Presidente.** — Sí.

Lo que ocurre es que desde hoy estamos discutiendo que "banco de datos", en sí, constituye una denominación. No es que se refiere a los datos sino al banco de datos.

**Sr. Cafiero.** — Al banco de datos.

**Sr. Presidente.** — Está suficientemente aclarado desde el comienzo del debate.

**Sr. Cafiero.** — ¿Usted piensa que es así?

**Sr. Presidente.** — Sí.

**Sr. Cafiero.** — Entonces, que por lo menos conste en acta.

**Sr. Presidente.** — Sí, sí. Está muy claro. Es una interpretación legítima.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39 con la modificación propuesta por el señor presidente de la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 39. Se registraron seis votos en contra y treinta y siete votos a favor.

—Se enuncia y aprueba el artículo 40.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 40. Se registraron dos votos en contra y cuarenta y un votos a favor.

—Se enuncia el artículo 41.

**Sr. Presidente.** — Hay una modificación formal.

En el inciso 2 en lugar de “declararla” debe figurar “declarada”.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar con la modificación propuesta por el señor senador Yoma, que acabo de enunciar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 41. Se registraron dos votos en contra y cuarenta y uno a favor.

—Se enuncia y aprueba el artículo 42.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 42. Se registraron tres votos en contra y cuarenta a favor.

—Se enuncia el artículo 43.

**Sr. Berhongaray.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: en consonancia con lo que dijimos, proponemos la siguiente redacción: “Asígnase al defensor del pueblo de la Nación la función de órgano de aplicación de la presente ley”.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente: quería hacer una referencia en el mismo sentido, nada más que con otra redacción.

Este es un punto específico de la norma que nosotros hemos considerado en el tratamiento en general. Hace a la independencia del órgano de control y a su ubicación en el organigrama del Estado que, consideramos, no debemos declinar

para deferir la reglamentación al Poder Ejecutivo

Como lo hacen las leyes de las legislaciones más avanzadas, particularmente la de Francia que crea un órgano mixto, y porque tengo mandato de otros senadores que han firmado un dictamen en disidencia parcial de la Comisión de Derechos y Garantías, voy a sostener una modificación a este artículo con el siguiente texto: “Créase la Comisión de Datos Personales como organismo autónomo, integrada de la siguiente forma: un miembro elegido por la Cámara de Diputados de la Nación, un miembro elegido por el Honorable Senado de la Nación, un miembro designado por el Poder Ejecutivo nacional, un miembro elegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y un miembro de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas designado por su titular. La Comisión Nacional de Datos Personales funcionará con fondos asignados con cargo al Ministerio de Justicia.”

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: este tema también se discutió en comisión y la redacción propuesta por el señor senador Berhongaray transformaría al defensor del pueblo en un órgano administrativo, cuando es quien controla al organismo administrativo.

**Sr. Berhongaray.** — No es así.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 43 con la modificación propuesta por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 43. Se registraron seis votos en contra y treinta y seis votos a favor.

—Se enuncia el artículo 44.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: propongo la siguiente redacción: “Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el presente régimen dentro del plazo que a tal efecto establezca la reglamentación”.

Esto es a efectos de evitar que se establezca una diferencia entre lo existente y lo que habrá de crearse en el futuro.

**Sr. Presidente.** — ¿Está de acuerdo el señor presidente de la Comisión?

**Sr. Yoma.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 44 con la modificación propuesta por el señor senador por Corrientes y aceptada por la Comisión.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el artículo 44. Se registraron 36 votos a favor y 5 en contra.

— El artículo 45 es de forma.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup> Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: solicito que por Secretaría se ordene la inserción de mi firma, dado que no me encontraba en el país cuando se elaboró el dictamen que acaba de ser considerado.

**Sr. Presidente.** — Así se hará, señor senador.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Eduardo Menem.

## 8

### MANIFESTACIONES

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el expediente S.-2.216/96, que contiene un proyecto de comunicación de los señores senadores Sala y Mac Karthy por el que se solicita la erradicación del denominado "Hanta Virus", que afecta parcialmente al Chubut y a Río Negro.

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sala.** — Señor presidente: solicitamos la inclusión de esta iniciativa en el plan de labor, a efectos de movilizar a todos los órganos del gobierno nacional en coordinación con las provincias de Río Negro y del Chubut, ante la nueva infección que ha aparecido y que ya ha causado muertes en esa región que comprende el sur de Río Negro y el norte del Chubut, y la suspensión

incluso de las clases en las escuelas, conmoviendo a la población de esa zona.

Por ello solicito que se considere y se apruebe este proyecto —que quisiera fundamentar con más elementos, aunque no lo haré para evitar demoras—, a fin de movilizar a todas las fuerzas del Estado nacional, que ya han comenzado a dirigirse hacia esa zona.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración el tratamiento sobre tablas...

**Varios señores senadores.** — No hay quórum.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia ruega a los señores senadores que estén en las inmediaciones del recinto que contribuyan a dar quórum a efectos de tratar este proyecto, considerando la importancia que tiene.

— Se llama para formar quórum.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: este es un tema importante que no puede pasar desapercibido. Considero que debe existir quórum para que podamos aprobarlo, porque no es nada fácil ni nada alegre aceptar que esté muriendo mucha gente debido a este problema epidémico que está ocurriendo en la Patagonia.

El "Hanta Virus" es sumamente importante. La epidemia es producida por los roedores y la enfermedad se transmite al ser humano a través de la saliva, de las heces, de la orina.

El contagio se produce por la promiscuidad, así como también a través de los alimentos, del agua, por las heridas, por las membranas conjuntivas, por vía respiratoria y digestiva, y produce una serie de síntomas que son muy graves. Me refiero a sintomatología que exhibe insuficiencia respiratoria y renal, que lleva a la muerte en forma inmediata.

Considero que es importante que aprobemos este proyecto, que será bueno para la salud de la gente y evitará una cuestión epidemiológica bastante grave en la zona afectada.

Por lo expuesto, espero que haya quórum para tratar este proyecto y dar una solución integral al problema.

Es cierto que la enfermedad no se contagia de hombre a hombre, pero se transmite desde los roedores —ratas, ratones—, que viven en madrigueras y que producen esta afección tan grave para la población.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sala.** — Señor presidente: quiero destacar y reconocerle al señor presidente del bloque de

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.